

Informe de connotación Fiscalía General de la Nación

Eduardo Montealegre Lynett
2012 - 2016



Informe de connotación Fiscalía General de la Nación
Eduardo Montealegre Lynett
2012 - 2016

Presentación	3
Caso Jaime Garzón	4
El carrusel de la Contratación	10
Investigaciones contra el exalcalde Samuel Moreno	15
Caso Álvaro Cruz	17
Alcaldesa de Florencia	17
El desfalco a la DIAN	18
Guerra al contrabando	20
Desplome de Interbolsa	22
El proceso Fondo Premium	25
Proceso Torres Cortes	25
Los computadores de las FARC.....	28
Parapolítica	28
El hacker	28
Las chuzadas del DAS	29
Investigaciones de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de	
Justicia sobre el DAS	30
Falsos positivos	39
Homicidios cometidos por agentes del Estado	39
Ejecuciones extrajudiciales	40
Muerte del grafitero	66
La porrista de Millonarios	66
Caso Jineth Bedoya	66
Goldex	66
PetroTiger	70
Asesinato de los niños en Caquetá	72
Periodista Pitalito	73
Falsas víctimas de Mapiripán.....	73
Enilce López, La Gata	74
Los Canarios, paseos millonarios	76
Violencia contra las mujeres	79
Víctimas de ataques con agentes químicos	88
Jueces Barranquilla	91
Entrega de cadáveres de desaparecidos	93
Atención a víctimas y usuarios	96

Presentación

El despacho del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, le hizo seguimiento, mes a mes, a más de 150 investigaciones, clasificadas como procesos de connotación nacional, expedientes sobre los cuales la opinión pública tenía un interés especial.

Más allá del simple monitoreo permanente, el despacho del Fiscal buscó que, dentro de la independencia de los delegados e investigadores, estos procesos logran una mayor dinámica y los encargados de sacarlos adelante tuvieran todos los recursos humanos y técnicos para desarrollar su misión legal y constitucional.

Varios de estos casos se trabajaron en contexto, se priorizaron y otros se desprendieron de investigaciones base.

Sobre estas investigaciones, la prensa preguntaba casi a diario. La opinión pública exigía resultados para establecer la verdad lo antes posible y buscar el castigo de los presuntos responsables.

En la lista figuran procesos connotados, como el millonario carrusel de la contratación en Bogotá, el fraude a la DIAN usando el IVA, expedientes por paramilitarismo, parapolítica, falsos positivos, terrorismo, desplazamiento forzado, magnicidios (Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez Hurtado, José Antequera, Bernardo Jaramillo Ossa), el cartel de los falsos testigos, las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS, el holocausto del Palacio de Justicia a manos del M-19 y la retoma a sangre y fuego por parte de las Fuerzas Armadas.

La lista sigue con expedientes por lavado de activos y corrupción de cuello blanco: Interbolsa, y el fondo premium. Violencia de género por parte de grupos guerrilleros como las FARC, el exterminio de la Unión Patriótica, delitos de alto impacto social, el suicidio del estudiante Sergio Urrego y la muerte del estudiante de la Universidad los Andes en el norte de Bogotá, entre otros radicados de interés general.

Para el monitoreo permanente de algunos de estos procesos, el Fiscal General de la Nación designó un equipo especial encargado de recoger información en diferentes despachos de la entidad, procesarla, ordenarla, clasificarla, seguirla y finalmente rendir informes sobre la evolución y problemas de cada caso.

Pero además de estos radicados, los directivos de la Fiscalía mantuvieron un monitoreo sobre cientos de expedientes más, fundamentalmente por ser catalogados de alto impacto nacional y sobre los cuales la opinión pública exigía información de manera cotidiana. Algunos de estos procesos no pueden ser mencionados en el siguiente informe por reserva sumarial, por su momento procesal, y porque los fiscales aún adelantan acciones en torno a ellos.

Caso Jaime Garzón

Quince años después, la justicia logró orientar por el camino correcto y sacar de la impunidad el asesinato de uno de los colombianos más queridos. Desde el comienzo este proceso fue desviado de manera intencional para esconder a los verdaderos responsables.

Durante más de una década el expediente fue guiado para perder su rumbo, se buscó donde no era y se siguieron pistas falsas, presuntamente, sembradas para desorientar a los investigadores y así ocultar la identidad de todos los verdaderos autores y las entidades del Estado involucrados en este crimen.

El día del asesinato, 13 de agosto de 1999, aproximadamente a las 5:45 de la mañana, JAIME HERNANDO GARZÓN FOREIRO se desplazaba en su vehículo, placa No. CRW -914, con destino a su lugar de trabajo en las instalaciones de la emisora Radionet. En el trayecto, justo cuando esperaba el cambio del semáforo, sobre la carrera 42 con calle 23, barrio Quinta Paredes en Bogotá, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, uno de los cuales le disparó varias veces con arma de fuego ocasionando la muerte de manera inmediata.

La investigación comenzó bajo El radicado No. 564. Desde el comienzo fueron acusados el máximo comandante de las auto-defensas CARLOS CASTAÑO GIL, como determinador, y los señores JUAN PABLO ORTIZ AGUDELO, alias Bochas y EDILBERTO ANTONIO SIERRA AYALA.

Casi cinco años después del crimen, en marzo de 2004, el Juez Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, conde-

nó a 38 años de cárcel a CARLOS CASTAÑO, como coautor. En la sentencia absolvió a ORTIZ AGUDELO, alias BOCHAS y a SIERRA AYALA, al considerar que no existía certeza sobre su participación en los hechos.

Posteriormente, bajo el radicado 1942, la investigación continuó, y fue vinculado JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ, ex subdirector del DAS, a quien se le impuso medida de aseguramiento, detención preventiva y luego fue acusado como determinador del homicidio de JAIME GARZÓN, el 27 de junio de 2011. Actualmente está en etapa de juicio en el Juzgado 7 Penal Especializado de Bogotá.

En este proceso fue posible compulsar copias para identificar a otros autores o partícipes, investigación que le correspondió el radicado No. 1942 A, al que fue vinculado el jefe paramilitar DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, alias DON BERNA, como coautor del homicidio de GARZÓN. Se le impuso medida de aseguramiento, detención preventiva.

Dentro de la misma investigación, la Fiscalía dispuso decretar la vinculación procesal del coronel retirado JORGE ELIÉCER PLAZAS ACEVEDO, a quien se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y el 17 de julio de 2014 se profirió en su contra resolución de acusación por homicidio.

Finalmente, con el propósito de continuar con la investigación, específicamente para esclarecer los hechos con respecto a los autores materiales del homicidio, mediante providencia del 27 de agosto de 2014, la Fiscalía decretó apertura de investigación preliminar, bajo el radicado No. 9828.

No hay que olvidar que los derechos que deben ser garantizados a las víctimas, dentro del proceso penal, son el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Las víctimas deben tener la posibilidad real de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante en delitos como en el caso JAIME GARZÓN, donde, además, se ha visto una posible estrategia de desviación de la investigación para ocultar la verdad.

En el caso concreto, con el propósito de identificar e individualizar a los autores materiales de este homicidio, la Fiscalía ha recaudado abundante material probatorio, que le permite establecer que el crimen fue cometido por miembros de la denominada banda de sicarios "La Terraza", que delinquía principalmente en Medellín, bajo el mando del máximo jefe de las autodefensas CARLOS CASTAÑO GIL.

Dicha situación se encuentra ampliamente demostrada con diversos medios probatorios, de los que se resaltan los siguientes: copia de la transcripción de un video de posible origen de la banda La Terraza y un álbum fotográfico. En estos documentos sus integrantes contaron que trabajaban para CARLOS CASTAÑO, y confesaron su participación en la muerte de Jaime Garzón; entre otros hechos delictivos, aseguraron que por este asesinato les pagaron treinta millones de pesos.

Concretamente, el vocero de la banda La Terraza dijo: "Es que este señor JAIME GARZÓN le estuvieron haciendo estudio de inteligencia del Ejército y lo vincularon a la guerrilla y que él tenía que ver con los secuestros y estaba ganando un dinero. Esto no me consta a mí. Entonces le dio la orden a su subalterno, a CARLOS CASTAÑO, y él nos llamó para que nosotros efec-

tuáramos eso... Nosotros sabíamos que él era la marioneta y él le daba la orden a ELKIN. Él era el puente, CASTAÑO era el puente entre el Ejército y nosotros".

El hombre también manifestó su descontento porque CARLOS CASTAÑO y BERNARDO (BERNA) asesinaron a mansalva a sus compañeros de la banda La Terraza en la finca "Perra Perdida".

Asimismo, existe un Informe de Policía Judicial, mayo 18 de 2005, sobre "La Terraza", en el que se detalla su área de influencia, análisis de su surgimiento, antecedentes y estructura. En el documento se destaca a ELKIN SÁNCHEZ MENA, alias EL NEGRO ELKIN, como jefe de la banda, supuestamente asesinado por las AUC. A dicha organización delictiva se le atribuye la comisión de una serie de crímenes ordenados por CARLOS CASTAÑO, entre otros, los homicidios de JAIME GARZÓN, ELSA ALVARADO y MARIO CALDERÓN, EDUARDO UMAÑA; así como el secuestro de los investigadores de las ONG I.P.C., de la senadora PIEDAD CÓRDOBA y el diputado GUILLERMO LEÓN VALENCIA.

Figura además dentro del expediente, un documento del 29 noviembre de 2000, dirigido al Presidente de la República, al Fiscal General de la Nación, al Procurador, a Organizaciones de Derechos Humanos y a la Opinión Pública, donde el grupo delictivo La Terraza se tribuye una serie de hechos delictivos, entre otros, el homicidio de JAIME GARZÓN.

El contenido esencial de los documentos citados, en lo que respecta al homicidio de JAIME GARZÓN, se encuentra corroborado con diferentes versiones rendidas por jefes de las autodefensas, de los que se pueden destacar los siguientes: testimonio rendido el 9 de octubre del 2007 por IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA,

alias ERNESTO BAEZ, asesor político de CARLOS CASTAÑO para la época de los acontecimientos, quien bajo la gravedad juramento aseguró: "Destaco varias cosas, uno que me quedó claro la responsabilidad directa de Carlos en lo que respecta a la orden impartida a una banda denominada La Terraza que operaba en Medellín y que estaba directamente al servicio de Castaño. De otro lado, las informaciones que conocí por conducto de Jesús Ignacio Roldan, alias MonoLeche, quien a raíz de un incidente que tuvo con Carlos, se suscitó una polémica en la que quedó al descubierto que el señor ELKIN SÁNCHEZ MENA o MENA SÁNCHEZ, no recuerdo bien el orden de sus apellidos, cumpliendo una orden de Carlos había procedido a dar muerte al célebre humorista... Mi primera certeza sobre la autoría de Carlos con respecto a la muerte de Garzón partió de un encuentro que se llevó a cabo en la denominada finca La Siete, una noche cualquiera, debe ser año 1999, concurrieron allí unos señores que venían de Medellín y por un buen rato esperaron que Carlos llegara. Estaban ubicados en un pequeño vestíbulo al extremo del salón en cuyo fondo tenía yo mi oficina. Efectivamente, Carlos llegó y después de un saludo sumamente efusivo habló por un buen rato del excelente trabajo, las felicitaciones, se pusieron a tomar whisky y a detallar el asunto que posteriormente supe se relacionaba con la muerte del señor Jaime Garzón. Inclusive, Mena Sánchez que estaba en compañía de un personaje que le decían Lotar o El Tatuado y un tercero al que le decían Lucho San Pedro creo, no recuerdo muy bien, comentaban estos señores que había sido más difícil el viaje hacia el alto Sinú que la vuelta, en esos términos se expresaban. A mí no me quedó duda que se referían al asesinato de Jaime Garzón.."

De esto hay que destacar también el señalamiento directo que hizo sobre miembros de La Terraza en la comisión del homicidio y un incidente que dijo conoció a través de alias Monoleche, relacionado con un arma que

Carlos Castaño le solicitó al Negro Elkin y que correspondía a la pistola o revolver con que ultimaron al humorista y cuya perdida desencadenó fuertes represalias por parte de Carlos Castaños contra los integrantes de la banda de sicarios, que además adoptó por las quejas que contra ellos se venían efectuando por sus continuos abusos. El jefe paramilitar ordenó asesinar a los miembros de La Terraza, con lo cual además, podía ocultar la responsabilidad de las autodefensas en el homicidio de Jaime Garzón.

Lo anterior fue ratificado con el testimonio de JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, alias MONOLECHE, rendido el 10 de octubre del 2007, quien aseguró: "Carlos Castaño tenía una banda que se llamaba La Terraza, el comandante de esa banda era el negro Elkin. Carlos Castaño se lo llevó para la zona de Córdoba con unos quince o veinte hombres más, y le dijo al Negro Elkin que se iba a quedar instalado en la zona porque aquí en Medellín estaba muy caliente y estaban haciendo cosas mal hechas, que se quedaran un tiempo allá con él, Carlos me dijo a mí, Dieciocho era uno de mis "alias", hay que averiguar una finca para comprársela al Negro Elkin porque él se va a quedar un tiempo en la zona, me mandó con el Negro Elkin y miramos varias fincas, hubo una que le gustó al Negro, él me dijo esta me gusta, pero no tengo toda la plata, pero el comando me debe todavía una plata de la vuelta de Garzón. Como a los cuatro días me llamó Carlos que me pasara por el campamento de él, llegué y me preguntó, yo le dije que había una finca que le gustaba, pero que no tenía toda la plata, que usted le debe una plata de la vuelta de Garzón. Ese hombre se paró, estaba el doctor Ernesto sentado ahí, era una finca grande, ese hombre se paró como una fiera de esa oficina, y ahí mismo le dijo al radioperador que llamara al Negro Elkin, que pasara urgente por acá, me dijo a mí: se puede retirar,

se puede ir. Como a los cuatro o cinco días me encontré con el Negro y me dijo: “Qué chatarra, qué regaño el que me metió Carlos. Yo le pregunte por qué hermano y me dijo porque había mentado lo de Garzón. Le dije que yo ni siquiera sabía quién era ese Garzón, ni qué de Garzón me estaba hablando”. Aseguró, además, que al Negro Elkin y otros integrantes de la banda les ordenó asesinar Carlos Castaño, supuestamente porque conocían muchos detalles de su vida y a él no le gustaba dejar “huellas”.

La anterior declaración se encuentra respaldada con la versión libre rendida por EVER VELOZA GARCÍA, alias HH, el 10 de julio del 2008 ante la Unidad Nacional para Justicia y Paz, donde en relación con el homicidio de GARZÓN señaló que fue realizado por Carlos Castaño y por miembros de la banda la Terraza: “Carlos encargó al Negro Elkin, a quien después mató en la finca La Perra. El Negro Elkin era el que se encargaba de llevar esos homicidios en Medellín y Bogotá, y Carlos lo encargó de la muerte de Jaime Garzón”.

Por su parte, FRANCISCO JAVIER ZULUAGA, alias GORDO LINDO, en versión libre el 12 de mayo del 2011, sobre el homicidio de Jaime Garzón, mencionó la participación de CARLOS CASTAÑO y la banda La Terraza.

De igual manera, EMIRO DE JESÚS PEIREIRA, en versión libre, 9 de octubre del 2012, señaló: “Los autores del homicidio de JAIME GARZÓN fueron los de La Terraza por orden de CARLOS CASTAÑO”.

Estos testimonios fueron ampliamente corroborados en versión libre por DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, alias DON BERNA, el 13 de febrero de 2012. Resulta relevante por ser muy cercano a CARLOS CASTAÑO y porque estuvo presente en el momento en el que el máximo

comandante de la agrupación ilegal ordenó asesinar al periodista. Aseguró que los sujetos conocidos con los alias de EL NEGRO ELKIN, ALEX SANPEDRO, YILMAR y ANGELA, viajaron a Bogotá y con ayuda de inteligencia militar desarrollaron el plan criminal.

Esta versión fue ampliada con la información contenida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía 15 Delegada ante el Tribunal, adscrita a la Dirección de Fiscalías Nacional Especializada de Justicia Transicional, referida a la versión libre rendida por DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO el 18 de marzo de 2015, donde afirmó: “CARLOS le ordena que llame al NEGRO ELKIN, este va a Córdoba concretamente a la VEINTIUNO, ahí fue la reunión y Carlos le da las instrucciones para asesinar al señor JAIME GARZÓN, y con la información del señor NARVAEZ ya se había hecho inteligencia, donde trabajaba, a qué horas llegaba, pues se requiere de tiempo, pero ya se había hecho esa inteligencia. Carlos le da unos viáticos, la instrucción, unas fotos y ellos se desplazan a Bogotá y a las dos semanas se da la muerte al señor GARZÓN. La plata que le pagaron por ese homicidio fueron 30 millones de pesos en efectivo al Negro Elkin”.

El testigo mencionó a otros presuntos responsables del hecho, específicamente a ALEXANDER LONDOÑO, alias ALEX SAN PEDRO; EL ZARCO, integrante de La Terraza, y a JORGE ELIÉCER PLAZAS ACEVEDO, alias DON DIEGO, militar colaborador de las AUC.

La compulsa de copias tenía un informe de Policía Judicial, que contiene detalles de la participación de La Terraza, producto de la versión de alias Berna, así: “Los integrantes de la banda la Terraza, trabajaban con Pablo Escobar, directamente con Tayson. Cuando Pablo Escobar muere Carlos Cas-

taño hace un llamado a la lucha antisubversiva y les da esa oportunidad siempre y cuando sigan las orientaciones y la dirección, a ese grupo se les llamo LOS ARREPENTIDOS. La banda La Terraza tenía una capacidad operativa y se arriesgaba a cualquier cosa, por eso era utilizada para hacer algunos trabajos, hace reconocimiento de algunos de sus integrantes, el comandante Castaño les dio una finca en la zona de Córdoba y cuando ellos estaban siendo perseguidos por las autoridades se iban para esa zona a esconderse... Cuando Carlos Castaño da la orden de dar de baja a la banda de La Terraza muere alías el NEGRO ELKIN, LOTHAS, YIRMAN y SAN PEDRO y otro, no recuerdo el nombre. Desafortunadamente alcanza a escapar uno con alias CARLITOS y otro que no recuerdo el alías. Logran llegar a Medellín y empieza la arremetida, por lo que ellos hacen una defensa a través de los medios de comunicación, hablando de unas denuncias contra algunas personas, pero carecen de veracidad ya que ellos tratan de defenderse y nombran a algunos miembros de la Fuerza Pública que no tienen que ver las autodefensas, a excepción del General SANTOYO, que si hacía parte de las estructuras de las autodefensas. Igual hablan de un arma con que asesinan a JAIME GARZÓN, un revolver y este hecho que causó impacto, fue equivocado, determinado y orientado por algunas personas que tenían algún tipo de intereses”.

Este testigo, MURILLO BEJARANO, quien tuvo injerencia de mando en la banda La Terraza, y conoció de primera mano los detalles de lo ocurrido, le dijo a la Fiscalía el 10 de agosto de 2015, bajo la gravedad de juramento, que el modus operandi para esta operación fue: Primero: la presentación del informe de inteligencia militar relacionado con el objetivo para darle de baja; es decir, Jaime Garzón. Segundo: Carlos Castaño requirió a alías Don Berna

para que conociera el informe y éste a su vez convocara al Negro Elkin con el fin de informarle que el objetivo era una persona que trabajaba en Radionet, darle a conocer su horario laboral, el vehículo en que se movilizaba y otros datos. Tercero: Carlos Castaño suministró unos viáticos y la logística necesaria para que los integrantes de la banda La Terraza, el Negro Elkin, Alex Sanpedro, Yilmar y Angela viajaran a Bogotá e hicieran contacto con inteligencia militar en cabeza del coronel Plazas Acevedo para cometer el homicidio del periodista. Aseguró con detalles que YILMAR manejó la motocicleta mientras que ALEX SAMPEDRO disparó contra el periodista.

Murillo Bejarano reveló que Carlos Castaño le ordenó hablar con el Negro Elkin para que le entregara el arma del crimen. El Negro dijo que había sido decomisada por la Policía cuando iban a robar un carro en Medellín. Eso, sumado a la indignación nacional por el asesinato del periodista, llevó a Carlos Castaño a ordenar el asesinato de los integrantes de La Terraza. Citó al Negro Elkin a una finca en Valencia, Córdoba, y allí lo ejecutó con otros dos de sus compañeros.

Bejarano dijo además que el general Santoyo ayudó a Carlos Castaño en la guerra que se inició contra los miembros de La Terraza, y que gracias a ello, por ejemplo, alías Angela fue capturada y luego eliminada por la organización para ocultar el crimen de JAIME GARZÓN.

Vale destacar que los testimonios rendidos por IVÁN ROBERTO DUQUE, IGNACIO ROLDAN PÉREZ, EVER VELOZA, EMIRO DE JESÚS PEREIRA RIVERA y DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, en relación con los autores materiales del homicidio de JAIME GARZÓN, resultan creíbles porque provienen de personas cercanas y

de confianza de CARLOS CASTAÑO. Ellos conocieron la planificación y posterior ejecución del crimen del periodista.

La Fiscalía ordenó individualizar e identificar a los citados miembros de La T erraza para vincularlos a la investigación. Estableció a través del informe de Policía Judicial No. 714056 del 20 de septiembre de 2012, la plena identificación del NEGRO ELKIN, ALEX SANPEDRO, YILMAR y ANGELA; sin embargo, allí también se demostró que habían muerto.

El análisis de los medios probatorios indica que HELQUIN SÁNCHEZ MENA, alias EI NEGRO ELKIN; ALEXANDER LONDOÑO, alias ALEX SANPEDRO; YEIMAR DE JESÚS ARBOLEDA SUÁREZ, alias YILMAR y ANGELA MARÍA GEORGE TORRES, ejecutaron materialmente el homicidio de JAIME GARZÓN, incluso, se estableció que ALEXANDER LONDOÑO disparó contra el periodista y que YEIMAR DE JESÚS ARBOLEDA condujo la motocicleta. Lo anterior, por orden de CARLOS CASTAÑO y DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO y, por consiguiente, de predica de ellos su calidad de coautores del homicidio.

Durante el trámite de este proceso, la Fiscalía ha determinado que desde el principio se presentó una estrategia para desviar la investigación. Por esa razón han sido practicadas varias diligencias para identificar a los responsables.

La investigación habría sido desviada por miembros del extinto DAS. Por eso se practicó inspección judicial al proceso radicado No. 002, adelantado por la Fiscalía 9 Especializada adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Análisis y Contexto, por el delito de tortura agravada a la periodista CLAUDIA JULIETA DUQUE durante los años 2001 a 2004,

al parecer por la investigación adelantada por el homicidio de JAIME GARZÓN, y donde se encuentran vinculados JOSÉ MIGUEL NARVAEZ, ENRIQUE ALBERTO ARIZA, GIANCARLO AUQUE DE SILVESTRI, CARLOS ALBERTO ARSAYUS, HUGO DANÉY ORTIZ; entre otros directivos del DAS.

La Fiscalía ha adelantado otros procesos, por ejemplo, escuchó en diligencia de declaración a WILSON RAÚL RAMÍREZ y MARIBEL JIMENEZ; personas que bajo la gravedad de juramento hicieron señalamientos contra JUAN PABLO ORTIZ, alias BOCHAS, y EDILBERTO ANTONIO SIERRA AYALA, alias TOÑO, como los presuntos sicarios que asesionaron a Jaime Garzón. Versión que resultó falsa.

La Fiscalía adelanta procesos contra estos presuntos falsos testigos y contra de ex funcionarios del DAS por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, porque estas personas habrían desviado el rumbo de la investigación.

El carrusel de la contratación

Al escritorio del Fiscal, cada 30 días, llegan informes ejecutivos sobre procesos de connotación nacional. En la cabeza de la lista estaba el carrusel de la contratación en Bogotá, el caso más grave de corrupción que ha sufrido la ciudad, por su monto —más de 2.5 billones de pesos—, por la clase y procedencia de los procesados, por la cantidad de delitos y por el número de personas vinculadas a los múltiples expedientes que se desprendieron poco a poco y después de cada nuevo hallazgo.

El trabajo para la Fiscalía General de la Nación fue inmenso y los retos fueron muchos. Los resultados contundentes de las investigaciones permitieron innumerables condenas en diferentes instancias del poder judicial: ante jueces, ante el Tribunal Superior de Bogotá y ante la misma Corte Suprema de Justicia.

El modelo de investigación y el esfuerzo de cientos de funcionarios de la Fiscalía permitió llegar al fondo del problema y descubrir plenamente a los responsables del millonario desfalco a la ciudad. Los principales protagonistas de este caso ya fueron condenados, y otros están en proceso de fallo gracias a las pruebas aportadas por nuestra entidad.

Magistrados y jueces han reconocido en las audiencias y en sus sentencias que la base de los fallos corresponde a las juiciosas y rigurosas investigaciones a fondo y de todo tipo que adelantó la Fiscalía General de la Nación y a las imputaciones de cargos que formuló la entidad ante los respectivos funcionarios.

Los expedientes son sólidos en pruebas técnicas y testimoniales, en cruce de información y en trabajos de campo minuciosos.

Casi una centena de expedientes adelantó y aún adelanta esta administración por el millonario desfalco de dineros públicos de Bogotá por parte de altos funcionarios del Distrito —como su entonces alcalde Samuel Moreno—, secretarios de despacho, concejales, contratistas, abogados e intermediarios, que a través de jugosos contratos de vías y ambulancias, por sólo mencionar dos de los mayores casos, defraudaron las arcas de la capital a manos llenas.

El seguimiento especial por parte del despacho del Fiscal General de la Nación fue realizado sobre todos los procesos, pero principalmente en torno a los que fueron vinculados gran parte de los concejales; el detenido alcalde de la ciudad Samuel Moreno; su hermano el destituido y condenado senador Iván Moreno; los primos Miguel, Manuel y Guido Nule; los contratista Emilio Tapia y Julio Gómez; el abogado Álvaro Dávila; la directora del IDU, Liliana Pardo; el secretario de Salud, Héctor Zambrano; el contralor del Distrito, Miguel Ángel Moralesrussi, el funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano, Inocencio Meléndez, y el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, entre otros más.

La entidad no escatimó ningún esfuerzo humano, ni recurso técnico, legal y presupuestal para descubrir todo el entramado criminal e identificar a todos los responsables.

El escándalo del carrusel de la contratación estalló en junio de 2010. Con la llegada a la Fiscalía de una nueva administración, el organismo logró consolidar expedientes, cruzar y relacionar más hechos, establecer y probar delitos, descubrir a prácticamente todos los implicados y presentar ante los jueces a los responsables. Insistimos, aún hay procesos en marcha de un fraude que fue gigante y complejo, incluso con muchos procesados vinculados a más de

un radicado. Ejemplo, el exalcalde Samuel Moreno enfrenta tres expedientes.

Un elemento determinante en este proceso del carrusel de la contratación, fue la directiva 001 de 2012. Permitió que las investigaciones, en materia de corrupción en Bogotá, se hicieran dentro del contexto de asociación de casos. La filosofía del instrumento, además de establecer toda la verdad de los hechos, permite también descubrir y buscar el castigo para los máximos responsables de los delitos, y no sólo para quienes se ubican en la base de la pirámide de la organización criminal y en mandos medios.

La lucha contra la delincuencia para ser realmente exitosa debe encargarse de golpear a quiénes están en la cúspide del grupo delincuencia y no sólo a los mandos bajos y medios.

Este modelo, de contexto, ha permitido avances importantes en las investigacio-

nes e incluso ha logrado identificar modus operandi, formas de ejecución delincuencia establecidas por quienes se asociaron para delinquir.

Tener la certeza de cómo operan los delinquentes en toda su estructura, es una de las bases del éxito de las investigaciones.

Porque además, a partir de estos resultados, ha sido posible abrir nuevas investigaciones en otras ciudades y replicar el modelo de investigación y negociación con los implicados para otros fiscales con casos similares.

Cuando Eduardo Montealegre llegó a la Fiscalía General de la Nación sólo existía una condena contra funcionarios y contra cuatro particulares, todos relacionados con una sola entidad: el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y una sola imputación en la Alcaldía.

Funcionarios antes de la administración

ENTIDAD	FUNCIONARIOS IMPUTADOS	FUNCIONARIOS ACUSADOS	FUNCIONARIOS CONDENADOS
IDU Malla Vial 23 contratos	12	2	1 INOCENCIO MELENDEZ JULIO
ALCALDIA DISTRITAL	1 SAMUEL MORENO	1 SAMUEL MORENO	
2	13	3	1

Particulares antes de la administración

ENTIDAD	PARTICULARES IMPUTADOS	PARTICULARES ACUSADOS	PARTICULARES CONDENADOS
IDU Malla Vial 23 contratos	8	6	4 GUIDO NULLE MIGUEL NULLE MANUEL NULLE MAURICIO GALOFRE
1	8	6	4

Desde la aplicación del modelo de asociación de casos y adelantar el contexto probatorio a los mismos, fue posible perfeccionar las investigaciones y por lo tanto mejorar los resultados en la lucha contra la corrupción.

Funcionarios inicio actual periodo de la fiscalia

ENTIDAD	FUNCIONARIOS IMPUTADOS	FUNCIONARIOS ACUSADOS	FUNCIONARIOS CONDENADOS
IDU Malla Vial 23 contratos	13	12 LILIANA PARDO LUIS ESTEBAN PRADA MARIA CANTINI MERCEDES CASTRILLON GEOVANI ARENAS CLAUDIA OTALORA NATALIA LAURENS ERICK ACOSTA LUIS EDUARDO MONTE- NEGRO CARMEN LOPERA RAFAEL DAZA INOCENCIO MELENDEZ	1 LUIS EDUARDO MONTENEGRO
SECRETARIA DE SALUD	2	2	1 HECTOR ZAMBRANO RODRIGUEZ
UMV	1	1	1 IVAN HERNANDEZ DASA
SECRETARIA DE MOVILIDAD	3	1	1 WILLIAM QUINTERO DUQUE
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	1	1	1 MERCEDES DEL CARMEN RIOS
PERSONERIA DISTRITAL	1	1	1 FRANCISCO ROJAS BIRRY
CONTRALORIA DISTRITAL	1	2 MIGUEL ANGEL MORALES RUSSI	
UAESP	4 PENDIENTES DE IMPUTACION		
CONCEJO DISTRITAL	7	7 ORLANDO PARADA HIPOLITO MORENO ANDRES CAMACHO JORGE SALAMANCA WILSON DUARTE OMAR MEJIA BAEZ JOSE JUAN RODRIGUEZ	3 ORLANDO PARADA HIPOLITO MORENO ANDRES CAMACHO
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1 ALVARO CRUZ 1. HERNAN JOVEL MUÑOZ		

GOBERNACION DEL CESAR	² POR IMPUTAR		
MUNICIPIO DE IPIALES	³ POR IMPUTAR		
SITP	³ POR IMPUTAR		
ALCALDIA DISTRITAL	2 - EXALCALDE POR IMPUTAR EN DISTROMELY SECRETARIA DE INTEGRACION	² IDU SECRETARIA DE SALUD SAMUEL MORENO ROJAS	
14	43	29	10

Particulares inicio actual periodo fiscal

ENTIDAD	FUNCIONARIOS IMPUTADOS	FUNCIONARIOS ACUSADOS	FUNCIONARIOS CONDENADOS
IDU Malla Vial 23 contratos			⁹ MIGUEL NULE MANUEL NULE GUIDO NULE MAURICIO GALOFRE EMILIO TAPIA JULIO GOMEZ ALBERTO CALDERON FRANCISCO RAFAEL HERNANDEZ
SECRETARIA DE SALUD	²	²	¹ FEDERICO GAVIRIA
UMV	¹	¹	¹ IVAN HERNANDEZ DASA
SECRETARIA DE MOVILIDAD	³	¹	¹ WILLIAM QUINTERO DUQUE
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	¹	¹	¹ MERCEDES DEL CARMEN RIOS
UAESP	³ POR IMPUTAR		
GOBERNACION DEL CESAR	² POR IMPUTAR		¹ JUAN CARLOS RESTREPO ANGEL
SITP	² POR IMPUTAR		
9	14	5	14

TOTALES	ENTIDADES	IMPUTADOS	ACUSADOS	CONDENADOS
ANTES DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN	2	21	9	5
DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN	14	56	34	24

Durante los últimos cuatro años los investigadores han profundizado las indagaciones y se puede asegurar hoy que cayeron desde sus más visibles cabezas hasta los implicados en la base de esa pirámide criminal.

Además del fraude y direccionamiento ilegal de contratos de construcción y reparación de vías, fue posible detectar e investigar otros hechos ilícitos, como sucedió con la licitación de las ambulancias.

Gracias a las investigaciones de la Fiscalía, una buena parte de los implicados se vio en la obligación de aceptar cargos, de buscar principios de oportunidad y de colaborar con las autoridades.

A modo de ejemplo. Ante la abrumadora cantidad de pruebas, implicados comenzaron a rendir versiones detalladas de más hechos delictivos y comenzaron a señalar a más responsables.

En la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Héctor Zambrano, secretario de Salud de Bogotá; el contratista Emilio Tapia; el concejal Hipólito Moreno, entre otros, comenzaron a declarar. Gracias a eso fue posible probar que la licitación para la adjudicación del contrato de prestación de servicio número 1229 del 30 de septiembre de 2009, celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Unión Temporal Transporte ambulatorio Bogotá, fue manipulada para que ganara esta empresa. De allí se desprendieron condenadas por peculado por apropiación,

cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos.

La entidad también focalizó grandes esfuerzos en los procesos que adelantó la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, para tratar de recuperar la mayor cantidad de recursos que perdió la ciudad en este caso de corrupción, que tocó a muchos de los organismos de administración del Distrito Capital, incluso a los dineros supuestamente destinados a la salud, pero que terminaron en los bolsillos de contratistas y funcionarios de la ciudad.

La investigación formal en la Fiscalía por estos delitos comenzó el 3 de enero de 2012 cuando el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia informó a la fiscal jefe de la Unidad de Lavado de Activos y extinción de dominio que ese despacho adelantaba un proceso del cual podría comenzar o dar inicio otros nuevos expedientes por extinción de dominio sobre los responsables del millonarios desfalco a la ciudad.

Dos años después, el 16 de enero de 2014, la Fiscalía comenzó este tipo de procesos contra todos los involucrados en el escándalo, principalmente contra concejales, contratistas y funcionarios de la alcaldía.

La entidad mantiene la misión, además de castigar con cárcel a todos los responsables, de perseguir sus fortunas y sus bienes para encontrar los millonarios

recursos que perdieron los habitantes de Bogotá durante la administración del alcalde Samuel Moreno. La búsqueda de estos dineros la ha realizado la Fiscalía General de la Nación incluso en el exterior.

Investigaciones contra el exalcalde Samuel Moreno

Las diferentes investigaciones que se desprendieron del caso matriz del carrusel de la contratación, han probado la vinculación directa y de primer orden, en todo este escándalo, del entonces alcalde de Bogotá, SAMUEL MORENO ROJAS.

Como punto de partida y con el propósito de contextualizar los hechos jurídicamente relevantes que permitieron argumentar las tres acusaciones que actualmente avanzan contra MORENO ROJAS, debe indicarse que con la finalidad de lograr su elección como Alcalde, SAMUEL MORENO logró la financiación de su campaña, desde la consulta interna de su partido, de diferentes particulares entre quienes se encontraban algunos contratistas del Distrito.

Una vez electo, los particulares, contratistas y representantes de la clase política de la ciudad, realizaron pactos de gobernabilidad que permitieron una real y efectiva captura del Estado, a través acuerdos que buscaron satisfacer indebidamente sus intereses particulares, anteponiéndolos a la utilidad y bienestar de la comunidad. Esos pactos en su mayoría tenían una finalidad económica, de lucro personal de funcionarios, contratistas y políticos usando los recursos de la ciudad, del presupuesto oficial.

Estos acuerdos, de entrada, implicaron la entrega de entidades como el IDU, LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL, LA SECRETARIA DE SALUD, entre otras, para realizar nombramientos y manejar recur-

sos económicos a través de millonarias comisiones provenientes del manejo ilegal de la contratación pública.

Así las cosas, concretamente contra el exalcalde SAMUEL MORENO, en la actualidad hay tres investigaciones.

Proceso No. 1

Delitos: Concurso de conductas de INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, en calidad de coautor, relacionados con los contratos 071 y 072 de 2008 de malla vial, la cesión del contrato 137 de 2007, que correspondía a las obras de Transmilenio fase III, y los contratos 020, 029, 037, 047 y 068 de 2009; PECULADO POR APROPIACIÓN A FAVOR DE TERCEROS EN CALIDAD DE DETERMINADOR, agravado por razón de la cuantía, relacionado con la amortización de la cesión del contrato 137 de 2007, por un valor de 28.081.044.349, que favoreció a Conalvias, y CONCUSIÓN en calidad de autor, por haberle solicitado a MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA, \$5.000.000.000 para fallar a su favor un recurso que se había presentado ante el IDU e interpuesto contra el auto que declaró el siniestro del manejo del anticipo del contrato 137, para que fuera fallado a su favor y no tuviera que pagar Transvial ningún dinero.

Radicado: 110016200000201100446

Juzgado: 11 Penal del Circuito de Bogotá.

Estado de la actuación: AUDIENCIA PREPARATORIA, la cual no ha culminado ya que actualmente en el Tribunal Superior de Bogotá tiene la actuación con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por todos los intervinientes frente al auto que decretó las pruebas.

Proceso No. 2

Delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, ya que desde diciembre de 2007 y hasta junio del año 2010; SAMUEL MORENO, su hermano y entonces senador NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS, el abogado ÁLVARO DÁVILA y los contratistas EMILIO JOSÉ TAPIA Y HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ, entre otros, se pusieron de acuerdo para cometer delitos indeterminados contra la administración pública, tales como, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohechos propios, peculados por apropiación, entre otros, para lograr un provecho económico a costa de los dineros públicos provenientes de la necesidad de contratación de obras en el Distrito Capital y PECULADO POR APROPIACION EN FAVOR DE TERCEROS, por la cesión del Contrato No137 y los sobrecostos en favor de la empresa CONALVIAS, equivalentes a 197 millones de pesos.

Radicado: 110016000000201200510

Juzgado: 34 Penal del Circuito de Bogotá.

Estado de la actuación: Actualmente en desarrollo la AUDIENCIA PREPARATORIA, a la espera que la señora Juez emita el auto mediante el cual se decretarán las pruebas.

Proceso No. 3

Los delitos por los cuales se acusó fueron INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS y COHECHO. Durante 2009 y el primer semestre de 2010, SAMUEL MORENO ROJAS, determinó al entonces Secretario Distrital de Salud, HÉCTOR ZAMBRANO RODRÍGUEZ, para que se interesara y aceptara promesa remuneratoria y con posterioridad recibiera dinero para sí mismo, al igual que para su hermano el ex senador IVÁN MORENO, varios concejales de Bogotá, el Personero Distrital y el Contralor de la ciudad, de par-

te del adjudicatario del contrato No. 1229 de 2009, celebrado el 30 de septiembre de 2009, entre la Secretaría de Salud y la Unión Temporal TRANSPORTE AMBULATORIO BOGOTÁ.

El dinero de la comisión equivaldría al 9% del valor total del contrato que fue firmado por \$67.203'690.774 pesos. Los recursos pactados fueron recibidos y repartidos por ZAMBRANO, junto con el concejal HIPÓLITO MORENO, EMILIO TAPIA y FEDERICO GAVIRA VELÁSQUEZ, entre las personas anteriormente mencionadas.

Radicado: 110016000000201400604

Juzgado: 14 Penal del Circuito de Bogotá.

Estado de la actuación: En desarrollo la audiencia de Juicio Oral, se han evacuado 13 testigos de los 22 solicitados por la Fiscalía.

En razón del desarrollo traumático que ha tenido esta última investigación, por la realización de maniobras dilatorias por parte de la defensa, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó abrir investigación en contra del señor SAMUEL MORENO ROJAS y su defensor por la conducta punible de Impedimento o perturbación en la celebración de Audiencias Públicas, del cual está conociendo la Unidad de Delitos contra la administración Pública.

El caso Álvaro Cruz

A comienzos de octubre de 2015, la Fiscalía General de la Nación presentó ante la juez 71 penal de control de garantías de Bogotá al exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz.

Después de una intensa y rápida investigación, el procesado reconoció los cargos e intentó llegar a un principio de acuerdo, pero surgieron hechos que llevaron al organismo de investigación a ponerle punto final a esa negociación y presentarlo detenido ante un juzgado.

El funcionario intentó, junto con su esposa y el procurador judicial, Hernán Jovel Muñoz, afectar el proceso y desviarlo mediante el pago de sobornos. El exgobernador inicialmente debía responder por hechos relacionados con el carrusel de la contratación de Bogotá.

Según pruebas técnicas y testimoniales logradas por la Fiscalía, Cruz y su esposa pagaron 2.000 millones de pesos para desviar la investigación y contar con el apoyo del agente de la Procuraduría General de la Nación asignado a este caso de corrupción.

Dentro de un primer expediente, Cruz estaba siendo procesado dentro del carrusel de la contratación de Bogotá por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado.

Según las indagaciones, habría cancelado un presunto soborno por 800 millones de pesos para lograr un contrato en la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá, en el año 2009, durante la administración de Samuel Moreno, a través de su firma ICM. Se trata del contrato para el suministro de asfalto, 193 del 2009, por cerca de 24 mil millones de pesos.

Alcaldesa de Florencia

La Fiscalía ordenó la captura de la alcaldesa de Florencia, Caquetá, María Susana Portela; de su esposo, Diego Luis Rojas Navarrete, de dos secretarios de la administración municipal y de once concejales.

Desde la alcaldía se pagó a los concejales para que votaran a favor de aumentar el cupo de endeudamiento de la ciudad, violando los parámetros legales y la capacidad de endeudamiento de ese municipio.

Para la Fiscalía General de la Nación la alcaldesa y su esposo cancelaron 800 millones de pesos a los once concejales para aprobar de manera ilegal el cupo endeudamiento en 20 mil millones de pesos.

Desde la propia alcaldía se ofrecieron las dádivas a los políticos para que ampliaran el cupo por encima de los parámetros establecidos y la capacidad fiscal de la capital de Caquetá.

Los pagos del dinero se programaron en tres cuotas y se planeó cancelarlos a través de un intermediario. Primero se les dio a los concejales el 25 por ciento antes de la radicación del proyecto de acuerdo. Después se les prometió otro 25 por ciento por su aprobación y el 50 por ciento restante cuando esta norma fuera sancionada por el concejo municipal.

A los capturados la Fiscalía les imputó los delitos de cohecho, prevaricato, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.

La alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, afronta otros procesos en la Fiscalía. En 2014 fue detenida dentro de un radicado por presuntas irregularidades en los contratos de construcción de 79 vivienda de interés social. Un juez de control de garantías no encontró mérito

para dictarle medida de aseguramiento y ordenó su libertad.

A comienzos de 2015 su esposo, Diego Luis Rojas Navarrete, también fue capturado porque supuestamente ofreció un soborno de 200 millones de pesos para que la Fiscalía General de la Nación archivara las investigaciones contra la alcaldesa de Florencia. El procesado quedó en libertad por orden de un juez, pero la Dirección Anticorrupción sigue con esta investigación.

El desfalco a la DIAN

Otro de los grandes procesos de corrupción que tuvo un seguimiento permanente, fue el desfalco a la DIAN.

La Fiscal General de la Nación integró, el 11 de agosto de 2012, un grupo de tareas especiales para la investigación de conductas punibles contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Su primera misión fue investigar de manera exclusiva lo que se denominó el carrusel de devoluciones del IVA.

El grupo fue reorganizado además para focalizar investigaciones en torno a nuevas formas de criminalidad, principalmente en temas relacionados con el contrabando.

En desarrollo de ese objeto, las diferentes fiscalías que conforman el Grupo DIAN han formulado imputación de cargos a varias personas, entre las que se encuentran distinguidos empresarios, representantes legales y revisores fiscales de reconocidas firmas, particulares e incluso funcionarios públicos de la misma Dirección de Impuestos y Aduanas. Ellos participaron y facilitaron la comisión de ilícitos relacionados con devoluciones del IVA y contrabando de todo tipo de materiales.

En muchos procesos se han proferido sentencias condenatorias contra algunos acu-

sados, ya sea por allanamiento a cargos, por preacuerdos o por terminación de juicio oral. Así mismo, algunas de las personas que han resultado involucradas en la participación de las diferentes conductas punibles, han accedido a la figura de principio de oportunidad, luego de verificar su colaboración eficaz con la justicia.

En lo que tiene que ver con el tema de las devoluciones ilegales del IVA, el grupo de tareas especiales de la Fiscalía General de la Nación desarticuló diferentes bandas criminales que operaban en distintas ciudades.

La mayor parte de los delitos se concentró en las sedes de la Dirección de Impuestos de Bogotá, Pereira, Cúcuta, y Barranquilla.

La Fiscalía imputó cargos contra los procesados y casi todos los investigados fueron condenados por jueces y magistrados en segunda instancia.

El denominado “Carrusel de las devoluciones del I.V.A.” se focalizó, en términos generales, en la existencia de diversas estructuras criminales, cuyos miembros aprovechando las disposiciones normativas relativas a las exenciones del Impuesto al Valor Agregado, IVA, crearon empresas de fachada para vender y comprar entre ellas bienes tales como chatarra, textiles y alimentos. Así, sobre el papel daban visos de legalidad a solicitudes de devolución del mencionado tributo ante la DIAN a través de facturación espuria.

Una vez cumplidos los presupuestos legales correspondientes, que en realidad eran ilegales, la DIAN procedía a hacer devoluciones del IVA por millonarias sumas de dinero en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira, Santa Marta, entre otras ciudades, incurriendo de esta manera en varias conductas delictivas por fraude a las arcas de la Nación.

Dentro de estos expedientes fue detenida, procesada y condenada Blaca Jazmín Becerra. Ella estuvo al frente de varias organizaciones delictivas que fueron desarticuladas.

Blaca Jazmín Becerra, a través de su empresa Consultores y Asesores R&B, se dedicó a orientar personas, entre ellas grandes empresarios, para que mediante el trámite de devoluciones del IVA defraudaran a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, utilizando para ello empresas ficticias y facturación sin respaldo real, entre otros instrumentos irregulares.

Blaca Jazmín, cerebro del desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales paga, por los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, una sentencia de cárcel proferida por el Tribunal Superior de Bogotá: 16 años y nueve meses de prisión. María Segura, la mamá de Blaca Jazmín, fue condenada a siete años y siete meses; su conductor y escolta José Norvey Garzón, cumple una pena de 16 años y Sandra Liliana Rojas, 12 años de privación de la libertad.

Fueron acusados por devolución ficticia del IVA, simulación de exportaciones, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación, lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares.

En Medellín, la Fiscalía formuló imputación de cargos contra 33 personas más, de las cuales 15 se allanaron a los mismos, cinco aceptaron parcialmente los señalamientos, seis se fueron a juicio, y contra siete más fue dictada sentencia condenatoria de una manera rápida.

Entre los judicializados y condenados se encontraba el jefe de la organización de

esa ciudad, José Aldemar Moncada, un empresario que realizaba acciones similares a las de Blaca Jazmín Becerra, usando empresas de papel pertenecientes a su familia.

Caso similar se presentó en Barraquilla, allí la Fiscalía realizó imputación de cargos a 18 personas, de las cuales 14 se allanaron, cuatro se encuentran en etapa de juicio. Entre estos se destaca el Jefe de la División de Devoluciones de la Seccional de la DIAN en Barranquilla, quien al parecer recibía sumas millonarias de la organización para facilitar trámites y las devoluciones ilegales del IVA.

En Pereira, la Fiscalía formuló imputación de cargos contra 13 personas. Estas fueron condenadas con aceptación de cargos el 28 de febrero de 2015, es decir, sólo seis meses después de haber sido puestas a disposición de las autoridades por parte de nuestros investigadores.

En Bogotá, se formuló también imputación a 24 personas, de las cuales 12 aceptaron cargos, dos preacordaron con la Fiscalía sus condenas y diez más se encuentran en etapa de juicio.

Además en Bogotá tuvo lugar la imputación contra 19 funcionarios de la DIAN, de los cuales 13 aceptaron cargos y seis se sometieron a la etapa de juicio oral.

La Fiscalía General de la Nación y otras autoridades de control y de administración, calculan que en las operaciones de defraudaciones, usando las tretas de falsas devoluciones del IVA, el Estado fue estafado en, aproximadamente, 167.000.000.000 de pesos. Pero incluso la cifra puede alcanzar los 300.000.000.000 de pesos.

Guerra al contrabando

El contrabando, que se traduce superficialmente, en introducir o exportar mercancías del territorio nacional sin pagar los respectivos tributos aduaneros, es otro de los grandes males que consume nuestra economía.

La Fiscalía, a través del grupo de tareas especiales, ha dismantelado organizaciones criminales dedicadas al paso fronterizo no permitido de diferente tipo de productos, como chatarra, ganado, cigarrillos, licores y textiles, por citar sólo estos ejemplos.

En Cúcuta, un grupo de empresarios se dedicaba al contrabando de chatarra proveniente de la República Bolivariana de Venezuela. Ese material a su vez era exportado a China y Estados Unidos, entre otros países. Por esos hechos, la Fiscalía después de una detallada investigación realizó imputación de cargos contra cuatro personas, de la cuales dos se allanaron a los cargos formulados por nuestros funcionarios.

Ese cartel del contrabando fue dirigido por James Francisco Arias Vásquez, quien se encontraba prófugo de la justicia, pero finalmente el 26 de diciembre de 2015 fue capturado en La Pintada, Antioquia.

Posiblemente, Arias Vásquez, fue el gestor de las denominadas devoluciones fraudulentas del IVA que fueron cobradas de manera ilegal entre los años 2007 y 2009, y que ascienden a cerca de 300.000.000.000 de pesos.

Esta persona, a través de sus empresas, Comercializadora Internacional Mundo Metal y Comercializadora Internacional Metal Comercio, dominó durante siete años el negocio de exportación de chatarra mediante operaciones ficticias, moviendo aproximadamente más de medio billón de pesos

anuales, superando así a los competidores más importantes de ese mercado.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando y enriquecimiento ilícito.

El ganado también es otro de los ejemplos de la guerra de la Fiscalía General contra el contrabando.

En Norte de Santander, existía una organización dedicada al contrabando de ganado de origen venezolano, con ingreso del mismo a la planta de sacrificio de Frio-gan en el municipio de San Cayetano, con suplantación de ganaderos, transportadores, expedición falsas de guías sanitarias de movilización interna de animales, bonos de venta, registros de vacunación y predios pecuarios, actividades que fueron realizadas en concertación con funcionarios públicos, tanto de FRIOGAN, INVIMA e ICA. Por estos hechos la Fiscalía realizó imputación de cargos a nueve personas, de las cuales seis se allanaron y preacordaron y las otras se sometieron a juicio.

El ingreso ilegal de estos semovientes a nuestro país, además de afectar a ganaderos y exportadores, dejó en riesgo la salubridad pública, toda vez que Venezuela a diferencia de Colombia, no se encuentra certificada contra la fiebre aftosa, que es una enfermedad de notificación obligatoria a las autoridades sanitarias y está catalogada como un padecimiento que restringe la posibilidad del comercio internacional de animales, carne y leche.

La Fiscalía General de la Nación también logró desvertebrar en Valledupar la organización criminal más grande dedicada al contrabando de cigarrillos y licores. Este caso resulta de gran relevancia, entre otras razones, porque las personas judi-

cualizadas prácticamente no tenían contacto directo con la mercancía introducida ilegalmente al país. Como empresarios realizaron las importaciones y posteriormente su organización las distribuían de forma ilegal en todo el territorio nacional.

Esta investigación, sin duda alguna, es el golpe más grande que le han dado las autoridades al contrabando de este tipo de productos. La venta de cigarrillos tiene una carga tributaria importante y debe pagar varios impuestos, como el IVA, aranceles, impuesto al consumo y sobretasa al consumo, obligaciones que al haber sido sustraídas o burladas durante años, generaron una defraudación millonaria a los ingresos tributarios del país.

Dos eran las modalidades con las que operaba esta organización delectiva. La primera: ingresaba la mercancía a la Zona de Régimen Aduanero Especial –ZRAE- (Urubia, Manaure y Maicao), a través de importaciones legales, pagando un impuesto sólo del 4%, teniendo en cuenta que la mercancía entraba al territorio nacional bajo la condición de ser reexportada a un tercer país. Es decir, que debería estar en el territorio nacional de manera transitoria.

El segundo sistema de fraude o modalidad consistía en ingresar la mercancía, sustrayéndola del control aduanero, siendo esta reempacada en cajas de los cigarrillos y licores que ingresaban de manera legal al país, eso en varias fases.

Entre los capturados estaban Oscar Mario Toro Henao, Yohani Marlen Franco Ramírez y Yuri Hamlim Cuadrado Brito, propietarios de las empresas fachada, además de los representantes legales y revisores fiscales de las mismas, así como también un miembro de la Policía Nacional. Los operativos de captura se realizaron en Maicao, La Guajira, otros en Valledupar, Medellín y Fusagasugá.

Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra 14 personas, de las cuales ninguna aceptó los señalamientos.

El organismo de investigación también adelantó varios procesos por contrabando de textiles. En Bogotá a cinco de las personas judicializadas por las solicitudes fraudulentas de devolución del IVA, también se les imputó cargos por el delito de contrabando.

Se trata de la empresa de textiles CITITEX UAP SA, que operaba como beneficiaria del programa especial de importación y exportación denominado Plan Vallejo, concretamente importando insumos y materia prima para confección de prendas de vestir para ser exportadas total o parcialmente en un plazo determinado a Guatemala y Venezuela.

Como resultado de esta operación fue posible la captura de Carlos Alberto Velásquez Euse, representante legal de CITITEX UAP SA, solicitante del IVA y beneficiario del programa especial de importación y exportación Plan Vallejo.

El 27 de julio de 2015, Joaquín Bruges Gómez, quien dirigía la red más grande de contrabando de textiles en el país, se entregó a las autoridades, luego de permanecer prófugo durante meses. La Fiscalía le imputó siete delitos, los que aceptó y solicitó medida de aseguramiento de detención domiciliaria atendiendo a la delicada situación de salud que afrontaba el imputado.

El engaño a la Nación de este tipo de contrabando asciende a los 525.000.000.000 de pesos.

Dentro de las investigaciones fue posible imputar cargos contra de una persona por el homicidio de Cecilia Escobar, quien era

la Jefe de Fiscalización de la DIAN en Neiva. El acusado, quien suscribió preacuerdo con el ente acusador, fue condenado a una pena de 17 años de prisión. La Fiscalía trabaja para establecer la identidad de los posibles determinadores del crimen.

En menos de un año, la Fiscalía General de la Nación judicializó a más de 135 personas por contrabando en diferentes ciudades y por diversos delitos: lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, fraude procesal, peculado por apropiación, contrabando, favorecimiento al contrabando, favorecimiento por servidor público, violación de medida sanitaria, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, exportación ficticia, cohecho propio y estafa agravada.

La Fiscalía General de la Nación también adelanta 22 procesos de extinción de dominio contra integrantes de estas organizaciones criminales, ocho de ellos se encuentran en fase inicial reservada y 14 en fase de inicio, etapa en la que se adoptan medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo y la administración de los bienes se le traslada de manera provisional a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E.

En desarrollo de esa etapa inicio, se han afectado un total de 766 bienes, correspondientes a los diferentes procesos que son adelantados, esto es, devoluciones del IVA en diferentes partes del país y contrabando, por un valor total aproximado de 50.604.100.302 de pesos.

Desplome de Interbolsa

Una de las investigaciones más rápidas y con resultados contundentes, tiene que ver con el desplome de Interbolsa, la principal corredora de bolsa del mercado bursátil colombiano y el Fondo Premium.

Este es uno de los casos más graves y sofisticados de corrupción de cuello blanco que se ha presentado en el país y donde los implicados dejaron en riesgo el sistema financiero y la credibilidad de los ciudadanos en el mismo.

Tras la intervención del gobierno en Interbolsa a finales de 2012, la Fiscalía comenzó a investigar el fraude. Los retos planteados al organismo, por lo sofisticado y especializado del caso, fueron asumidos sin temor por los fiscales asignados a los procesos que se desprendieron de las primeras pistas.

La Fiscalía trabajó en un proceso central y en 56 noticias criminales, o hechos que presuntamente constituían delitos, entre compulsas de copias y asignaciones especiales. Estas investigaciones están en marcha.

Legalmente, las víctimas del fraude en la sociedad comisionista de bolsa, Interbolsa, fueron 492 y la cuantía exacta de la apropiación fue de 358.421.310.263 de pesos.

Los delitos investigados desde el inicio fueron: Manipulación fraudulenta de especies – Fabricato –, Administración desleal, Concierto para delinquir y Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados.

Por ejemplo, en el Fondo Premium realizaron de manera ilegal el 80 por ciento de tramites a través de empresas que no tenían autorización para recaudar esos recursos, más de 300.000 millones de pesos.

Las víctimas por el Fondo Premium son 1.028, reconocidas en la liquidación y

más de 200 denuncias en la Fiscalía General de la Nación. Reclaman 64 millones de dólares. Aquí la investigación contra las diez personas vinculadas, se basó en estos delitos:

1. Manipulación fraudulenta de especies – Fabricato – (art 317)
2. Captación masiva y habitual de dinero (art. 316)
3. No reintegro (art. 316 a)
4. Estafa masiva y agravada. (art 246, 267 y 31)
5. Concierto para delinquir (art. 340)

Después de consolidar expedientes en el caso de Interbolsa, a finales de febrero de 2015, la Fiscalía imputó cargos contra cinco de los principales implicados en el desfalco y pidió cárcel para ellos . La Fiscalía solicitó audiencias ante jueces de control de garantías para imputar car-

gos contra los inversionistas Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Ambos montaron un entramado empresarial para movilizar de manera ilegal millonarios recursos entregados a la firma por 1.027 inversionistas, que reclamaban 192.000 millones de pesos, 64 millones de dólares y 200.000 euros.

Ambos aceptaron cargos por estafa, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de millonarios recursos. Contra el principal accionista de Interbolsa, Víctor Maldonado, contra Eric Andersen, director del Fondo Premium en Curazao, Ricardo Emilio Martínez, Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal y Juan Andrés Tirado, la Fiscalía también formuló cargos.

Los procesados fueron imputados por cinco delitos: captación ilegal, no reintegro de los dineros, manipulación fraudulenta, estafa y concierto para delinquir.

Decisiones	
Imputación	23 personas
Condenas	2
Proceso en Juicio oral	3
Preclusiones	0
Principios de oportunidad	2
Principios en trámite	3
Preacuerdos	0
Imputaciones programadas para este año	5 personas
Aceptación de cargos parcial	4
Aceptación de cargos Total	2

La Fiscalía logró además extraditar desde España a Víctor Maldonado, quien intentó esconderse en ese país para eludir la acción de la justicia colombiana.

Los procesos penales por Interbolsa comenzaron por la denuncia presentada por el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, el 14 de noviembre de 2012 por presuntas irregularidades que se

pudieron cometer al interior de ese grupo, entre otras en la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A. hoy en liquidación e Interbolsa S.A Holding, donde entregaron créditos y cupos de endeudamiento exorbitantes a los miembros del grupo Corridori, estos son: Alessandro Corridori, Invertácticas, María Eugenia Jaramillo Palacios, P&P Investment, Manantial y Giteco, entre otras personas.

Estas sociedades se dedicaron a hacer operaciones de compra y venta de acciones como las de Fabricato, que les permitió subir el precio de la acción en forma amañada y mantener después el precio a través de dichas operaciones.

Las sociedades del denominado Grupo Corridori no contaban con la capacidad económica suficiente para la financiación que se dio y que superó los doscientos mil millones de pesos, esto para los años 2011 y 2012.

De estos hechos participaron no solo las personas que integraban el grupo de interés de Corridori, sino además los directivos y funcionarios de la Sociedad Comisionista de Bolsa, Interbolsa, que hicieron parte de las directivas de la comisionista, del comité de riesgos y los comerciales a cargo de las mismas.

La Fiscalía también investiga una operación no autorizada que se realizó al interior de la Sociedad Administradora de Inversión –SAI –, de la misma firma Interbolsa S.A., denominada Clínica La Candelaria, a través de la cual, la SAI entregó \$78.000 millones a la Clínica, que en la misma fecha y a través de un contrato, giró esa misma suma a Interbolsa S.A. Holding.

Como quiera que se trata de una operación financiera prohibida y en la cual el dinero sale de la sociedad filial a la matriz del mismo grupo empresarial, a través de un tercero, se sospecha de este comportamiento como presuntamente punible.

Personas investigadas y acusadas

Las personas vinculadas:

1. RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORRERA, Presidente del Grupo Interbolsa S.A. Holding e integrante del comité de riesgos de Interbolsa Sociedad Comi-

sionista de Bolsa. Aceptó cargos por los delitos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal, por los cuales se adelantó audiencia de individualización de pena y sentencia.

2. JORGE MAURICIO INFANTE NIÑO, presidente de la Sociedad Administradora de Inversión Interbolsa SAI y miembro principal de la Junta Directiva de Interbolsa.

3. JAVIER TOMAS VILLADIEGO CORTINA, Director del área de Riesgo de Interbolsa e integrante del comité de riesgo de la misma entidad.

4. ALESSANDRO CORRIDORI, Propietario de la sociedad Invertácticas S.A.S., accionista de Fabricato S.A. y cliente de Interbolsa, como persona natural y representante legal de Invertácticas S.A.

5. CLAUDIA JARAMILLO PALACIOS, ex funcionaria de Interbolsa, Sociedad Comisionista de Bolsa, y compañera sentimental de Alessandro Corridori.

6. MARÍA EUGENIA JARAMILLO PALACIOS, accionista de Fabricato S.A., cliente de Interbolsa, hermana de Claudia Jaramillo Palacios.

7. CARLOS ARTURO NEIRA LLACHE, propietario de la sociedad P & P Investment S.A.S., cliente de Interbolsa S.A. y accionista de Fabricato S.A., a través de P & P Investment.

8. EDUARDO ADOLFO COLMENARES PEDREROS, accionista mayoritario de la I.P.S. Clínica la Candelaria S.A.S.

9. LUZ ANDREA COLMENARES PEDREROS, representante legal de la I.P.S. Clínica La Candelaria S.A.S. A Luz Andrea y Eduardo Adolfo Colmenares Pedreros, se les imputó únicamente el delito de operaciones

no autorizadas, por los hechos relacionados con la triangulación de Clínica la Candelaria, Interbolsa SAI e Interbolsa Holding.

10. ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO, Presidente de Interbolsa y participe del comité de riesgo de la misma sociedad.

11. LUIS FERNANDO RESTREPO JARAMILLO, miembro principal de la junta directiva de Interbolsa, integrante del comité de riesgo de esa sociedad y miembro del comité de inversiones de la Sociedad Administradora de Inversión Interbolsa SAI.

12. ÁLVARO ANDRÉS CAMARO SUÁREZ, vicepresidente de la Sociedad Administradora de Inversión Interbolsa SAI e integrante del comité de riesgo de Interbolsa, Sociedad Comisionista de Bolsa.

Por estos mismos hechos hay 13 personas con imputación de cargos.

Fueron privados de la libertad:

1. ALESSANDRO CORRIDORI
 2. CLAUDIA JARAMILLO PALACIOS
 3. CARLOS ARTURO NEIRA LLACHE
Detención preventiva en el lugar de residencia señalada por los imputados:
 4. RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA
 5. MARÍA EUGENIA JARAMILLO PALACIOS
 6. ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO
- ESTADO DEL PROCESO:

La audiencia de formulación de imputación de cargos finalizó el 17 de julio de 2015. En la misma, la Fiscalía General de la Nación descubrió todos sus argumentos probatorios contra los implicados.

De los comerciales implicados en los hechos: se formuló imputación contra CLEMENCIA SOTO, comercial de Interbolsa SCB., aceptó los cargos por manipulación fraudulenta de especies, administración desleal y concierto para delinquir.

Proceso fondo premium

Dentro de esta actuación se encontró que, a través de las sociedades RENTAFOLIO BURSÁTIL Y FINANCIERO SAS, y VALORES INCORPORADOS SAS se captó dineros del público, sin estar autorizados para ello por parte de la Superintendencia Financiera.

Así mismo, se encontró que el PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND, que tenía su sede en Curazao, venía promocionando sus productos a través de Interbolsa en desarrollo de un contrato de correspondencia, de manera engañosa ofreció sus productos a los posibles inversionistas induciéndolos al error para que realizaran las inversiones en el extranjero. Dineros que a la postre salieron por diferentes canales burlando las vías autorizadas.

Estos recursos terminaron en cuentas de sociedades no autorizadas como INTERTOURIST, PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISOR, ANDEAN CAPITAL MARKET, entre otras. La cuantía de los dineros apropiados es de \$64 millones de dólares.

Proceso Torres Cortes

La Fiscalía adelantó investigaciones contra la SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA TORRES CORTES, de la Bolsa Mercantil con los siguientes resultados:

Decisiones	
Imputación	5 personas
Condenas	Pendientes
Proceso en Juicio oral	2
Preclusiones	0
Principios de oportunidad	0
Principios en trámite	0
Preacuerdos	0
Imputaciones programadas para este año	5 personas
Aceptación de cargos parcial	2
Aceptación de cargos Total	2

Victimas de este caso: 350

Monto de la apropiación: 50.000 millones de pesos.

Delitos

1. Captación masiva y habitual de dinero (art. 316)
2. No reintegro (art. 316 a)
3. Estafa masiva y agravada. (art 246, 267 y 31)
4. Concierto para delinquir (art. 340)
5. Administración Desleal (Art. 250B)
6. Fraude a resolución judicial (Art. 454)

La investigación comenzó por la remisión que realizara la Superintendencia Financiera el 19 de febrero de 2013 y por la denuncia presentada el 8 de julio del mismo año por parte de Martha Nieto López, en calidad de Liquidadora y representante legal de la empresa denominada Torres Cortes S.A. hoy en liquidación forzosa administrativa, Comisionista de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Dentro de los hechos denunciados están:

- 1-El manejo irregular dado a los recursos entregados por los clientes a la sociedad Torres Cortes y sus representantes legales.
- 2- Actividades ilícitas que excedieron el objeto social de la sociedad comisionista de bolsa Torres Cortes.
- 3-Inconsistencia de la información finan-

ciera y contable de Torres Cortes S. A., en el balance fiduciario y manejo de la cuenta compensada.

La Fiscalía General de la Nación logró establecer que los señores **JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS, LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO** como representantes legales, **CARLOS ANDRÉS MÉNDEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS JUNCA LEÓN** en su calidad de funcionarios “trader”, y **DIANA MARCELA ELGADILLO MURCIA**, como gerente administrativa y jurídica, utilizaron como vehículo a la comisionista de bolsa **TORRES CORTES S.A.**, para realizar operaciones de captación de dineros del público a nombre de ellos y en representación de la sociedad comisionista de bolsa y a nombre de otras sociedades, entre las cuales se encuentran **TORRES CONSTRUCCIONES Y VALORES S.A.S. -TCVALY FINDECARIBE LTDA.**

Desbordando así el objeto social de la comisionista. Realizando actividades no autorizadas, captaron masiva y habitualmente \$45.245.230.250, y USD \$191.574, recursos pertenecientes a 255 personas, casi todas de la tercera edad. Cifra que recibieron a través de artificios y engaños a sus clientes.

Situación jurídica de los procesados, representantes legales y dueños de la firma: el 4 de junio de 2015, la defensa de los señores

JOSÉ LEONEL TORRES CORTES y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, solicitó ante el centro de servicios judiciales de Paloquemao, audiencia atípica de allanamiento de cargos, con fundamento en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, diligencia que fue asignada al juzgado 73 con función de control de garantías.

El señor **JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS**, aceptó la totalidad de los cargos por los delitos de captación masiva y habitual de dineros, en concurso heterogéneo con los delitos de no devolución de dineros; estafa agravada en modalidad “masa”; administración desleal; ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio y fraude a resolución judicial o administrativa de la policía en calidad de coautor y el delito de concierto para delinquir en calidad de autor, todos a título doloso.

LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, aceptó parcialmente cargos por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, en concurso heterogéneo con los delitos de no devolución de dineros; estafa agravada en modalidad “masa”; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en calidad de coautor; concierto para delinquir en calidad de autor; todos a título doloso.

El 14 de julio de 2015 fue la audiencia de formulación de imputación de cargos contra **DIANA MARCELA DELGADILLO MURCIA**, gerente administrativa y jurídica y contra **JUAN CARLOS JUNCA LEÓN**, trader de la comisionista de bolsa **TORRES CORTES S.A.**, ante el Juzgado 68 con función de Control de Garantías de Bogotá, habiéndosele imputado los siguientes delitos:

A **DIANA MARCELA DELGADILLO MURCIA**, captación masiva y habitual de dinero, en concurso heterogéneo con no

devolución de dineros, estafa agravada en la modalidad de masa, administración desleal, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, en calidad de coautor y concierto para delinquir en calidad de autor; todos a título doloso. Se allanó de manera parcial a los cargos. Aceptó los delitos de captación masiva y habitual de dinero, en concurso heterogéneo con no devolución de dineros, estafa agravada en la modalidad de masa, administración desleal, en calidad de coautor y concierto para delinquir en calidad de autor; todos a título doloso. Y no aceptó los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, en calidad de coautor a título doloso.

En la misma audiencia se imputó a **JUAN CARLOS JUNCA**, los delitos de captación masiva y habitual de dinero, en concurso heterogéneo con no devolución de dineros, estafa agravada en la modalidad de masa, administración desleal, en calidad de coautor y concierto para delinquir en calidad de autor; todos a título doloso. Aceptó la totalidad de los cargos.

Respecto a **CARLOS ANDRÉS MÉNDEZ GÓMEZ**, trader de la comisionista de bolsa, **TORRES CORTES S.A.**, se le efectuó audiencia de imputación de cargos el 19 de mayo de 2015 por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, en concurso heterogéneo con no devolución de dineros, estafa agravada en la modalidad de masa, administración desleal, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los computadores de las FARC

Casos de terrorismo también fueron seguidos de manera permanente desde el despacho del Fiscal General de la Nación, entre ellos, los relacionados con los computadores incautados durante los operativos finales de las autoridades contra Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC, y el Mono Jojoy.

De la memoria de estos portátiles se desprendieron varias líneas de indagación contra el grupo guerrillero. Los procesos fueron avanzando a medida que los peritos e investigadores fueron desenscriptando la información.

Parapolítica

El seguimiento especial también se hizo sobre 44 procesos contra alcaldes de todo el país señalados porque presuntamente colaboraron, por acción u omisión, con grupos paramilitares. En los expedientes figuraban 19 excongresistas, tres gobernadores, varios diputados, además de funcionarios de hospitales y dos empleados de la Fiscalía General de la Nación.

El organismo de investigación también avanza en procesos contra otros políticos, integrantes de las Fuerzas Armadas y empresarios con nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia.

El mismo ejercicio de monitoreo se hizo con la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las FARC y las falsas víctimas de la masacre paramilitar en Mapiripán, Meta.

El hacker

Desde el comienzo la unidad de seguimiento de procesos de alto impacto mantuvo en sus radares dos casos de espionaje electrónico con graves repercusiones para la seguridad nacional. Procesos a los que resultaron vinculados particulares e integrantes de las Fuerzas Armadas.

El caso del hacker Andrés Sepúlveda, llamó la atención también por los graves hallazgos que fueron haciendo los investigadores por sus posibles implicaciones sobre el proceso electoral presidencial de 2014 y sobre el proceso de paz con las FARC.

Así mismo, el monitoreo se hizo al expediente conocido por la opinión pública como Andrómeda, presuntas violaciones ilícitas de comunicaciones, por una unidad en cubierta de integrantes del Ejército.

En el caso del hacker, que se dio tras el allanamiento a su oficina en el norte de Bogotá y su captura, la Fiscalía llegó a un principio de acuerdo con el procesado a cambio de colaboración efectiva con la justicia, lo que le implicó 10 años de cárcel, pena que fue avalada por un juez.

En septiembre de 2015, el juzgado 51 de control de garantías decidió dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Alfonso Hoyos, por ordenar las interceptaciones ilegales y obtener información privilegiada del proceso de paz que adelantaba el Gobierno con las Farc en La Habana. El juez ordenó la detención de Hoyos al considerar que es un peligro para la sociedad.

“No se trata –aseguró el juez– de una persecución que se haya, en este caso, direccionado en contra de este ciudadano por parte de la Fiscalía General, como lo ha argumentado el abogado defensor, y en

justa correspondencia dispone a dictar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del ciudadano Luis Alfonso Hoyos Aristizábal". El procesado se fue del país y es prófugo de la justicia.

La Fiscalía le imputó a Hoyos, asesor espiritual de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, seis delitos. Según la investigación, Hoyos le ordenó a Andrés Fernando Sepúlveda obtener información reservada o secreta en torno a los negociadores de paz. Todo para armar una gran campaña de desprestigio contra los diálogos y afectar la campaña del entonces candidato-presidente Juan Manuel Santos.

Las chuzadas del DAS

Uno de los más grandes escándalos de los últimos años en Colombia corre aún por cuenta de las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS a magistrados, políticos de oposición y periodistas. Este caso originó varios expedientes, entre otras, razones porque entre los involucrados judicialmente había personas con fuero constitucional.

Desde la llegada a la Fiscalía de los doctores Montealegre y Perdomo, y por la importancia y alcances del caso, esos procesos también ameritaron un monitoreo permanente por parte del despacho del Fiscal General.

La base de prácticamente todas investigaciones y condenas contra más de 35 personas, muchas de ellas funcionarios públicos, fue gracias al trabajo de agentes del CTI y Fiscales que se dedicaron al caso desde el 2009.

Esta administración heredó gran parte de estos expedientes, algunos de ellos en etapa ante los jueces y magistrados. Su tra-

bajo consistió en consolidar los procesos que se desprendieron de la investigación central. Así por ejemplo, la Fiscalía imputó cargos en septiembre de 2015 contra el secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, y contra el secretario de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, ambos subalternos del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Entre los condenados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, figura la directora de la Dirección Administrativa de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, secretario General de la presidencia, ambos durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez.

De esta investigación se desprendieron otros procesos penales contra más funcionarios del mencionado gobierno. Entre los primeros sentenciados a penas de prisión estaban los capitanes Jorge Alberto Lagos, jefe de contrainteligencia del DAS, y Fernando Tabares, director de Inteligencia del mismo organismo. Ante las pruebas recaudadas por la Fiscalía aceptaron su responsabilidad en las interceptaciones ilegales y colaboraron con la justicia.

Así mismo, fue condenado William Romero, subdirector de fuentes humanas, quien fue pieza clave del complot para infiltrar e interceptar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Después de un acuerdo con la Fiscalía aceptó testificar en varios casos de las chuzadas del DAS. Romero tenía bajo su mando a la investigadora Alba Luz Flórez Gelves, conocida en los medios de comunicación como la "Mata Hari".

Ante la justicia, Flórez aseguró que el principal objetivo asignado a ella, dentro de ese plan criminal, era reclutar fuentes humanas que suministraran información secreta sobre los magistrados. Dijo que

ese trabajo de infiltración fue pagado con recursos reservados del DAS. La mujer logró reclutar a un policía, al conductor de un magistrado, y a dos empleadas de servicios generales, que llegaron incluso a grabar las reuniones de la Corte Suprema.

Investigaciones de la unidad delegada ante la corte suprema sobre el DAS

Como consta en la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia contra Jorge Noguera, ex director del DAS, la Fiscalía en su intervención destaca la fuerte influencia que ejercían las Autodefensas Unidas de Colombia en la Costa Atlántica, especialmente en el Magdalena.

En esta región se gestó la mayor infiltración al DAS por parte el paramilitarismo, siendo precisamente Jorge Noguera Cotes el principal enlace entre estos grupos al margen de la ley y esa entidad. Por estos hechos fue condenado en 2011 a 25 años de prisión por concierto para delinquir agravado; revelación de asunto sometido a secreto; por ser el autor mediato de los delitos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y, por el homicidio en 2004 del sociólogo y catedrático Alfredo Rafael Francisco Correa De Andreis.

Además de la mencionada investigación, las revelaciones hechas por la revista Semana en 2009, en las que se denunció la interceptación y seguimientos a por lo menos 300 personalidades, provenientes de los más diversos sectores de la sociedad, motivaron no sólo varias investigaciones, sino también el cierre definitivo de la entidad.

En este sentido y de acuerdo con la información recolectada en los procesos que adelantan las fiscalías delegadas ante la

Corte Suprema, desde 2004, integrantes del DAS, de forma permanente, a través del Grupo Especial de Inteligencia G-3, organizaron, dirigieron y en algunos casos promovieron delitos contra organizaciones y defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y otras personalidades de la vida nacional, cuyo aspecto en común, fue su tendencia opositora al gobierno.

Estas labores no fueron improvisadas. Los grupos especiales eran subestructuras adscritas a la Dirección General del DAS, creados a través de actos administrativos con el fin de desarrollar actividades de inteligencia atendiendo a objetivos específicos, pero paralelamente crearon otros grupos que de manera ilegal pudieron definir labores y objetivos propios.

Además del G-3, cuyo objetivo era obtener información sobre ONG como el Colectivo de Abogados JOSÉ ALVEAR RESTREPO, entre otros, la Fiscalía tiene conocimiento de grupos como el de Observación Nacional e Internacional (GONI); el Grupo SIU; el Grupo de Asuntos Especiales (GAES); el Grupo de Inteligencia Estratégica (GIES), entre otros, y sobre los cuales también deberá establecerse si actuaron con apego a la ley.

El DAS, a través de estas unidades, desarrolló operaciones de inteligencia y contra-inteligencia de acuerdo con las características de los objetivos y “blancos” que tenía identificados como amenaza o como prioridad. Es el caso de los miembros de varias ONG, líderes políticos, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y periodistas.

Las constantes discusiones con periodistas críticos del gobierno y las continuas descalificaciones por parte del entonces presidente Álvaro Uribe, coinciden con las distintas operaciones ilegales reali-

zadas por el DAS a estos sectores de la sociedad.

Las interceptaciones, seguimientos ilegales y campañas de desprestigio llevadas a cabo por el DAS fueron enmarcadas en buena medida en lo que al interior de esa entidad se conoció como el caso Transmilenio y cuyo objetivo general era “neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y el mundo”, con el objetivo específico de “establecer vínculos con organizaciones narcoterroristas en busca de judicialización”. Algunos de los denominados marcos de acción dentro de este caso fueron:

-Operación Arauca: cuyo objetivo era establecer vínculos entre CCJAR y el ELN a través de estrategias de sabotaje y cuya acción propuesta era el “intercambio mensajes con cabecilla ELN, el cual será encontrado durante allanamientos (sic)”.

-Operación Risaralda: cuyo objetivo era “generar división entre altos funcionarios de Redepaz, (Ana Teresa Bernal)”, a través de Estrategias de investigación operativa y; desprestigio y sabotaje.

-Operación Europa: gestada con el fin de “neutralizar la influencia en Sistema Jurídico Europeo, Comisión de Derechos Humanos Parlamento Europeo, Oficina Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y gobiernos nacionales”, desprestigiándolos a través de “comunicados y denuncias en página web” y “guerra jurídica”

-Operación Internet: para generar controversia en torno a las ONG, también desprestigiándolas por medio de comunicados y “la creación de las páginas Corporación Verdad y Justicia y Servicio

Colombiano de Información y Estadística para la Prevención del Conflicto”.

Por estas acciones, ocurridas en la administración de Jorge Noguera en contra de opositores del gobierno, las Fiscalías Séptima y Once Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia adelantan al menos siete procesos contra más de treinta funcionarios por los delitos de: Concierto para delinquir, Violación ilícita de telecomunicaciones, Utilización ilícita de equipos transmisores y receptores y Abuso de autoridad por actor arbitrario e injusto. Hasta el momento se han obtenido al menos cuatro condenas, que esperan ser confirmadas por la Corte Suprema, y dos procesos que actualmente se encuentran en etapa de juicio.

En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2009, a Jorge Noguera lo sucedieron en su orden como directores del DAS Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado, Joaquín Polo y Felipe Muñoz. Contra todos ellos, además de otros altos funcionarios y detectives, agentes de la Policía y el C.T.I, así como algunos altos funcionarios de la Presidencia de la República y la UIAF, cursan investigaciones por procedimientos y operaciones ilegales de interceptación de comunicaciones, obtención y divulgación de información financiera e infiltración a través de fuentes humanas en contra de magistrados de la Corte Suprema.

De la misma manera, congresistas, periodistas y, en general, opositores del gobierno Uribe, también fueron objeto de seguimientos pasivos, obtención de información financiera y privada a través de fuentes humanas, interceptación de correos y registros telefónicos, entre otras conductas ilícitas por parte de funcionarios del DAS. Todos estos actos se llevaron a cabo con el ánimo de obtener ilegalmente información a través de los

organismos de inteligencia, para desprestigiarlos.

Los hechos señalados anteriormente, ocurrieron en gran parte durante la administración de María del Pilar Hurtado Afanador, directora del DAS del 30 de agosto de 2007 al 22 de octubre de 2008.

Hurtado llevó a cabo una serie de actos ilícitos, junto con el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas. De acuerdo a la sentencia proferida por la Corte Suprema en contra de Hurtado y Moreno, este último, en reunión realizada el 12 de septiembre de 2007, le comunicó a la recién posesionada Directora del DAS, los temas principales sobre los cuales la presidencia de la República solicitaba adelantar de manera preponderante acciones de inteligencia, entre ellos contra la Corte Suprema, el periodista Daniel Coronell y los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Las labores en relación a estos congresistas ya se venían adelantando por el organismo, no obstante, Hurtado dio instrucciones de incrementarlas.

Respecto a las actividades de inteligencia que conciernen a la Corte Suprema, estas no pueden desligarse del público y notorio enfrentamiento entre el alto tribunal y presidente Álvaro Uribe a finales de 2007, cuando esta corporación adoptaba decisiones trascendentales en el marco de investigaciones que develaron los nexos de grupos paramilitares y varios políticos, algunos de ellos muy cercanos al jefe del Estado.

En contra de magistrados de la Corte se desplegaron actividades de inteligencia sin razón legítima, como la infiltración de personal para obtener grabaciones de sesiones reservadas, seguimientos patrimoniales y consultas en bases de datos reservados como las de la UIAF, sin orden judicial, ni

motivo válido de inteligencia, con el fin de establecer presuntos vínculos entre los magistrados e integrantes de grupos ilegales y narcotraficantes, grabaciones de personas que involucrarían a miembros de la Corte con paramilitares y seguimiento de los viajes de los magistrados.

En desarrollo de estas actividades, el Departamento Administrativo de Seguridad a través de sus diferentes dependencias, desplegó detectives a varios lugares del país para recolectar información, contactó fuentes humanas, elaboró perfiles de los magistrados en los cuales consignó, además de sus datos personales, la posición ideológica frente al gobierno; estas labores se llevaron a cabo con dineros públicos.

Según la sentencia de la Corte Suprema contra Hurtado y Moreno, las acciones perpetradas en contra del máximo tribunal, no obedecieron a un plan aislado de funcionarios del DAS de menor o mediano rango, sino a uno liderado por el Secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, la entonces directora del organismo de inteligencia Martha Leal y su Jefe de Inteligencia, el capitán Fernando Alonso Tabares Molina, las cuales se enmarcaron en las Operaciones Escalera y Paseo.

La sentencia también señala los seguimientos a los excongresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro como “objetivos institucionales” por parte de las dependencias de inteligencia y contrainteligencia del DAS. Al igual que los magistrados, los senadores hicieron parte de los denominados “blancos políticos” y por lo tanto, materia de actividades ilícitas como seguimientos sistemáticos, obtención de manera ilegal de información personal y familiar, interceptación y monitoreo de correos electrónicos, consultas en bases de datos privadas con información financiera, datos entregados por personal de

sus esquemas de seguridad sin mediar orden judicial, hechos que se motivaron por los supuestos vínculos de los políticos con las FARC y/o con el gobierno venezolano considerado éste como peligroso para la estabilidad de la región por sus declaraciones de apoyo a la guerrilla.

Otros de los objetivos señalados por Bernardo Moreno a María del Pilar Hurtado fue el periodista Daniel Coronell, contra quien se realizaron seguimientos sin autorización judicial, los cuales incluyeron a su esposa. De acuerdo a lo señalado por Martha Leal y el ex detective Fabio Duarte Traslaviña, citados en la sentencia de la Corte contra Moreno y Hurtado, “los seguimientos a Daniel Coronell no fueron fáciles de ejecutar por las medidas de autoprotección que él tenía implementadas, sin embargo, se emplearon detectives y una fachada para vigilar de cerca su residencia y movimientos”.

Los seguimientos tuvieron por objeto identificar las fuentes del periodista, el cual era un reconocido crítico de las actuaciones del presidente Uribe y sus allegados.

Por estos hechos ocurridos durante la administración de María del Pilar Hurtado, las fiscalías Segunda y Octava Delegadas ante la Corte Suprema adelantaron 11 investigaciones contra aproximadamente 10 funcionarios y por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de la función pública, violación ilícita de comunicaciones agravada, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, cohecho propio y peculado.

Hasta el momento se han proferido al menos tres sentencias condenatorias y dos procesos se encuentran en los despachos de los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Anexo 1. Relación de investigaciones adelantadas por la unidad delegada ante la corte suprema de justicia

Fiscalía Encargada	Proceso No 12945			
	Delitos por los que se investiga	Imputados / Denunciados	Estado del Proceso	Actuaciones Procesales
Fiscalía Once delegada ante la Corte Suprema de Justicia	<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir - Violación ilícita de telecomunicaciones - Utilización ilícita de equipos transmisores y receptores - Abusos de autoridad por actor arbitrario e injusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Enrique Alberto Ariza Rivas - Jorge Armando Rubiano Jiménez - Hugo Daney Ortíz García - Jackeline Sandoval Salazar - Martha Inés Leal Llanos - José Alexander Velásquez Sánchez 	Inactivo	<p>Sentencia condenatoria por parte del Juzgado 3 Penal de Descongestión del circuito especializado de Bogotá.</p> <p>La sentencia fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 7 de marzo de 2014. Actualmente está surtiendo recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia.</p>
	Proceso No 12753			
	<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir - Violación ilícita de telecomunicaciones - Utilización ilícita de equipos transmisores y receptores - Abusos de autoridad por actor arbitrario e injusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mario Orlando Ortiz Mena - Ignacio Moreno Tamayo - Rodolfo Medina Alemán - Gian Carlo Auque de Silvestri - Eduardo Aya Castro 	Inactivo	<p>Sentencia condenatoria por parte del Juzgado 6 Penal del circuito especializado de Bogotá.</p> <p>La sentencia fue apelada y actualmente el recurso está siendo desatado por parte del Tribunal Superior de Bogotá.</p>

Proceso No 12839			
<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir - Violación ilícita de telecomunicaciones - Utilización ilícita de equipos transmisores y receptores - Abusos de autoridad por actor arbitrario e injusto 	Carlos Alberto Arzayús Guerrero	Inactivo	Sentencia condenatoria por parte del Juzgado 6 Penal del circuito especializado de Bogotá. La sentencia fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 2 de febrero de 2015.
Proceso No 13099			
<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir - Violación ilícita de telecomunicaciones Utilización ilícita de equipos transmisores y receptores - Abusos de autoridad por actor arbitrario e injusto 	<ul style="list-style-type: none"> - Fabio Duarte Traslaviña - Germán Enrique Villalba Chaves 	Inactivo	Sentencia condenatoria por parte del Juzgado 6 Penal del circuito especializado de Bogotá. Los condenados se acogieron a sentencia anticipada y actualmente se encuentra ejecutoriada.
Proceso No 13153			
- Concierto para delinquir agravado	<ul style="list-style-type: none"> - Carlos A. Herrera Romero - Oscar Barrero López - Carlos Fabián Sandoval Sabogal - Ibet Senovia Gutierrez Guardo - Juan Carlos Sastoque Rodríguez - Neider de Jesús Ricardo Hoyos - Ronald Harbey Rivera Rodríguez - José Alexis Mahecha Acosta - William Gabriel Romero Sánchez - Germán Albeiro Ospina Arango - Sergio Pérez Barrera - William Alberto Merchán López - Jesús Hernando Caldas Leyva - Juan Carlos Gutiérrez Galván - Juan Carlos Benavides - Carlos Alberto Orozco Garcés - Jimmy Galvis Caballero - Blanca Cecilia Rubio Rodríguez - Astrid Fernanda Cantor Varela 	Activo	Resolución que resuelve situación jurídica confirmada por parte de la Vicefiscalía el pasado 22 de septiembre de 2015. El proceso fue enviado el día 26 de octubre de 2015, al despacho del Señor vicesfiscal para que se resuelva un recurso de apelación.
Proceso No 110013107006201100077			
<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir - Violación ilícita de telecomunicaciones - Utilización ilícita de equipos transmisores y receptores - Abusos de autoridad por actor arbitrario e injusto 	José Miguel Narváez Martínez	Activo	Juicio Oral

Fiscalía Encargada	Proceso No 12490 – 7			
	Delitos por los que se investiga	Imputados / Denunciados	Estado del Proceso	Actuaciones Procesales
Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia	<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir - Violación ilícita de telecomunicaciones Utilización ilícita de equipos trasmisores y receptores - Abuso de autoridad por acto arbitrario - Concierto para delinquir 	<ul style="list-style-type: none"> - Jorge Aurelio Noguera Cotes (Ex Director General del DAS) 		<p>Diligencia remitida a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para su etapa de juicio, donde actualmente tramita bajo el radicado U.I 39931</p>

Fiscalía Encargada	Proceso No. 110016000102200800240			
	Delitos	Imputados / Denunciados	Estado del Proceso	Actuaciones Procesales
Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia	<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir - Peculado por apropiación, - Peculado por uso y - Violación ilícita de comunicaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Edmundo del Castillo Restrepo (ex secretario Jurídico de la Presidencia de la República) - César Mauricio Velásquez Ossa (Ex Secretario de Prensa de Presidencia de la República) - Diego Álvarez Betancourt (Abogado - particular) 	Investigación	<p>9 de septiembre de 2015 se formuló imputación Se han desarrollado varias labores investigativas, la última orden es del 20 de octubre de 2015 y se recibió informe con resultados parciales el 12 de noviembre</p>
	Proceso No. 110016000686200900002 INDAGACIÓN MATRIZ			
	<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir agravado - Violación ilícita de comunicaciones - Peculado - Cohecho propio - Otros 	<ul style="list-style-type: none"> - Ex funcionarios del DAS 	Indagación	<p>Programa metodológico, múltiples órdenes a policía judicial.</p> <p>Las últimas órdenes se expidieron el 23 de noviembre de 2015.</p>
	Proceso No. 110016000102200900249			
	<ul style="list-style-type: none"> - Fraude procesal - Violación ilícita de comunicaciones - Falsedad ideológica en documento público - Cohecho propio - Concierto para delinquir agravado 	<ul style="list-style-type: none"> - Oswaldo Villamil Torralba (Policía Nacional) - Ferney Enrique Galvis Rojas (Policía Nacional) - Aldo Francisco Pérez Yosa (C.T.I.) 	<p>Se encuentra al despacho del Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER para resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación</p>	<p>El 6 de junio de 2014, el Juzgado 8 Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de Bogotá profirió sentencia condenatoria contra los tres investigados por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público, cohecho propio y concierto para delinquir agravado.</p> <p>El 27 de agosto de 2014, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia con-</p>

				denatoria, pero decretó la prescripción de la acción penal respecto del delito de violación ilícita de comunicaciones agravada. La defensa de Aldo Francisco Pérez Yosa interpuso y sustentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia.
Proceso No. 110016000102201000088				
<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir agravado - Prevaricato por acción - Abuso de función pública - Violación ilícita de comunicaciones agravada 	<ul style="list-style-type: none"> - Luz Marina Rodríguez Cárdenas (Ex directora General Operativa del DAS) - Bernardo Murillo Cajamarca (Ex Coordinador del Grupo Anticorrupción del DAS) 	<p>Se encuentra al despacho del Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Dr. EYDER PATIÑO CABRERA para resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación.</p>	<p>El 8 de junio de 2012, el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá profirió sentencia condenatoria por el delito de prevaricato por acción y absolutoria por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones agravada.</p> <p>El Tribunal Superior de Bogotá en proveído del 2 de mayo de 2014, resolvió (i) revocar la absolución por dos delitos; (ii) condenar a los acusados por las conductas de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública; y (iii) revocar la prisión domiciliaria.</p> <p>Mediante auto del 23 julio de 2014, el Tribunal declaró la preclusión por prescripción respecto del delito de abuso de función pública y modificó la pena la pena de prisión a 130 meses y 16 días. La decisión fue recurrida en reposición por la Fiscalía, pero el Tribunal no accedió a lo peticionado por el ente acusador.</p> <p>La defensa interpuso y sustentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia.</p>	
Proceso No. 110016000102201000217				
<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir agravado 	<ul style="list-style-type: none"> - Martha Inés Leal Llanos (Ex Subdirectora de Operaciones de la D.G.I) - William Gabriel Romero Sánchez (Ex Subdirector de Fuente Humanas) 	<p>Se está tramitando el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra decisión de no preclusión de la investigación.</p>	<p>En este asunto se presentó escrito de acusación que correspondió por reparto al Juzgado 6º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. El 14 de julio de 2014 culminó la audiencia de formulación oral de la acu-</p>	

				<p>sación y se convocó para la audiencia preparatoria los días 6 de octubre de 2014, 13 de enero, 25 de marzo, 5 de mayo, 22 y 23 de junio de 2015.</p> <p>El 1º de septiembre de 2015 la defensa solicitó la preclusión de la actuación, petición que fue negada en primera instancia. Actualmente las diligencias se encuentran en el Tribunal Superior de Bogotá surtiendo el recurso de apelación.</p>
Proceso No. 110016000102201000245				
<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir agravado - Prevaricato por acción - Abuso de la función pública - Violación ilícita de comunicaciones agravada 	<ul style="list-style-type: none"> - Jorge Alberto Lagos León (Subdirector de Inteligencia) - Fernando Alonso Tabares Molina (Director General de Inteligencia) 	Sentencia ejecutoriada	<p>El 7 de marzo de 2011, el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra de los acusados por todos los delitos.</p> <p>La decisión fue apelada y en proveído del 31 de mayo de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá modificó la sentencia (pero mantuvo la condena).</p> <p>El 18 de diciembre de 2014 se llevó a cabo audiencia de lectura del fallo de casación proferido por la Sala de Conjuces de la Corte Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 2014, en el que decidió no casar la sentencia de segundo grado, quedando en firme la condena.</p>	
Proceso No. 110016000102201100027				
<ul style="list-style-type: none"> - Concierto para delinquir agravado - Prevaricato por acción - Abuso de la función pública y - Violación ilícita de comunicaciones agravada 	<ul style="list-style-type: none"> - Gustavo Sierra Prieto (Ex Subdirector de Análisis del DAS) 	Sentencia ejecutoriada	<p>El 5 de agosto de 2011, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá profirió sentencia condenatoria por todos los delitos.</p> <p>El 18 de octubre de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público, modificó la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.</p> <p>El 30 de julio de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de</p>	

				Justicia inadmitió la demanda de casación interpuesta por el Ministerio Público, quedando en firme la condena.
Proceso No. 110016211001201000089				
- Peculado por apropiación	- Alba Luz Flórez Gélvez (EX Detective del DAS)	Indagación	Programa metodológico y órdenes a policía judicial. Las últimas órdenes se expidieron el 18 de noviembre de 2015.	
Proceso No. 110016000101201100026				
- Peculado por apropiación - Peculado por uso	- Jorge Alberto Lagos León (Subdirector de Contrainteligencia) - Fernando Alonso Tabares Molina (Director General de Inteligencia)	Indagación	Programa metodológico y órdenes a policía judicial El 30 de octubre de 2015 se prorrogó orden a policía judicial.	
Proceso No. 110016000102201100236				
- Concierto para delinquir agravado - Violación ilícita de comunicaciones - Falsedad ideológica en documento público - Abuso de función pública - Peculado - Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio	- Andrés Mauricio Peñate Giraldo - Joaquín Polo Montalvo - Felipe Muñoz Gómez (Ex Directores del DAS)	Indagación	Programa metodológico y Órdenes a policía judicial Se encuentra en estudio informe de policía judicial recibido en septiembre de 2015	

Fiscalía Encargada	Proceso No 110016000102200900122			
	Delitos por los que se investiga	Imputados / Denunciados	Estado del Proceso	Actuaciones Procesales
Fiscalía Segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia	- Concierto para delinquir agravado - Abuso de función pública - Interceptación ilícita de comunicaciones - Falsedad ideológica en documento público	- María del Pilar Hurtado Afanador (Ex Directora del DAS) - Bernardo Moreno Villegas (Ex Secretario General de la Presidencia)	Condena de 14 años y multa de 43,33 S.M.L.M.V y 8 años y multa de 6,64 S.M.L.M.V	Mediante sentencia del 28 de Abril de 2015 se profirió sentencia condenatoria, negando el subrogado penal de la ejecución condicional

Falsos positivos

En la Fiscalía hay cerca de 2.500 procesos por falsos positivos. Un estudio interno sostiene que de un total de 2.653 casos de crímenes atribuibles a miembros de la Fuerza Pública investigados, 2.208 corresponden a presuntos falsos positivos, que fueron cometido contra 3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas.

El despacho del Fiscal General apoyó e impulsó los procesos de investigación por falsos positivos y homicidios de personas protegidas. Aunque esta escabrosa práctica de integrantes del Ejército fue descubierta por las autoridades en 2008, los resultados de las investigaciones se han visto durante los últimos cuatro años.

La Fiscalía logró individualizar a los autores de estos crímenes y presentarlos ante jueces, entre ellos oficiales, suboficiales y soldados. Las condenas contra uniformados son múltiples y están basadas en investigaciones sólidas y detalladas en despachos judiciales de gran parte del país. Entre estos casos figura el del coronel Robinson Javier González del Río, procesado además por fabricación, tráfico y porte de armas.

Unidades de la Fiscalía también adelantan procesos contra generales y coroneles de las Fuerzas Militares por acción u omisión en estos casos, donde jóvenes fueron engañados con promesas de trabajo, fueron sacados del lugar de residencia y después resultaron muertos en falsos operativos oficiales contra la guerrilla para hacer pasar a los miles de “reclutados” como integrantes de grupos armados ilegales.

Homicidios cometidos por agentes del estado

La temática de homicidios cometidos por agentes del Estado ha sido considerada como una de las más relevantes dentro de la priorización presentada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

A través de la aplicación de los criterios de priorización desarrollados por la Directiva 001 de 2012, a parte de las variables de número de hechos y víctimas reportadas, se ha tenido en cuenta el cumplimiento de dos criterios complementarios: la relevancia a nivel internacional y la viabilidad y factibilidad de los casos.

Desde antes de 2008, la comunidad internacional mostró su preocupación por este tema, específicamente frente a las muertes u homicidios, presuntamente, cometidos en combate. Además los reportes de los organismos internacionales ya habían establecido la necesidad de investigar este tipo de hechos como crímenes internacionales realizados por miembros del Estado. El informe de Philip Alston, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, decía:

[...] ejecuciones de ese tipo en todo el país, cometidas en numerosos departamentos y por un gran número de unidades militares diferentes. De mis investigaciones se desprende claramente que los miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia han cometido un número considerable de ejecuciones ilegales y que el cuadro sistemático de falsos positivos se ha repetido en todo el país. Ha habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por ape-

nas algunos soldados o unidades renegados, o “manzanas podridas”.

La factibilidad fue justificada a partir de la cantidad de documentación que algunos de los casos registraban en determinadas regiones. Esto llevó a que se plantearan estrategias específicas para la caracterización del fenómeno de las ejecuciones y la identificación de metodologías tendientes a contribuir en el avance de las investigaciones.

A enero de 2015, los 2.476 casos asignados en la Dirección estaban repartidos en 93 despachos de los 108 existentes. Por ejemplo, 53 procesos correspondientes a hechos en los que se involucran miembros del Batallón de Artillería No. 4, coronel Jorge Eduardo Sánchez, perteneciente a la IV Brigada, están disgregados en 15 despachos; cinco ubicados en Medellín y 10 en Bogotá. 40 procesos del Batallón de Ingenieros No. 4, general Pedro Nel Ospina, adscrito a la IV Brigada se adelantan en 17 Fiscalías, situación que demuestra una gran dispersión de los procesos referentes a una misma Unidad Táctica y por lo tanto la imposibilidad de establecer una mejor metodología para la investigación y la judicialización.

Por lo anterior, se propuso conformar un grupo de fiscales e investigadores que conocedores de una situación particular, por región, unidad militar y periodo de tiempo, asuma las investigaciones respectivas, a instancias de los resultados que sobre el particular arroje el análisis criminal que lleven a cabo algunos investigadores que se dediquen al análisis de casos. Y además, se planteó la necesidad de conformar un grupo de analistas que contribuya en la construcción de contextos de situaciones, patrones y la búsqueda de variables coincidentes entre los casos, no sólo para la asociación sino para darle una mejor utilización a la información.

Ejecuciones extrajudiciales

El contexto y el origen de este fenómeno que involucra a las fuerzas armadas en crímenes, y la forma cómo la Fiscalía General de la Nación asumió ese reto de investigación.

Los casos de ejecuciones extrajudiciales se remontan a la década de los 80, pero fue a partir de 2002, en el marco de la Política de Seguridad Democrática, que las muertes cuestionadas en combate aumentaron vertiginosamente.

El crecimiento en la financiación del sector defensa y la apuesta del gobierno en éste como su política insignia, frente a la necesidad de reducir al enemigo y mostrar un avance en la seguridad nacional aumentó, no sólo los niveles de presión en la tropa, sino los reconocimientos y beneficios para la los miembros de la Fuerza Pública que trabajaran acorde con los lineamientos de la administración.

La década del noventa permitió el avance de los grupos armados ilegales, los cuales hacían presencia en la mayoría del territorio nacional. Ésta década significó una evolución importante para las FARC. Frente a sus objetivos estratégicos se fortalecieron en la región Andina y se consolidaron en varias zonas importantes para la economía, gracias a la debilidad de las fuerzas del Estado.

Aunque las estructuras paramilitares también aumentaron significativamente su capacidad y el control territorial, fue frente a las FARC, objetivo principal de la Fuerza Pública, que se dieron cambios en la estrategia militar y se fortaleció el sector defensa.

Ante este panorama, los primeros años del siglo XXI, durante la última etapa del

gobierno de Andrés Pastrana, las Fuerzas Militares empezaron a fortalecerse y adaptarse frente al crecimiento de la capacidad operativa del enemigo. Vinieron transformaciones doctrinarias, organizacionales y operacionales. Pero aun así, existían fallas en el orden político que no permitían que se estableciera una contraofensiva efectiva.

Las carencias de las Fuerzas Armadas resaltadas con el avance de las FARC, empezaron a ser mitigadas con los cambios en la estrategia contrainsurgente impulsada por el Plan Colombia desde 1998, pero fueron en su mayoría superadas con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2002. Se estableció un Plan Nacional centrado en la seguridad, en el que se definió un enemigo claro, una estrategia integral fortaleciendo a todas las fuerzas y se impuso un duro ingrediente de acciones cívico-militares, con el cual no sólo se pretendía eliminar el objetivo militarmente, si no además desmontar su base social a partir del acercamiento estatal a la población, por medio de la Fuerza Pública.

“La Política de Defensa y Seguridad Democrática”, como fue conocido el Plan Nacional de la administración Uribe, expedido en junio de 2003, impulsó el aumento de unidades tácticas, estableció la necesidad de la profesionalización de la tropa y la modernización de las Fuerzas Militares. Para lo cual, el gobierno expidió decretos y directrices para incentivar la presentación de bajas y la colaboración de la población con información relevante para dismantelar la “amenaza terrorista”.

Incentivos y presiones

A partir de la necesidad por mostrar resultados ante la nueva estrategia militar, el interés por legitimar la presencia militar en el territorio nacional y demostrar el

éxito de la Política de Defensa y Seguridad Democrática en la recuperación de la seguridad, dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército se desarrollaron mecanismos de presión e incentivos que hicieron que las Unidades Tácticas compitieran por número de bajas.

En territorios en los que la estrategia militar logró replegar a la guerrilla y los combates disminuían cada vez más, surgió la necesidad de establecer estrategias para entregar resultados, que según algunos miembros del Ejército, se referían a bajas en combate, por lo que se empezó a incrementar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales.

Sumado a esto, según varias declaraciones de diferentes miembros de la Fuerza Pública, se creó un sistema de incentivos que variaban entre días de vacaciones, condecoraciones, felicitaciones, ascensos y cursos de formación. Lo que motivó a que varias unidades tácticas replicaran las acciones y así se diera un aumento de este tipo de homicidios.

“Hubo además – dice Philip Alston, informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de Naciones Unidas-, algunos alicientes: un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera a la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”.

Estrategia de investigación

Con el fin de cumplir con el propósito planteado, la Fiscalía General de la Nación, estableció una hoja de ruta que va desde el procesamiento y el conocimiento de la totalidad de la información consignada en los procesos sobre homicidios cometidos por agentes del Estado con variables relacionadas con los hechos, las víctimas, los vinculados y el avance procesal, hasta la reestructuración y redistribución de la carga laboral.

Los datos sobre las investigaciones que se llevan en esta Dirección permiten formular una distribución preliminar teniendo en cuenta los criterios antes mencionados como factores de asociación. Por ejemplo, el criterio subjetivo que versa sobre la víctima y el victimario. La variable victimarios, que incluye a todos aquellos que intervinieron como autores o partícipes de la conducta punible, obliga a determinar el rol en la comisión de los delitos, la calidad del interviniente como miembro de Fuerza Pública y la comprensión de ésta estructura armada, organizada y jerarquizada.

De acuerdo a esto, un mismo fiscal o fiscales deben dirigir las investigaciones contra miembros de una determinada unidad táctica (Batallones y Fuerzas de Tareas) y en lo posible, una misma fiscalía regional, adscrita a ésta Dirección, tenga a su cargo los procesos de las mismas unidades operativas menores (Brigadas). Lo que permite comprender la composición orgánica y funcional de la unidad militar y determinar la participación de los soldados, suboficiales y oficiales dentro de la conducta punible, teniendo en cuenta la organización jerárquica, cadena de mando, los periodos de comandancia, la jurisdicción, entre otros factores.

Con la agrupación por unidad militar, se podrá analizar el otro componente del criterio subjetivo: las víctimas. Con la conden-

sación de casos, los fiscales podrán evaluar las calidades, a partir de circunstancias de vulnerabilidad que deriven de condiciones sociales, económicas y/o culturales, las cuales serán identificadas a partir del grupo étnico, género, edad, condiciones de discapacidad, orientación sexual, entre otras condiciones sociales y ocupación.

Lo anterior será reforzado con el análisis de los criterios objetivos los cuales se relacionan con la gravedad y representatividad de las conductas punibles. La gravedad se determina con el grado de vulneración de los derechos fundamentales, los costos sociales, la cantidad y la frecuencia del delito, así como el número de víctimas.

La representatividad se puede entender como la importancia de las alternativas investigativas y judiciales, además de la relevancia y capacidad de visibilizar patrones y modus operandi.

Es evidente que la comisión de los homicidios por Agentes del Estado revisten la suficiente gravedad y representatividad, no obstante hay ciertas unidades militares que recogen un mayor número de casos las cuales deberán ser priorizadas para la aplicación de la estrategia de investigación y judicialización, traducida en comunidad probatoria, economía procesal y especialidad investigativa que viabilicen los procesos en curso. Para lograrlo, es necesario aumentar los recursos humanos y físicos en las investigaciones y judicializaciones.

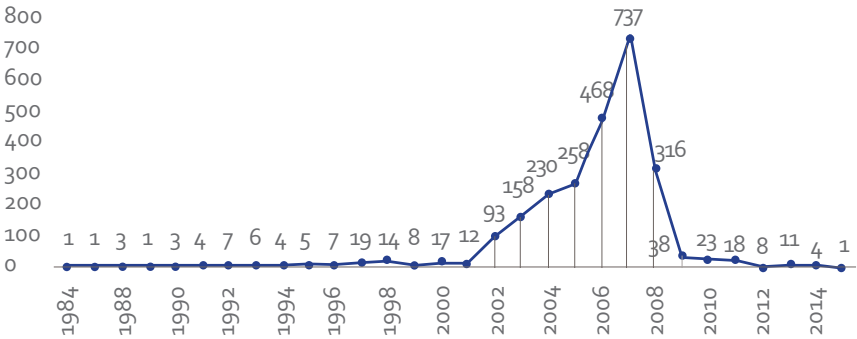
Los procesos

Casos activos	Ley 600	Ley 906
2308	1.453 (62%)	898 (38%)

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DNFEDHDIH) para octubre de 2015 tenía activos 2.308 casos por homicidios cometidos por agentes del estado, de los cuales 1.453 se llevan por ley 600 de 2000 y 898 por ley 906 de 2004. En los cuales se cuentan 4.532 víctimas, de estas 234, es decir el 5% son menores. Como se estableció anteriormente y como lo muestra la siguiente gráfica, hay un crecimiento de la existencia de casos desde el 2002, el cual logra su pico más alto en 2007 con 737 hechos y desciende significativamente en 2009.

Gráfica 1. Homicidios presuntamente cometidos por Agentes del estado – cantidad por año de ocurrencia del hecho



Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Por estas investigaciones se han vinculado, hasta octubre de 2015, a 5.393 agentes del Estado, como lo muestra la siguiente tabla, 95% son miembros del Ejército y el 5% restante se reparte entre las otras Fuerzas Armadas, además de la Policía y el DAS.

Tabla 2. Agentes del estado vinculados		
FUERZA/AÑO	2014	2015
EJERCITO NACIONAL	4.894	5.393
POLICIA NACIONAL	94	110
ARMADA NACIONAL	95	95
FUERZA AEREA	2	2
DAS	21	21
CTI	0	0
TOTAL	5.106	5.621

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

De estos, han sido condenados 961 miembros de la Fuerza Pública y 249 han sido absueltos. La mayoría de ellos, 891 eran del Ejército seguidos de 11 miembros de la Policía y 10 de la Armada.

Tabla 3. Miembros del ejercito nacional condenados		
GRADO/AÑO	2014	2015
CORONEL	3	4
TENIENTE CORONEL	3	3
MAYOR	13	13
CAPITÁN	22	23
TENIENTE	66	66
SUBTENIENTE	26	26
SARGENTO PRIMERO	25	25
SARGENTO VICEPRIMERO	19	19
SARGENTO SEGUNDO	27	27
CABO PRIMERO	20	20
CABO SEGUNDO	28	28
CABO TERCERO	28	28
DRAGONEANTE	2	2
SOLDADO	576	604
POR ESTABLECER RANGO	4	3
TOTAL	862	891

La estrategia también va encaminada a aumentar el número de oficiales y suboficiales vinculados, y por la gran concentración de casos por unidad táctica deberían ser objeto de investigación. Como se ve en la tabla anterior, la investigación se ha centrado en los autores materiales, soldados profesionales; esto debido a la falta de acercamiento de un mismo fiscal a todos los casos que sobre un Batallón conoce la dirección de Derechos Humanos y por tanto no se visibiliza la responsabilidad del comandante.

A partir de los datos generales, el acompañamiento, y apoyo que esta Dirección ha tenido de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en el análisis cuantitativo de información de casos sobre homicidios cometidos por agentes del Estado, especialmente del Ejército, denominados ejecuciones extrajudiciales, se analizaron los datos por departamento entre 2000 y 2010, estableciendo las principales unidades tácticas con mayor número de casos que sirvieron como la primera aproximación para el análisis.

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Tabla 4. Unidades tácticas antioquia

VÍCTIMAS VINCULADAS/ ANTIOQUIA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
DIV-07, BR-4, Batallón de Artillería No. 4 CR. Jorge Eduardo Sánchez (BAJES)	0	0	18	32	79	25	13	19	0	0	0	186
DIV-07, BR-4, Batallón de Infantería No. 10 CR. Atanasio Girardot	0	0	3	8	7	16	29	26	15	0	0	104
DIV-07, BR-4, Batallón de Infantería No. 32 CR. Pedro Justo Berrio	10	0	0	5	4	30	20	4	0	0	0	73
DIV-07, BR-4, Batallón No. 4 de Ingenieros Pedro Nel Ospina (BIOSP)	2	0	18	4	8	10	26	9	1	1	0	61
ANTIOQUIA, EJÉRCITO, SIN REPORTAR BATAILLÓN	2	0	9	3	5	3	8	17	10	2	0	59
DIV-07, BR-4, AFEUR No. 5 Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas	0	0	1	1	16	17	4	3	0	0	0	42
DIV-07, BR-4, Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral	0	0	0	2	14	19	0	7	0	0	0	42
DIV-07, BR-4, Gaula Ejército Antioquia (Medellín)	0	0	3	0	0	8	12	10	7	0	0	40
DIV-07, BR-4, Batallón de Infantería No. 42 Batalla de Bomboná	0	0	0	0	4		3	24	1	0	0	32
DIV-07, BR-4, BRIM - 24 BCG No. 4 Granaderos	0	0	4	3	3	7	3	5	1	0	0	26
DIV-07, BR-4, Batallón BAEV No. 8 MY: Mario Serpa Cuesto	0	0	10	0	0	0	4	6	5	0	0	25
DIV-07, BR-17, Batallón de Infantería No. 47 GR. Francisco de Paula Vélez	1	0	0	0	2	14	3	2	1	0	0	23
DIV-07, BR-11, Batallón de Infantería No. 31 Rifles - Aerotransportado	0	0	1	0	0	5	12	3	0	0	0	21
DIV-07, BR-11, Batallón BAEV No. 05 Juan José Reyes Patria	0	0	0	0	2	0	14	3	0	0	0	19
DIV-07, BR-17, Batallón de Infantería No. 46 Voltigeros	0	0	0	0	0	10	4	3	1	0	0	18
DIV-07, BR-4, Batallón de Infantería No. 11 Cacique Nutibara	0	0	0	0	1	5	4	4	3	0	0	17
DIV-07, BR-4, Gaula del Ejército Rural Oriente Antioqueño (Rionegro)	0	0	0	0	2	5	6	3	0	0	0	16

Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2015

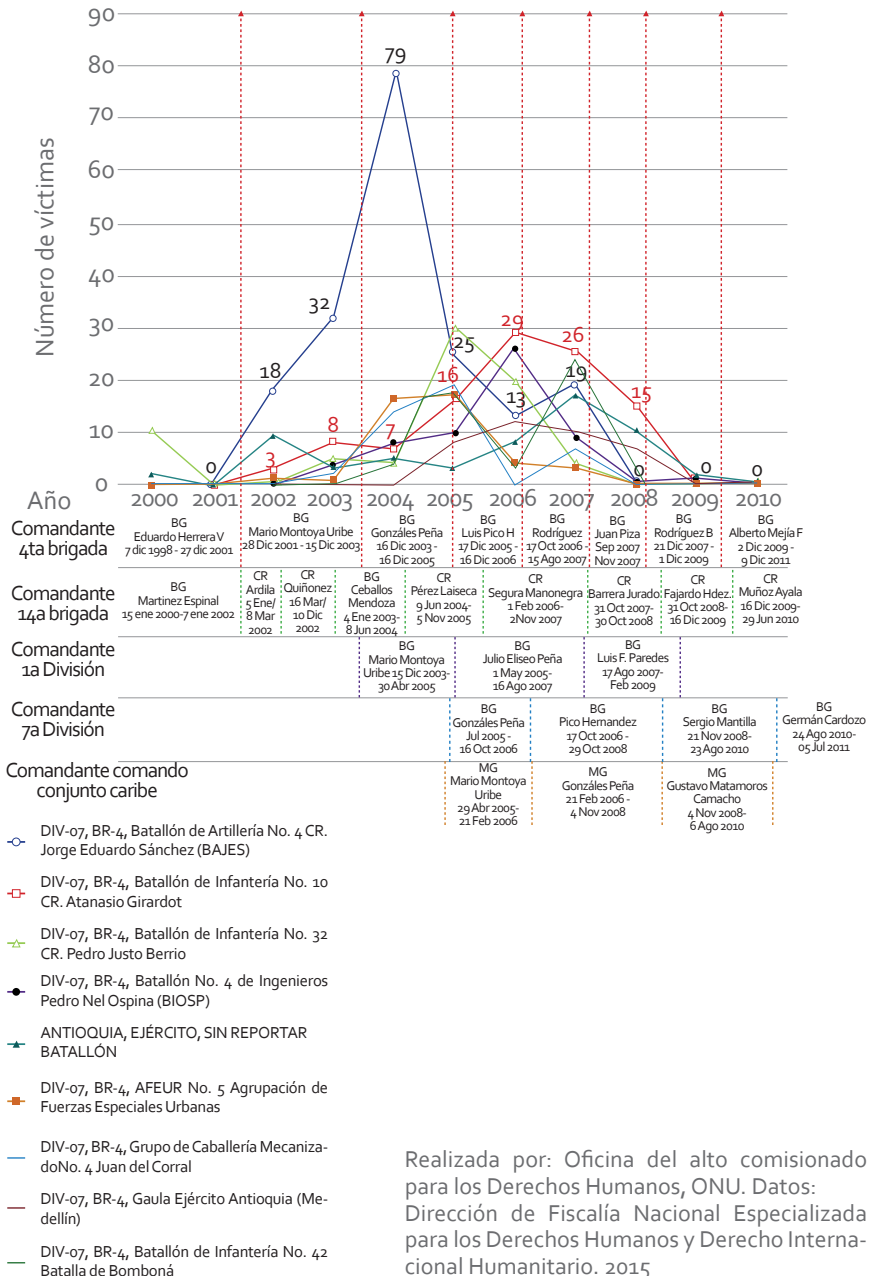
1. Cuarta Brigada - Séptima División

La Cuarta Brigada con puesto de mando en Medellín y con jurisdicción en gran parte de Antioquia, es la unidad operativa menor con el mayor número de ejecuciones extrajudiciales investigadas, 709 víctimas entre los años 2000 y 2010, involucran a más de 10 de sus unidades tácticas adscritas.

Como se muestra en la anterior tabla, el Batallón de Artillería N° 4 CR Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) con 186 víctimas, en su mayoría se presentaron en los años 2002 con 18 víctimas, 2003 con 32, 2004 con 79 y 2005 con 25 víctimas; el Batallón de Infantería N° 10 Cr. Atanasio Girardot (BIGIR) con 104 homicidios que se concentraron principalmente en el año 2005 con 16 víctimas, 2006 con 29, 2007 con 26 y 2008 con 15; el Batallón de Infantería N° 32 GR. Pedro Justo Berrio (BIPEB) está involucrado en 73 homicidios entre 2000 y 2007, punibles que se presentaron en su mayoría en el 2005 con 30 víctimas y el 2006 con 20; el Batallón de Ingenieros N°. 4 Pedro Nel Ospina (BIOSP), está siendo investigado por 61 homicidios, especialmente en el 2005 con 10, 2006 con 26 y 2007 con 9 víctimas; y la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No 5 (AFEUR), está involucrada en 42 homicidios que en su mayoría ocurrieron en el 2004 con 16 víctimas y 2005 con 17 víctimas.

A continuación y respondiendo a la necesidad de iniciar el análisis con la posible conexión entre los casos que conoce esta Dirección y aquellos que llevan las fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema, se presenta una gráfica que evidencia los picos temporales con la mayor concentración de víctimas, teniendo cuenta los comandantes de Brigada para la época de los hechos.

ANTIOQUIA: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH
División, Brigada, Batallón - Período 200-2010



La organización de esta información evidencia, entre otras cosas, que el BAJES está involucrado en hechos relacionados con 18 víctimas en el 2002 y 32 en el 2003, época en la que comandaba la Cuarta Brigada el Brigadier General (r) , Mario Montoya Uribe. Para los años 2005 y 2006, presuntos miembros del BAJES están involucrados con los homicidios de 79 y 25 personas respectivamente, tiempo en el cual el BG (r) Oscar González Peña fungía como comandante de la Cuarta Brigada.

A continuación se presenta la relación del número de investigaciones que se llevan por cada una de las Unidades Tácticas priorizadas y la etapa en la que se encuentra.

Tabla 5: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Antioquia

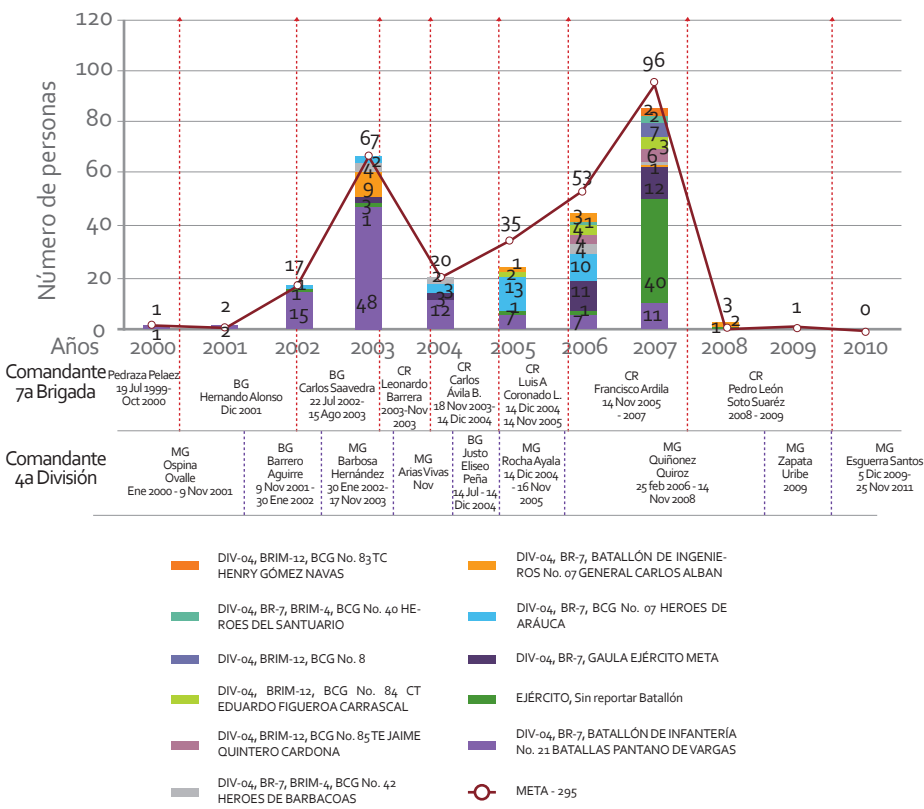
BATALLÓN	No. DE INVESTIGACIONES	ETAPAS
Batallón de Ingenieros N°. 4 Pedro Nel Ospina	41	INDAGACIÓN: 19 INSTRUCCIÓN: 17 SENTENCIA: 05
Batallón de Artillería N° 4 CR Jorge Eduardo Sánchez	76	INDAGACIÓN: 28 INSTRUCCIÓN:40 JUICIO: 03 SENTENCIA:05
Batallón de Infantería N° 10 Cr. Atanasio Girardot	56	INDAGACIÓN: 27 INSTRUCCIÓN: 24 JUICIO: 02 SENTENCIA: 02 EN ESPERA DE JPM: 01
La Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No 5 (AFEUR)	15	INDAGACIÓN: 06 INSTRUCCIÓN: 06 SENTENCIA: 03
Batallón de Infantería No. 32 Pedro Justo Berrío	35	INDAGACIÓN: 05 INSTRUCCIÓN: 26 JUICIO: 02 SENTENCIA: 02

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

2. Séptima Brigada – Cuarta División

Según el análisis cuantitativo, el segundo departamento con mayor número de víctimas después de Antioquia es el Meta, en el que hace presencia la Séptima Brigada de la Cuarta División. Por lo que según los datos que se reflejan en la siguiente gráfica se priorizó el Batallón de Infantería No. 21, Batalla del Pantano de Vargas.

META: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH
División, Brigada, Batallón - Período 2000 - 2010



Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2015

La Séptima Brigada está involucrada en 195 homicidios, a enero de 2015. Sólo una de las unidades tácticas que la conforman, el Batallón de Infantería No. 21, registra 102 víctimas, es decir el 52.30%, entre 2001 y 2007, en el que se presenta un pico importante en el 2003 con 48 muertos. Las restantes 93 víctimas se reparten entre nueve unidades tácticas: Gaula Meta con 29, Batallón contra Guerrilla No. 07 con 27, Batallón de Ingenieros 07 con 12 homicidios, Batallón de Infantería No. 19 General Joaquín Paris con 5 víctimas, Batallón de Infantería No. 29 con una. Y los pertenecientes a la Brigada Móvil IV – adscrita a la Séptima- el Batallón Contraguerrilla No. 42 con 11 víctimas, Batallón contra Guerrilla No. 40 con 6 y el Batallón de Contraguerrilla No. 41 con una.

Tabla 6. Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Meta

BATALLÓN	No. DE INVESTIGACIONES	ETAPAS
Batallón de Ingenieros N°. 4 Pedro Nel Ospina	45	INDAGACIÓN: 33 INSTRUCCIÓN: 11 SENTENCIA: 01

La mayoría de los casos de este batallón están relacionados con hechos de connivencia entre miembros del Ejército y paramilitares, los cuales partieron de compulsas de copias de versiones libres de postulados a Justicia y Paz del Bloque Centauros de las AUC; especialmente de lo relatado por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.

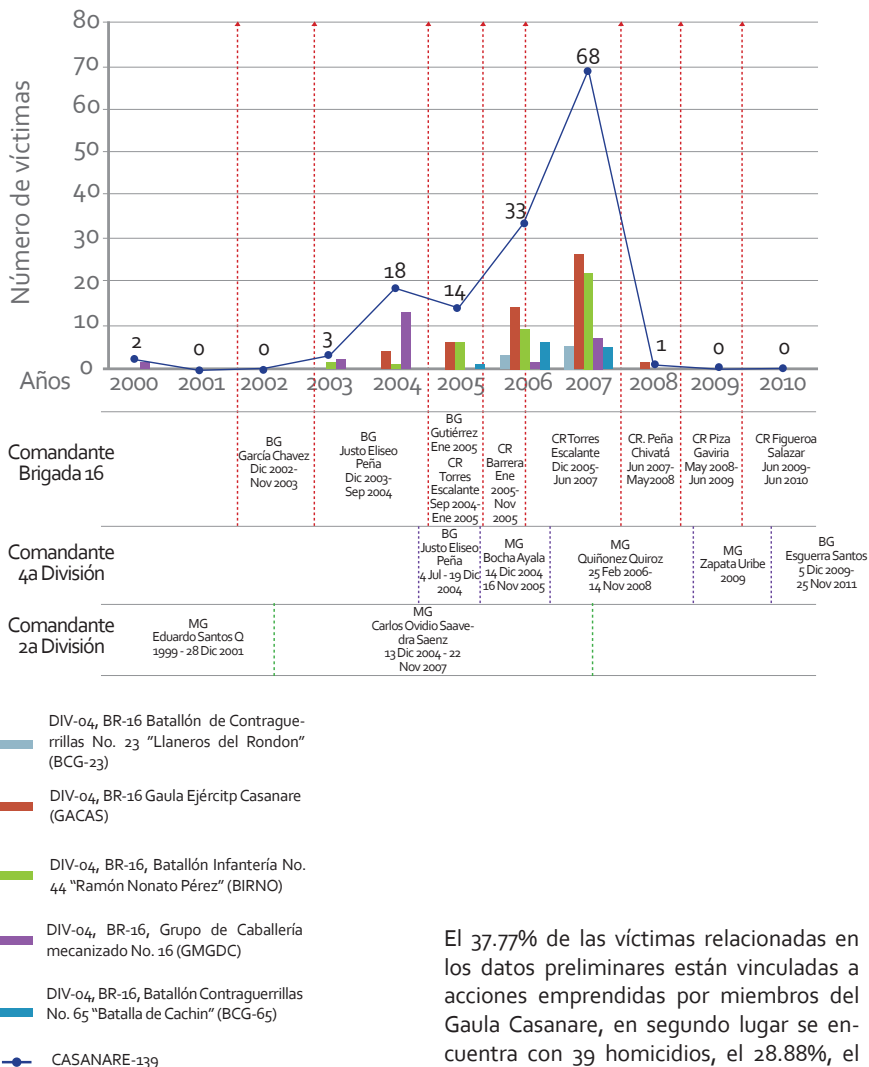
135 homicidios en Casanare entre 2003 y 2007, época en la cual la Décimo Sexta Brigada estuvo adscrita a la Cuarta División. De las 135 víctimas, el 72.59%, es decir 98, están vinculadas a hechos ocurridos entre 2006 y 2007, cuando el comandante era uno de los generales investigados por la Fiscalía Tercera Delgada ante la Corte.

3. Décima sexta Brigada – Cuarta División

Fue activada en 1992 para operar en 19 municipios de Casanare y dos de Boyacá (Labranzagrande y Pajarito). Desde su creación hasta abril de 2004 hizo parte de la Segunda División, en este año pasó a la Cuarta hasta noviembre de 2009, cuando fue transferida a la creada Octava División.

CASANARE: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH

División, Brigada, Batallón - Período 2000-2010



Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2015

El 37.77% de las víctimas relacionadas en los datos preliminares están vinculadas a acciones emprendidas por miembros del Gaula Casanare, en segundo lugar se encuentra con 39 homicidios, el 28.88%, el Batallón de Infantería No. 44, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 en tercer lugar con 24, 17.77%, en cuarto lugar el Batallón de Contraguerrilla No. 65 con 12 de los 135 homicidios y en quinto y sexto lugar con 81 homicidios los Batallones contra Guerrilla No. 23 y 29.

Tabla 7: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Casanare

BATALLÓN	No. DE INVESTIGACIONES	ETAPAS
Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez	35	INDAGACIÓN: 12 INSTRUCCIÓN: 23
Gaula Casanare	31	INDAGACIÓN: 11 INSTRUCCIÓN: 16 JUICIO: 01 SENTENCIA: 03

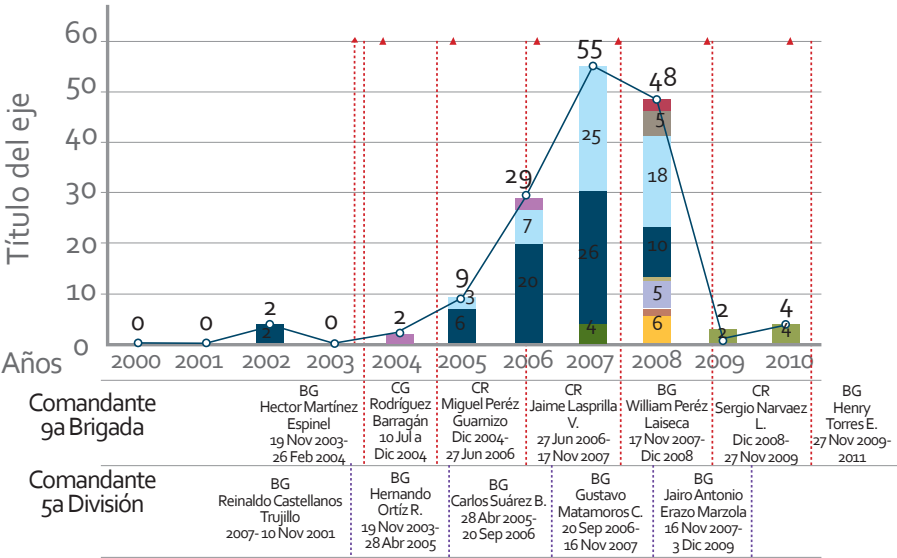
Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario

4. Novena Brigada – Quinta División

Esta unidad operativa, adscrita a la Quinta División, tiene su puesto de mando en Neiva y con jurisdicción en la mayor parte del Huila. Unidades militares de esta Brigada se encuentran investigadas por 133 homicidios entre 2000 y 2010. Cometidos presuntamente por miembros del Batallón de Infantería No 26, Cacique Pigoanza, 20 víctimas en 2006, 26 en 2007 y 10 en 2008. Por el Batallón Infantería No 27, se registraron víctimas en 2007 y 28 en 2008.

HUILA: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH

División, Brigada, Batallón- Período 2000 - 2010



- DIV-06, BR-12 Batallón de Infantería No. 36 Cazadores
- DIV-05, Br-9, Batallón de Artillería No.9 Tenerife
- DIV-05, DIV-05, BOG No. 28 Teniente Vladimir Vlaek Moure
- DIV-05, Br-9, CO-5. BOG No. 09 Los Panches
- DIV-05, Br-9, CO-5. BCG No.01 MUISCAS
- DIV-05, Br-9, Gaula Ejército Huila
- DIV-05, Br-1, Batallón de Infantería No.01 General Simón Bolívar
- DIV-05, Br-9, Batallón de Infantería No.27 Magdalena
- Ejército, Sin reportar batallón
- DIV-05, Br-9, Batallón de Infantería No.26 Cacique Pigoanza
- Huila = 151

Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2015

De estas Unidades Tácticas en el año 2015 se priorizaron los batallones antes mencionados cuyas investigaciones en su mayoría son llevadas por la sede de la Dirección en Neiva.

Tabla 8: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Huila

BATALLÓN	No. DE INVESTIGACIONES	ETAPAS
Batallón de Infantería No 26 Cacique Pigoanza	44	INDAGACIÓN/PREVIA: 28 INSTRUCCIÓN: 16
Batallón Infantería No 27 Magdalena	31	INDAGACIÓN/PREVIA: 24 INSTRUCCIÓN: 06 JUICIO: 01

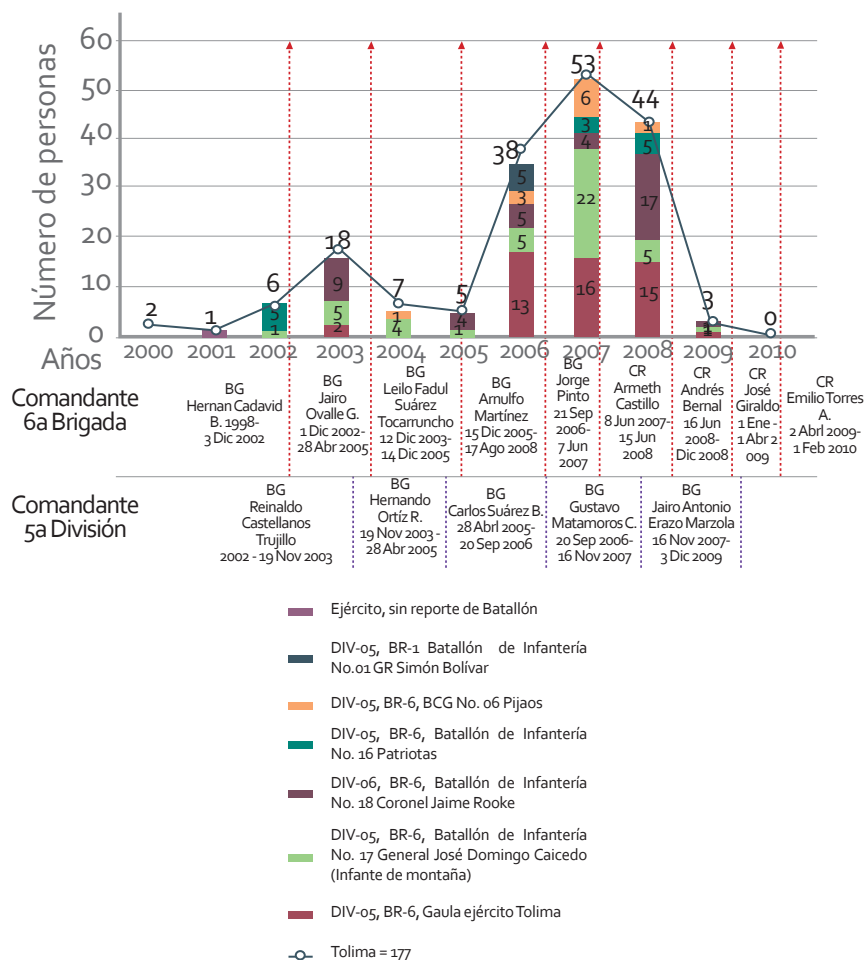
Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

5. Sexta Brigada- Quinta División

La Quinta División, relacionada en el ítem anterior con la Brigada Novena, también está comprometida con hechos en Tolima con las unidades tácticas de la Sexta Brigada. Fueron identificadas 177 víctimas, el 28% están relacionadas con acciones de miembros del Gaula; 44 víctimas, el 24%, se encuentra el Batallón de Infantería No. 17 y en tercer lugar el Batallón de Infantería No. 18, con 40 víctimas.

TOLIMA: Homicidio cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH

División. Brigadas, Batallón - Período 2000 - 2010



Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2015

A partir de lo identificado, se estableció la necesidad de priorizar y diseñar estrategias relevantes para el avance de las investigaciones, porque como se observan en la tabla 9, la mayoría de procesos se encuentra en indagación o previa.

Tabla 9: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Tolima

BATALLÓN	No. DE INVESTIGACIONES	ETAPAS
Batallon De Infantería No. 17 General José Domingo Caicedo	35	INDAGACIÓN/ PREVIA: 25 INSTRUCCIÓN: 08 JUICIO: 02
Batallón de Infantería No. 18 Coronel Jaime Rook	18	INDAGACIÓN/ PREVIA: 12 INSTRUCCIÓN: 05 SENTENCIA: 01
Gaula Tolima	27	INDAGACIÓN: 22 INSTRUCCIÓN: 03 SENTENCIA: 02

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

6. Décimo Segunda Brigada – Sexta División

Caquetá es uno de los departamentos que reporta muchas ejecuciones extrajudiciales. Para enero de 2015, hay 186 víctimas, la mayoría en acciones de la Décimo Segunda Brigada en Florencia y perteneciente a la Sexta División.

Las unidades con mayor número de víctimas son el Batallón de Infantería No. 34 con 63 y el Batallón de Infantería No. 35 Cazadores con 30. La mayor parte de los casos son investigados en Neiva y se encuentran en indagación o previa.

Tabla 10: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Huila

BATALLÓN	No. DE INVESTIGACIONES	ETAPAS
Batallón de Infantería No. 34 Juanambú	37	INDAGACIÓN/ PREVIA: 23 INSTRUCCIÓN: 13 JUICIO: 01
Batallón de Infantería No. 35 Cazadores	6 (posible sub-registro)	INSTRUCCIÓN: 01 INDAGACIÓN: 05

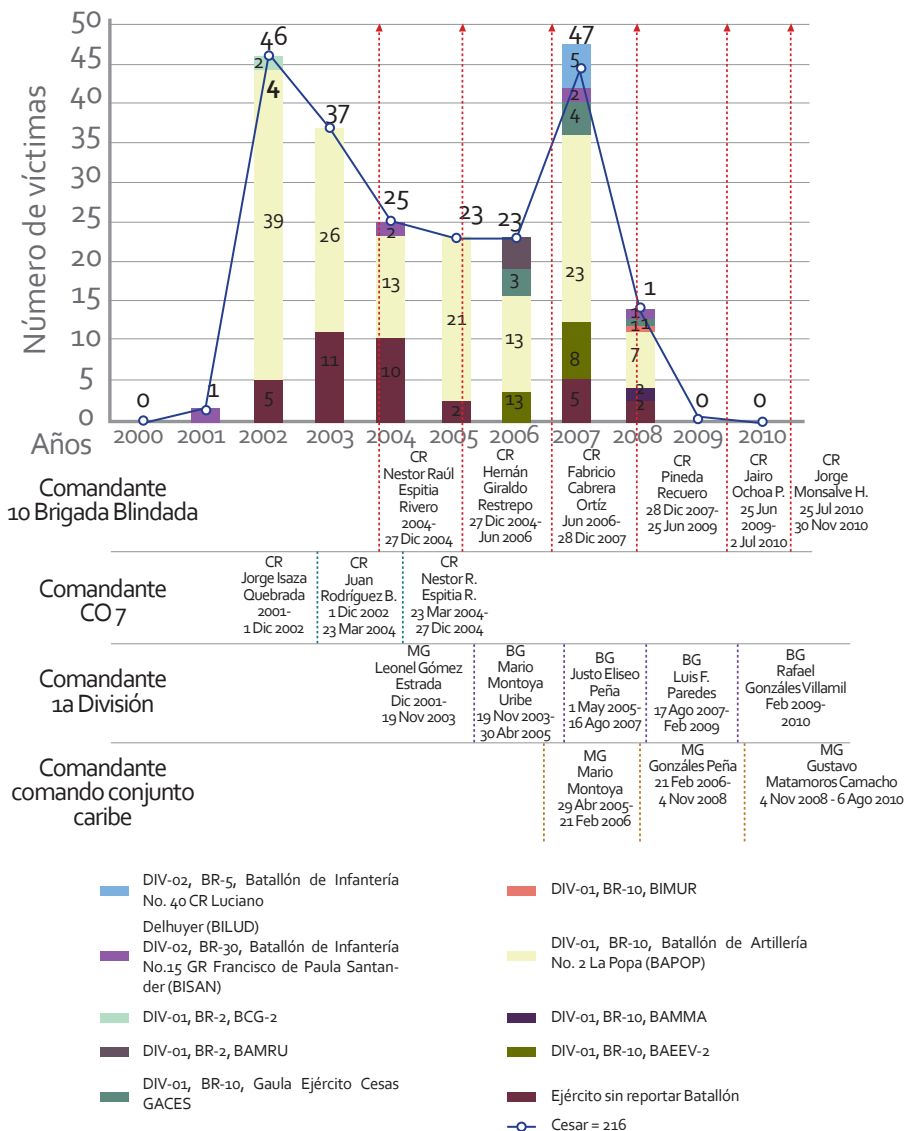
Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

7. Décima Brigada Blindada - Primera División

Esta unidad fue creada y adscrita en marzo de 2005 a la Primera División, activada en La Guajira y Cesar. Tiene uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Sólo en Cesar, con datos a enero de 2015, se relacionan 164 homicidios presuntamente perpetrados por miembros de la Décima Brigada.

CESAR: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH

División. Brigadas, Batallón - Período 2000 - 2010



Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2015

De estos 164, el 86.5 % son víctimas de hechos en los que se vinculan miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, entre 2002 y 2008; reportando un pico importante entre 2002 y 2003 con 39 y 26 homicidios. En segundo lugar con 11 víctimas, es decir el 6.7%, se encuentra el Batallón Energético y Vial No. 2, en tercer lugar el Gaula Cesar con 8 víctimas.

En La Guajira, se investigan 119 homicidios en los que se involucran ocho unidades de la Décima Brigada, entre 2000 y 2007. Se presenta un pico entre 2006 y 2007 con 66 y 37

víctimas. El Grupo Caballería Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón registra 67 muertos, 56.3%. El Gaula Guajira tiene 22, 18.48%. En lista con menos del 10% de homicidios se encuentran el BICAR con 11 víctimas, BASAP con 6, El Gaula Cesar con 5, el Grupo de Caballería Blindado Mediano con 4, el BAMMA y el Batallón de Artillería No. 2 con dos cada uno.

También hay un gran número de investigaciones contra miembros de la Quinta y la Segunda Brigada, la primera de conocimiento en Bucaramanga y segunda en Barranquilla.

Tabla 11: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Cesar -Guajira

BATALLÓN	No. DE INVESTIGACIONES	ETAPAS
Batallón de Artillería No. 2 La popa	76	INDAGACIÓN: 29 INSTRUCCIÓN: 42 JUICIO: 02 SENTENCIA: 03
Batallón Especial Energético y Vial No.2 José María Cancino	9	INDAGACIÓN: 03 INSTRUCCIÓN: 05 JUICIO: 01

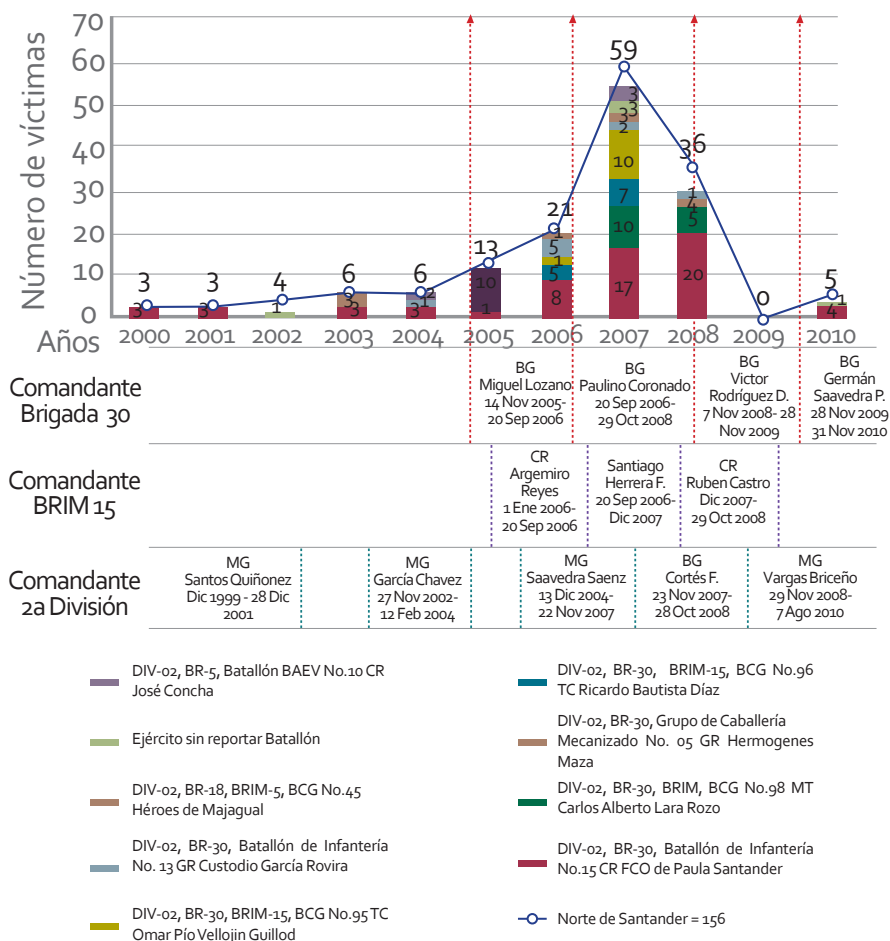
Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

El Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 2, está comprometido en 11 homicidios entre 2006 y 2007.

8. Trigésima Brigada y Brigada Móvil 15 – Segunda División

La Trigésima Brigada en Norte de Santander, tiene miembros investigados por 94 homicidios entre 2000 y 2008. De estas 94 víctimas, 62 involucran a integrantes del Batallón de Infantería No. 15, principal en los años 2007 (17 víctimas) y 2008 (20 víctimas).

NORTE DE SANTANDER: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH División. Brigadas, Batallón - Período 2000 - 2010



Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2015

La Brigada Móvil 15, adscrita a la Segunda División y compuesta por cuatro batallones de contraguerrillas y dos compañías especiales, con jurisdicción en Norte de Santander, reportó la muerte de más de

40 personas como resultados operacionales, en estos momentos están siendo investigados como posibles homicidios.

Estado actual de las investigaciones

Tabla 12: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Cesar -Guajira

BATALLÓN	No. DE INVESTIGACIONES	ETAPAS
Batallon de Infantería No. 15 General Francisco De Paula Santander	14	INDAGACIÓN: 10 JUICIO: 04
Brigada Móvil No. 15	47	INDAGACIÓN: 05 INSTRUCCIÓN: 38 JUICIO: 03 SENTENCIA: 01

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Sobre la responsabilidad de comandantes, la Fiscalía ha avanzado en algunos casos. Para citar sólo dos. En octubre de 2015, la Fiscalía General de la Nación, a través de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, llamó a interrogatorio a cinco generales del Ejército, cuatro de ellos en retiro, por su posible vinculación a casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles realizadas entre 2006 y 2008. Lo que la prensa ha catalogado como “falsos positivos”. Es decir, la muerte de civiles inocentes a quienes después hacían pasar por integrantes de las FARC muertos en combate.

Los oficiales citados a interrogatorio: general Leonardo Gómez Vergara, excomandante de la Tercera Brigada del Ejército; Jairo Antonio Herazo Marzola, excomandante de la Octava Brigada; Hernando Pérez Molina y Justo Eliseo Peña, excomandantes de la Tercera División y Emiro José Barrios, comandante del Batallón Contraguerrilla número ocho.

Otros generales han sido mencionados en investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos y los procesos

los adelantan fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

1. Mg. Henry William Torres Escalante

- Grado actual: Mayor General, comandante del Comando Conjunto del Sur Occidente No. 2, con jurisdicción en Cauca, Valle y Nariño.
- Grado al momento de los hechos: Coronel.
- Cargo al momento de los hechos: Comandante Brigada XVI – Yopal (10/12/05 a 11/07/2007).
- Escuchado: en diligencia de versión libre los días 29 y 30 de julio y 3 de septiembre de 2015.

Contra el General Torres Escalante se siguen siete investigaciones, sin embargo, dentro del proceso de priorización se decidió el impulso de dos casos, bajo teorías jurídicas diferentes, así:

Hechos

Se adelanta la investigación por una compulsa de copias de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

El 2 de mayo de 2007 en la vereda El Paraíso, Aguazul, en Casanare, el señor Alcides Castillo Fonseca fue muerto por integrantes del Grupo Especial Delta 6, orgánico de la Brigada XVI. Por estos hechos, el comandante del grupo especial, teniente Marco Fabián García Céspedes, en ampliación de indagatoria para sentencia anticipada, aseguró que el hoy mayor general, Henry William Torres Escalante, en su condición de Comandante de la Brigada, tenía conocimiento de este y otros casos, y que se trataban realmente de ejecuciones extrajudiciales, señalando además que los grupos Delta, que se encontraban a órdenes directas del Comandante de la Brigada XVI, realizaban estas acciones.

Teoría del caso

El general Henry William Torres Escalante, es presunto responsable del homicidio en persona protegida de Alcides Castillo Fonseca por omisión, en razón a que aumentó la situación de riesgo para el bien jurídico protegido, al solicitar bajas en combate privilegiándolas sobre otros resultados operacionales; omitió realizar los controles respectivos y no adoptó las medidas necesarias para evitar que los grupos especiales a su cargo ejecutaran estos homicidios; recibió múltiples alertas por parte de familiares de las víctimas, organismos estatales, organismos no estatales de defensa y promoción de derechos humanos, relacionadas con la muerte de civiles que eran presentados como guerrilleros caídos en combate, durante el período de su comandancia y antes de la ejecución de este homicidio. El general tenía el deber jurídico de impedir este resultado, y en su con-

dición de Comandante de las unidades que realizaban las ejecuciones extrajudiciales, podía tomar medidas para evitarlo.

Hipótesis investigativa

En la versión rendida por el General Torres Escalante, éste afirmó que ejerció un adecuado control de sus tropas y que las irregularidades que se presentaron obedecen a la acción delictiva de algunos integrantes de la brigada. Sin embargo, con base en el abundante material probatorio recaudado en la investigación se cuenta con bases fundadas para afirmar que el General Torres Escalante ejercía presión sobre los comandantes de batallones para que presentaran bajas en combate y que los muertos podían ser de cualquier tipo – en combate o fuera de el, combatientes o civiles –, lo que importaba era la cantidad y la frecuencia. El General Torres Escalante conocía que no todas las muertes en combate que le eran reportadas habían ocurrido en circunstancias legales y a pesar de eso estableció un sistema de incentivos positivos a las unidades que aumentaban los resultados (felicitaciones) y negativos a aquellas que no lo hicieran (escarnio, impone sanciones).

Adicionalmente, se ha podido establecer que el General Torres Escalante recibió múltiples alertas por parte de familiares de las víctimas, organismos estatales, organismos no estatales de defensa y promoción de derechos humanos, relacionadas con muertes de civiles que eran presentados como guerrilleros muertos en combate, durante el período de su comandancia y antes de la ejecución de este homicidio, alertas que no fueron atendidas y sobre la que no se ejerció ningún tipo de control.

Caso No.02 por acción

Hechos

Mediante resolución de fecha 17/06/2015, el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar de oficio al Mayor General Henry William Torres Escalante, por el homicidio de Daniel Torres Arciniegas y su hijo menor Roque Julio Torres Torres, quienes fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate por integrantes del grupo especial Delta 6 orgánico de la Brigada XVI.

Teoría del caso

El Mayor General Henry William Torres Escalante, es responsable como coautor del homicidio en persona protegida de Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres Torres, al haber acordado con otras personas entre ellos el teniente coronel Fabián Sarmiento Valbuena; el teniente coronel Espitia; el teniente Marco Fabián García Céspedes, comandante Grupo Especial Delta 6, el cabo Idelfonso Chavarro, todos ellos integrantes de la Brigada XVI y el desmovilizado Bernabe Castro, alias “Pastrana”, darles muerte y presentarlos como bajas legítimas en combate.

Al General Torres Escalante le correspondió realizar aportes esenciales sin los cuales no se hubiera podido realizar el crimen. Convalidó información de inteligencia falsa, para dar vía libre a la operación y apariencia de legalidad; dio vía libre al pago de una información de inteligencia innecesaria, dio la orden para que el mayor Buitrago firmara la orden de operación, ordenó que Delta 6 fuera encargada de desarrollar la operación y ordenó que esa unidad realizara la operación por fuera de la jurisdicción que le correspondía al batallón, además dispuso los medios motorizados para

el desplazamiento de la tropa; ordenó que luego de la muerte, transportaran por helicóptero los cuerpos a la brigada para que fuera allí donde se hiciera la inspección técnica a los cadáveres; ordenó que el soldado Luis Fernando Socha, que hace parte de otro grupo Delta, participara como guía de la operación. Soldado este que días antes participó en la supuesta desmovilización de Bernabe. El general además trató de desviar las investigaciones.

Hipótesis investigativa

En la versión rendida por el general Torres Escalante, éste afirmó que la muerte de Daniel Torres Arciniegas y su hijo menor Roque Julio Torres Torres es responsabilidad exclusiva del el Teniente Marco Fabián García Céspedes, comandante Grupo Especial Delta 6. No obstante, con base en el material probatorio y en la prueba trasladada, se ha podido establecer numerosas inconsistencias en la operación, irregularidades que debieron ser advertidas por el general Torres Escalante. El oficial admitió en su interrogatorio que dio algunas ordenes que permitieron llevar a cabo la operación que tuvo como resultado la muerte de los dos ciudadanos. Adicionalmente, se cuenta con abundante documentación que muestra la participación del general Torres Escalante en la planeación, ejecución y seguimiento de la operación en la que murieron las víctimas en ámbitos de su exclusiva competencia.

3. Gr (r) Mario Montoya Uribe

- Grado actual: General retirado.
- Grado al momento hechos: General.
- Cargo al momento hechos: Comandante del Ejército (22 de febrero de 2006 - 4 de noviembre de 2008).

- Escuchado en diligencia de interrogatorio los días 10 y 11 de agosto de 2015.

Hechos

Los hechos que dan origen a la investigación corresponden, entre otros, a las muertes de Fair Leonardo Porras, Daniel Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, durante operaciones militares desarrolladas entre enero y agosto de 2008 en Ocaña y Abrego, Norte de Santander, y Cimitarra, Santander.

Según información de prensa, el coronel en retiro Santiago Herrera, quien se desempeñó como comandante de la Brigada Móvil No. 15 y posteriormente como ayudante del Comandante del Ejército, acusó al general (r) Mario Montoya Uribe, de medir a las unidades militares bajo su mando por resultados entendidos estos como muertes producidas en combate.

Teoría del caso

El general (r) Montoya, en su calidad de comandante del Ejército, es responsable de homicidios cometidos por integrantes de las siete divisiones del Ejército durante su periodo de comandancia, al haber desarrollado una política de presión por resultados, clasificación de las unidades militares por la cantidad de muertes en combate que reportaran, beneficios profesionales para los comandantes de las unidades que se destacaran por la cantidad de bajas en combate y sanciones, reprimendas o escarnio a quienes no estuvieran a la altura de sus expectativas operacionales. Este factor de riesgo para la población civil se vio acompañado de un ejercicio del mando en el que los controles a las irregularidades fueron laxos, no se atendieron las denuncias de instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y de víctimas que alertaron de la dimensión del fenómeno.

Hipótesis investigativa

El general Montoya manifestó en la diligencia de interrogatorio que durante su comandancia se preocupó de manera extraordinaria por el respeto a los derechos humanos. Señaló además que como comandante del Ejército no tenía la posibilidad de ejercer control sobre las tropas y que la responsabilidad por las operaciones que se desarrollaban recaía en los comandantes de División, Brigada y Batallón.

No obstante, por el material recaudado en la investigación se ha podido establecer que el general Montoya tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando a través de las quejas, denuncias y alertas que se venían instaurando por familiares de las víctimas, organismos estatales y no gubernamentales de defensa y promoción de derechos humanos.

En su condición de comandante del Ejército, el general Montoya, era garante de la vida e integridad física de los integrantes de la población civil que puso en peligro con su política de presión por resultados y tenía el deber jurídico de impedir que esta tuviera como resultado la muerte de civiles que no estuvieran participando directamente en el conflicto armado, y estaba en capacidad de evitar los resultados, lo cual puede inferirse a partir del número de muertes cuestionadas durante el periodo de su comandancia y posterior a ella.

Otros casos en los que están vinculados integrantes de la FF.AA

Casos atribuibles a miembros de la Fuerza Pública relacionados con el conflicto armado. De acuerdo con la depuración de datos de los sistemas de información y de la base de datos de la Dirección Nacional de Derechos Humanos sobre homicidios atribuibles a agentes estatales:

- La Fiscalía General de la Nación tiene relacionados 3.552 expediente activos, con 5.241 víctimas.

- Existen 6.911 casos inactivos con 5.138 víctimas en los que se encuentra vinculado por lo menos un integrante de la Fuerza Pública.

- Integrantes de Fuerza Pública investigados por delitos relacionados con el conflicto. Hay 12.981 investigados en procesos activos y 11.610 han sido investigados en casos inactivos.

- De todos estos delitos, 36% corresponde a homicidios y desaparición forzada, 8% a violencia sexual, 5%, a concierto para delinquir y 2% a tortura.

- Ha sido posible identificar aquellos homicidios atribuibles a miembros de la Fuerza Pública que pueden clasificarse como falsos positivos.

- De un total de 2.653 expedientes por homicidios investigados, 2.208 corresponden a presuntos falsos positivos, donde hay 3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas.

- Sentencias por falsos positivos: 357 relacionadas con desapariciones y/o homicidios cometidos por agentes estatales. 292 sentencias corresponden a 270 procesos adelantados por homicidios presentados como bajas por Fuerza Pública. En 256 procesos fue posible por lo menos una condena, incluyen 429 víctimas. De las víctimas, 20 son mujeres y 379 hombres; la mayoría está entre los 18 y 30 años y se identificaron 26 NN. Once personas con discapacidad, ocho indígenas, cuatro adultos mayores, un desplazado y nueve sindicalistas.

- La revisión y clasificación de las 357 sentencias permitió identificar 695 personas procesadas y 610 condenadas por falsos positivos. En su mayoría ocurrieron en el departamento de Antioquia, 101 procesos, y en Norte de Santander 27. Corresponden mayoritariamente a hechos sucedidos entre 2004 y 2007, siendo el 2007 el de mayor número de hechos.

- El promedio de personas condenadas por proceso es de 2.5. En su mayoría, 279, eran miembros de la Séptima División, 168 de la IV Brigada y 44 del Batallón de Artillería No. 4, todos en Antioquia.

- De los militares condenados, un poco más del 60% ostentaba el rango de soldado o cabo. El 40% restante incluye sargentos, subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, siete tenientes coroneles y cuatro coroneles.

- Caracterización del fenómeno de falsos positivos en la verdad judicial. Las sentencias leídas y sistematizadas incluyen 215 procesos con víctimas civiles, ejecutadas por miembros de la fuerza pública que planearon la conducta con el objetivo premeditado de presentarlas como bajas legítimas en combate. Adicionalmente, en 86 procesos las víctimas fueron engañadas para ser trasladadas al sitio donde fueron ejecutadas y en 90 procesos fueron trasladadas contra su voluntad.

- Además de describir *modus operandi* similares en los hechos judicializados, los jueces han destacado la existencia de un plan criminal en 130 sentencias, la distribución de responsabilidades en desarrollo del mismo en 106 sentencias y la existencia de una orden clara para cometer las con-

ductas o de una conducta instigadora en 107 sentencias.

- En 168 (65%) de los 256 procesos condenatorios, el juez reconoció un móvil que incluye aumentar la efectividad de la unidad militar a partir de resultados operacionales, obtener vacaciones, permisos y otros beneficios y obedecer una orden.

- Estos datos demuestran que la misma judicatura, gracias al trabajo investigativo de la Fiscalía General de Nación, ha reconocido la existencia de un fenómeno criminal de falsos positivos que no puede ser analizado de manera aislada sino en contexto.

Muerte del grafitero

El Fiscal General también exigió una supervisión especial sobre procesos en los que fueron señalados integrantes de la Policía. Entre ellos, el expediente por la muerte en Bogotá, a manos de agentes de la institución, del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo.

El 19 de agosto de 2011, luego de una persecución por parte de una patrulla de la Policía, fue atacado a bala por la espalda el estudiante. Le disparó, con arma de dotación, el uniformado Wilmer Antonio Alarcón Vargas.

De este hecho de homicidio agravado se desprendieron otras investigaciones contra integrantes de esa institución.

Varios de los uniformados están procesados por el ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. Los policías trataron de desviar la investigación por la muerte del estudiante, argumentando que la víctima hacía parte de una banda de asaltantes, versión to-

talmente desvirtuada en el expediente. Diego Felipe Becerra estaba con tres jóvenes más pintando grafitis en el norte de Bogotá cuando comenzó el operativo de la Policía.

La porrista de Millonarios

El caso del asesinato de la porrista de millonarios, Luisa Fernanda Ovalle, tiene un monitoreo permanente por parte del despacho del Fiscal General de la Nación. La joven de 18 años fue asesinada el 30 de noviembre de 2013 cuando se aproximaba a su casa en el occidente de Bogotá.

Caso Jineth Bedoya

Directamente el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenó no archivar el proceso contra el paramilitar Alejandro Cárdenas, alias JJ, vinculado al secuestro, tortura y violación de la periodista de El Tiempo, Jineth Bedoya.

El jefe del organismo de investigación decidió relevar a la Fiscal 49 de la Unidad de Derechos Humanos por posibles fallas en su decisión de desvincular del caso a Alejandro Cárdenas y otorgarle la libertad.

Tras la nueva orden de captura alias JJ regresó a prisión y el Fiscal ordenó impulsar ese proceso, que está en investigación desde mayo del año 2000.

Goldex

Un proceso más sobre la lupa de la Fiscalía General fue la exportadora de oro, Goldex. Tras varios años de indagaciones y rastreo de pistas, la actual administración logró consolidar un caso que es ejemplo a nivel mundial de investigación de cuentas y cruce de información contable para desvertebrar una presunta organización criminal a gran escala en lavado de activos.

La Fiscalía logró presentar ante un juez a Jhon Uber Hernández Santa, a su esposa y a otras 17 personas más dentro de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

Para la Fiscalía, se trata del caso de lavado de activos más grande de los últimos años y la defraudación al Estado en por lo menos 2,3 billones de pesos en exportaciones ficticias de oro, producto, en principio, de minería ilegal, pero los investigadores y agencias internacionales no descartan otros nexos.

El proceso comenzó en la Fiscalía General de la Nación el 2 de agosto de 2011 contra una presunta organización delictiva que, al parecer, realizaba movimientos financieros irregulares a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas regiones del país, para comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades a través de Goldex.

Del análisis de los elementos probatorios, evidencia físicas, elaboración de profundos estudios técnicos y estadísticos a lo largo de tres años de minuciosa investigación, apoyada por organismos nacionales e internacionales, a finales de 2014, la Fiscalía llegó a la conclusión que existía una infraestructura financiera y económica de enormes proporciones montada, entre otros, por Jhon Uber Hernández Santa para lavar activos a gran escala.

Alrededor de la Comercializadora Internacional Goldex existió un muy sospechoso carrusel de personas jurídicas —más de 20 registradas en diferentes cámaras de comercio, con las siguientes características: recién formadas, mismos socios, bajo capital para desarrollar su trabajo porque dependían de anticipos y avances que le suministraba la Comercializadora, volumen de operaciones por miles de millones

de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo, ingresos con bajo margen de utilidad, sin que exista ánimo de lucro, sino la necesidad de justificar costos a Goldex.

Las irregularidades encontradas y analizadas en conjunto por la Fiscalía, permiten sostener que el oro y todos esos recursos que se pretendieron justificar, son de origen ilícito —enriquecimiento ilícito de particulares—, provenientes de organizaciones al margen de la ley que requerían la conformación de una estructura para blanquear millones y millones de activos.

Entre las irregularidades detectadas por los investigadores figuran las siguientes como las más graves:

1. Realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría.
2. Realización de operaciones comerciales de manera directa con personas cuya cédula de ciudadanía no se encuentra vigente o ha sido cancelada tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría.
3. Realización de operaciones comerciales de manera directa con personas que manifestaron no haber realizado transacciones de metales preciosos. El 90% de las personas mencionadas en esos listados no tenía relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro o chatarra, incluso muchos de ellos eran habitantes de la calle y una buena cantidad de esas personas, para la fecha de la supuesta comercialización, ya habían muerto.

4. Creación de empresas de fachada.

5. Representantes legales de las empresas fachada, cuyo perfil no se ajusta a la actividad que realizaban.

6. Utilización del mecanismo de operaciones ficticias, inexistentes o simuladas, no solo directamente por Goldex, sino luego por las empresas creadas como fachada para justificar la adquisición del oro que después le vendían a CI GOLDEX S.A.

7. Existe un extenso listado de personas naturales a quienes hacen aparecer como pequeños comerciantes de oro, o barequeros de algunas zonas, y a pesar de la distancia que pudiera haber entre una empresa y otra, compartieron entre ellas ese mismo listado, el cual fue obtenido de alguna base de datos.

8. Capitalizaciones simuladas para incrementar el patrimonio de CI GOLDEX que se hicieron de manera aparente, a través de operaciones comerciales.

9. Márgenes de utilidad operacional bajo tanto en la comercializadora GOLDEX como en los proveedores que indican que trabajaban a pérdida, sin interés de lucro (seguramente para justificar costos). Esto es absurdo frente a los inmensos volúmenes de ingresos que circulaban.

10. Incremento de los ingresos operacionales de manera exagerada por encima de su capacidad económica, financiera y patrimonial, sin contar con la liquidez suficiente para ello y sin apalancamiento del sistema financiero.

11. Inconsistencia entre lo informado como trasladado por las transportado-

ras de valores que trabajaron con GOLDEX y las cifras suministradas a la UIAF.

12. Inconsistencia entre lo pagado por regalías a la Agencia Nacional Minera por GOLDEX por compra de oro y lo reportado a la Unidad de Información y Análisis Financiero.

13. Inconsistencia entre lo exportado por GOLDEX y la información reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero.

14. Sanciones por parte de la DIAN a GOLDEX por 124.084.221.000 y 119.520.268.000 de pesos, en consideración a que, al verificar la información de la vigencia del año 2010, no se pudo hallar porque ni los proveedores, ni sus soportes contables aparecieron.

Todas estas circunstancias son hechos objetivos claramente probados en el curso de la indagación, a partir de los cuales resulta fácil concluir que existieron operaciones simuladas o ficticias. Además acudieron a personas naturales y jurídicas para fingir operaciones comerciales lícitas, inyectaron capitales sin capacidad económica y desarrollaron operaciones económicas bajo este mismo fundamento. Y como si fuera poco, se suministraron cifras distintas a una y otra entidad oficial.

De lo que se trataba era de dar apariencia de legalidad, ocultar y encubrir oro de origen ilícito, junto con millonarias sumas injustificadas, al parecer producto de actividades desarrolladas por organizaciones al margen de la ley.

Conclusiones finales de la materialidad del delito de lavado de activos hecho por GOLDEX.

Recursos irregulares descubiertos en la pericia contable:

1. Total recursos de origen desconocido obtenidos de la información suministrada por la Registraduría de cédulas canceladas por muerte, no expedidas o con inconsistencias que emitió CI GOLDEX S.A. como sus proveedores por valor de 2.518.659.470 de pesos.

2. Total recursos de origen desconocido obtenidos de las entrevistas por operaciones inexistentes a los proveedores directos de GOLDEX, por valor de 23.589.046.727 de pesos.

3. Total recursos desconocidos obtenidos de las entrevistas por operaciones inexistentes, a los proveedores indirectos de GOLDEX por valor de 11.349.371.622 de pesos.

4. Total recursos con personas certificadas por la Registraduría como inexistentes presentadas en información por los proveedores de CI GOLDEX por valor de \$265.162.934.950.

5. Total recursos de origen desconocido por capitalización de la sociedad \$7.500.000.000.

6. Transferencias al exterior por operaciones simuladas a STONE TRADERS de Panamá por valor de \$15.205.418.304.

7. De los pasivos con proveedores de empresas que sirvieron como fachada a GOLDEX en el año 2009 suman \$22.858.296.130.

8. De los pasivos con proveedores de empresas que sirvieron como fachada a GOLDEX en la vigencia 2009, suman \$26.843.570.222.

Ahora bien, si el volumen de los recursos fueron circulados a través de proveedores,

con empresas fachada que fueron constituidas y cerradas en corto tiempo, y que se evidenció que trabajaron a pérdida por su bajo margen de utilidad, que, además, existen operaciones ficticias, inexistentes o simuladas para justificar los costos de ventas, los \$2.386.558.336.000 (\$2.3 billones de pesos) que se obtuvieron se consideran ilícitos porque existen operaciones mezcladas, reales y ficticias.

Por estos hechos, el 14 de enero de 2015, la Fiscalía General de la Nación solicitó 26 capturas ante el Juzgado 10 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, entre los que se encontraban el representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de GOLDEX, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que presuntamente prestaron su nombre para aparecer como proveedores.

El 16 de enero se hicieron efectivas 22 capturas y se les imputó cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, y concierto para delinquir ante el Juzgado 28 Penal Municipal con función de control de garantías.

A esas personas el 21 de enero se les impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Respecto de dos representantes legales de empresas proveedoras, la Juez dispuso su libertad. La Fiscalía apeló. El 18 de marzo fue resuelta la apelación y el Juzgado 11 Penal del Circuito revocó la decisión y libró ordenes de captura.

En ese lapso se hizo efectiva la captura del señor JHON UBER HERNÁNDEZ SANTA, quien intentó escapar, y su esposa GLORIA PATRICIA ALVAREZ MEJÍA, a quienes se efectuó imputación, al primero de los mencionados por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de par-

ticulares y se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión. A la mujer le dieron detención domiciliaria y afronta cargos por enriquecimiento ilícito de particulares.

El 19 de marzo de 2015 se confirmó la medida de aseguramiento impuesta contra el señor JHON UBER HERNÁNDEZ SANTA.

El 27 de mayo fue programada la audiencia de formulación de acusación.

PetroTiger

Los escándalos de corrupción también tocaron a la estatal petrolera, Ecopetrol, donde la multinacional PetroTiger estaba realizando pagos ilegales, por más de dos mil millones de pesos, por contratos y favorecimiento en el seguimiento de los mismos, por parte de funcionarios públicos.

Desde el comienzo, la Fiscalía investigó a los procesados por los delitos de cohecho propio, prevaricato, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La Dirección Nacional de la Fiscalía contra la Corrupción imputó cargos a mediados de 2015 contra el funcionario de Ecopetrol, Luis Édison Pachón Agudelo, por su presunta participación en el escándalo de PetroTiger. La multinacional habría salido beneficiada con adjudicación de contratos. Los cargos fueron por los punibles de enriquecimiento ilícito a favor de particulares, prevaricato por omisión y falsedad en documento público.

Estos delitos los habría cometido el procesado porque presuntamente recibió 80 millones de pesos a cambio de adelantar gestiones, desde su cargo en Ecopetrol, para evitar que caducara un contrato que tenía con la estatal petrolera la compañía

PetroTiger, y en el cual el contratista estaba incumpliendo con lo firmado.

“Planearon, entramaron actos criminales con el pago de comisiones y pagos ilegales a los empleados de Ecopetrol, incluso usaron empresas de fachada y cuentas de la entidad para cometer el ilícito”, sostuvo el fiscal encargado de esta investigación, Mario Montes.

La Fiscalía también capturó y procesó en Bogotá, al expresidente de la multinacional, Francisco Guinard Voelkl, investigado por el presunto pago de sobornos para recibir contratos en Ecopetrol para exploración y explotación de yacimientos. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

Para los investigadores fue claro que empleados de la multinacional petrolera acordaron el pago de cuantiosos sobornos a servidores públicos de Ecopetrol. Según el expediente, para esconder estos pagos, funcionarios de PetroTiger crearon una cuenta falsa y una empresa de papel, a través de esta estrategia expidieron facturas falsas por servicios de transporte.

Además del expresidente de la multinacional y de Pachón, la Fiscalía abrió cinco investigaciones más y entregó importante información a las autoridades de Estados Unidos.

Directivos de PetroTiger planearon y llevaron a cabo todo un entramado criminal, mediante la comisión de un sinnúmero de conductas punibles, entre ellas el pago de comisiones ilegales, falsedades, etc, que buscaban favorecer sus intereses económicos en la contratación que tenían con Ecopetrol.

Los pagos que en total ascendieron a más de \$2.000.000.000 se hicieron, unas veces, a través de sus propios empleados; otras, utilizando empresas de fachada desde las propias cuentas bancarias de PetroTiger.

Para el cumplimiento de su propósito criminal, además de la compra y venta de la función pública de los servidores estatales, acudieron a un sinnúmero de falsedades para soportar y justificar los pagos.

El propósito de estas comisiones ilegales era lograr beneficios en la contratación con Ecopetrol, tales como adiciones en los contratos existentes, evitar multas, evadir sanciones, esquivar inhabilidades, obtener nuevos contratos y satisfacer las exigencias postcontractuales.

Producto del interrogatorio rendido por Mauricio Vesga, se desprendieron las siguientes investigaciones:

Caso Duran – Navarro

Audiencia de imputación contra David Durán Flórez, Elgui Johanna Navarro Carvajal y Mauricio Vesga. La Fiscalía presentó escrito de acusación. Vesga se allanó a cargos.

Hipótesis delictiva / presuntos autores y partícipes:

1. Cohecho propio	405
2. Prevaricato	413
3. Falsedad en documento privado	289
4. Enriquecimiento ilícito	327
5. Lavado de activos	323

Caso Apiay

La Fiscalía imputó y formuló acusación contra Rafael Castillo Arbeláez, administrador del contrato. De esta investigación se compulsó copias y se abrió un proceso contra Luis Francisco Guinard Voelkl, quien para la época de los hechos era el representante legal de la multinacional y a quien se le imputó el primero de octubre de 2014, en calidad de determinador de los delitos de cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción.

Hipótesis delictiva / presuntos autores y partícipes:

1. Cohecho por dar y ofrecer	407
2. Cohecho propio	405
3. Enriquecimiento ilícito	327
4. Falsedad en documento privado	289
5. Tráfico de influencias	411

Caso putumayo

Se imputó y acusó a José Edison Pachón, administrador de los contratos, y José Miguel Galindo – superintendente de Putumayo. De esta investigación se abrió otro proceso contra Luis Francisco Guinard Voelkl, en calidad de determinador de los delitos de cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción.

1. Cohecho propio	405
2. Cohecho por dar y ofrecer	407
3. Prevaricato por acción	413
4. Enriquecimiento ilícito	327

Sistema de tratamiento de aguas de producción

Se imputó, formuló acusación, y se inició audiencia preparatoria contra Luis Edison Pachón Agudelo, funcionario de Ecopetrol.

Hipótesis delictiva / presuntos autores y partícipes:

1. Cohecho propio	405
2. Cohecho por dar y ofrecer	407
3. Trafico de influencias	411
4.Falsedad en documento privado	289
5. Enriquecimiento ilícito	327

Casabe

Se imputó y formuló acusación contra Jaime Urueta. De esta investigación se compulsó copias y se abrió un nuevo número de noticia criminal contra Luis Francisco Guinard Voelkl, a quien se le formuló cargos en su condición de determinador de los delitos de cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción.

Hipótesis delictiva / presuntos autores y partícipes:

1. Cohecho propio	405
2. Cohecho por dar y ofrecer	407
3. Prevaricato	413
4.Enriquecimiento ilícito	327

Castilla

Se imputó y formuló acusación contra Javier Enrique González Barbosa. De esta investigación se desprendió otro proceso criminal contra Guinard Voelkl como determinador de los delitos de cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción.

Asesinato de los niños en Caquetá

Un caso que estremeció e indignó al país, la Fiscalía lo resolvió en menos de una semana gracias al despliegue de personal, a la capacidad técnica, a la sagacidad y olfato de nuestros investigadores.

El 4 de febrero de 2015 fueron asesinados a sangre fría cuatro menores, todos eran hermanos, entre ellos dos niños de 4 y 10 años. El hecho ocurrió en la vereda Las Brisas, en Florencia, Caquetá.

Dos personas armadas incursionaron en un vivienda, sometieron y dispararon contra cinco menores, cuatro perdieron la vida y uno quedó herido.

Las víctimas eran cuatro hijos de JAIRO VANEGAS LOZADA y VICTORIA GRIMALDO AMEZQUITA y el otro menor era nieto de la pareja.

Los asesinos escaparon en una motocicleta, el niño herido fue hasta la casa de una de sus tías y relató los hechos.

En enero de 2015 en la vereda Las Brisas de Florencia, Caquetá, LUZ MILA ARTUNDUAGA contactó a EDINSON VEGA GARCÍA para asesinar a integrantes de la familia VANEGAS GRIMALDO. Este hombre buscó a JAINER ANTONIO URUEÑA ESQUIVEL, quien a su vez consiguió a los autores materiales: CRISTOFER CHÁVEZ CUÉLLAR, quien tenía como anteceden-

te una condena de 44 años por homicidio, sentencia de la cual sólo pagó 10 años de cárcel, y a GENDERSON CARILLO GRIMALDO.

La autora intelectual de la masacre, Luz Mila Artunduaga, le pidió a Édison Vega Ramírez que contratará a alguien para intimidar a una familia de vecinos, los Vanegas Grimaldo. Ella los quería obligar a salir de un lote donde vivían las víctimas.

Durante una reunión de Luz Mila Artunduaga, quien pretendía quedarse con el predio, y los sicarios acordaron el plan criminal y el pago de 500.000 pesos.

La Fiscalía desplazó hasta la zona a un equipo elite, que gracias a seguimientos, rastreos electrónicos y conexión de pistas, logró identificar y capturar a este grupo de asesinos.

Dentro del proceso también fue vinculado JOSÉ ALEISI GARCÍA RAMÍREZ. Con su hermano EDINSON VEGA GARCÍA, ubicaron el inmueble donde estaban los menores el día de la masacre.

Las actividades investigativas y la recolección de evidencias testimoniales, técnicas y tecnológicas, permitieron inferir que el homicidio de los menores Juliana, Laura, Samuel, Deinner Alfredo y las heridas a Pablo Vanegas Grimaldo, se produjeron como consecuencia directa de los conflictos entre los padres de las víctimas con la familia Artunduaga, situación que generó diversas disputas por la propiedad de un terreno. De las amenazas verbales pasaron a los asesinatos.

Nombre de los procesados:

CRISTOFER CHAVEZ CUELLAR
VEGA GARCIA EDINSON
CARRILLO ORDOÑEZ GEN

ARTUNDUAGA LUZ MILA
GARCIA RAMIREZ JOSE ALEISI
URUEÑA ESQUIVEL JAINER ANTONIO

Periodista Pitalito

El 9 de septiembre de 2015 fue asesinada por sicarios la periodista Flor Alba Núñez. Dos pistoleros en motocicleta le dispararon cuando la comunicadora ingresó a su sitio de trabajo en Pitalito, Huila.

Dos semanas después, la Fiscalía General de la Nación logró identificar y capturar al asesino: Juan Camilo Ortiz, alias Camilo. El delincuente fue procesado por homicidio y porte ilegal de armas. El hombre fue detenido en el municipio de El Palmito, Sucre, donde se escondía.

La Fiscalía también logró identificar a su posible cómplice, el hombre que conducía la motocicleta desde donde dispararon contra la periodista.

La comunicadora había recibido varias amenazas por su trabajo. Núñez había denunciado la forma cómo operaban en esa región bandas dedicadas al tráfico de drogas.

Falsas víctimas de Mapiripán

La Fiscalía General de la Nación imputó cuatro delitos a las hermanas María Teresa, Esther, Sara Paula y Luz Mary Pinzón López porque presuntamente mintieron durante la investigación por los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán, Meta, entre el 15 y 20 de junio de 1997.

Los asesinatos fueron cometidos por grupos paramilitares con la colaboración de agentes del Estado, más concretamente por integrantes de las Fuerzas Militares.

Según la Fiscalía, las mujeres le mintieron a las autoridades judiciales cuando aseguraron que varios de sus familiares fueron masacrados por los paramilitares. Las falsas versiones fueron presentadas también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la Nación por estos hechos.

Las mujeres se beneficiaron económicamente de la indemnización ordenada por el organismo internacional contra el Estado.

Con las falsas declaraciones las cuatro hermanas afectaron la administración de justicia que incurrió en graves errores por creerles. A las procesadas, la Fiscalía les imputó los delitos de fraude procesal, falso testimonio, estafa agravada y enriquecimiento ilícito.

Por estos mismos hechos, la justicia ya había condenado a tres personas más que le mintieron a las autoridades.

Enilce López, La Gata

La indagación comenzó con un oficio suscrito al grupo de policía judicial CIU de la DIJIN, el 21 de enero de 2011 por la Jefatura de la antigua Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.

El documento le informaba a la Fiscalía que agentes de la DEA notificaban que una fuente humana les había dicho que unas empresas, en entre los años 2000 y 2010, presuntamente habían administrado dineros de procedencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Las posibles irregularidades podrían determinar la realización de actos ilícitos, como ocultamiento de dineros a través de personas naturales y jurídicas, lo que implica directamente un lavado de activos. A

raíz de esa alerta la Fiscalía General de la Nación comenzó la investigación.

Posteriormente, los agentes de la DEA, mediante un informe del 10 de febrero de 2011, relacionaron las primeras pesquisas con una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y ocultamiento de bienes a través de terceras personas, entre ellas empleados medios, bajo las ordenes de ENILCE DEL ROSARIO LÓPEZ ROMERO, alias La Gata, y sus hijos: JOSÉ JULIO, HÉCTOR y JORGE LUIS, alias El Tiburón o El Gato.

El dinero rastreado a esta organización sería del jefe paramilitar SALVATORE MANCUSO, extraditado a los Estados Unidos.

La Fiscalía, entre otras investigaciones, realizó búsquedas selectivas en bases de datos de información confidencial de entidades financieras, empresas prestadoras de salud, en organismos como la DIAN, en la Cámara de Comercio y en oficinas de registros de Instrumentos Públicos, a nivel nacional.

También realizó operativos de vigilancia y seguimiento de sospechosos. Igualmente, hizo inspecciones a otros procesos que se adelantan contra ENILCE LÓPEZ, entre otros a uno de extinción de dominio en el que se ordenaron diligencias de registros que permitieron obtener información contable y financiera de las empresas con mayoría accionaria por parte de la familia López, o relacionadas con ella.

Los investigadores además profundizaron en los estudios económicos y patrimoniales de empresas y personas naturales.

En la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos se encontraron dos declaraciones juradas rendidas por testigos y que sirvieron para estable-

cer una operación que vincula, al parecer, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Así las cosas, como resultado de toda la indagación, la Fiscalía logró establecer la estructura de una organización criminal liderada por la señora ENILCE DEL ROSARIO LÓPEZ ROMERO, la cual, a través de un emporio empresarial, dedicado a actividades de chance, juegos de azar y relacionadas, permitió el ingreso y salida de millonarias sumas de dinero provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico y concierto para delinquir. Esta organización criminal pretendió amparar eso, como el desarrollo del objeto social de estas empresas al administrar, dar apariencia de legalidad, ocultar, encubrir e invertir esas sumas.

Gracias a las investigaciones, la Fiscalía identificó las empresas a través de las cuales se desarrollaron estas operaciones:

- UNIAPUESTAS S.A. – UNIÓN DE EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL ATLÁNTICO S.A. con nit. 802.013.432-4 en Barranquilla.
- APOSMAR S.A. – EMPRESARIOS ASOCIADOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, Nit. 891.702.542-6.
- APOSUCRE S.A. – ASOCIACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES DE SUCRE S.A.- nit. 800.040.690-5.
- UNICAT S.A. -UNIÓN DE INVERSIONES DE LA COSTA ATLANTICA- nit. 806.013.685-5.
- UNIPRODUCCIONES Nit. 802.021.728-2.

- SEGURIDAD 911 LTDA., Nit.802.016.248-9.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicitó el 31 de mayo de 2014, ante el Juez 12 Penal Municipal con función de control de Garantías de Cartagena órdenes de captura contra algunos de los miembros de esa familia y algunos de sus colaboradores.

El 1 de junio de 2014, la Fiscalía expidió las órdenes de registro y allanamiento con fines de captura, el 2 de junio el personal de la DIJIN-SIU, capturó a 11 de los procesados, entre ellos a:

-HÉCTOR JULIO ALFONSO, esposo de ENILCE LÓPEZ, aparece que fue accionista de las empresas UNIAPUESTAS S.A, APOSUCRE S.A., UNICAT S.A., acciones que figuran vendidas a su hija WENDY VANESSA ALFONSO LÓPEZ y a su esposa ENILCE DEL ROSARIO LÓPEZ ROMERO.

-MARTHA ELENA DEREIX MARTÍNEZ, ex esposa de SALVATORE MANCUSO. A través de la doble contabilidad recibió utilidades de las empresas APOSMAR S.A. y UNIAPUESTAS S.A., estos dividendos aparecen liquidados a nombre de ENILCE LÓPEZ ROMERO.

El 3 de junio de 2014 fue radica la solicitud de audiencia preliminar ante los Jueces Penales Municipales con función de control de garantías para legalizar los registros y allanamientos, órdenes de captura, así como formular imputación de cargos y solicitar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por los delitos de Lavado de Activos, Enriquecimiento Ilícito de particulares y Concierto para delinquir.

Un día después, el 4 de junio, ante el Juez Segundo Penal Municipal, con función de control de garantías de Barranquilla, se

realizó la diligencia de formulación de imputación de cargos contra ENILCE LÓPEZ ROMERO.

Los Canarios: paseos millonarios

Dirección Seccional / Unidad Nacional	Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado
Despacho	85 Especializado
Fecha de Asignación	
Etapas Procesales	INDAGACIÓN Y JUICIO

Delito (s):

Delito	Artículo
SECUESTRO EXTORSIVO CALIFICADO Y AGRAVADO	
HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO	
CONCIERTO PARA DELINQUIR	
HOMICIDIO	

Nombre Denunciante (s)

DE OFICIO

Nombre (s) de Indiciado _____ Imputado _____ Acusado __x__ (s)

DIEGO ALEXANDER BARBOSA
CARLOS EDUARDO CASTRO MORA
TATIANA PATRICIA RINCON MARTINEZ
OMAR OSWALDO RIOS FORERO
WILSON ALEXANDER BUITRAGO AVILA
JHON ALEXANDER TORRES LINARES
EDISON FERNEY LÓPEZ FIGUEREDO
MELQUI DÍAZ CLAVIJO
RAFAEL EDUARDO ALVARADO MUÑOZ
OSCAR JAVIER SILVA RUBIANO
REINEL ALEXANDER CLAVIJO DURAN
JULIAN ALBERTO SANDOVAL FORERO
GUSTAVO CASTIBLANCO BUSTOS
HALBER OSWALDO RODRIGUEZ PALACIOS

El 8 de marzo de 2012, mediante fuente no formal el grupo contra atracos de la Sijin, Policía Metropolitana de Bogotá, logró información de una persona que aseguró tener conocimiento de una organización delincuencia conformada por 10 personas y dedicada al paseo millonario.

La red se movilizaba en varios carros de servicio público y motocicletas. Los integrantes de la banda, utilizando armas de fuego y armas blancas, amenazaba a sus víctimas, pasajeros de taxis que recogían principalmente en centros comerciales del norte de la ciudad.

Los delinquentes se apoderaban de sus pertenencias y objetos de valor, y los obligaban a entregar las claves de sus tarjetas débito y crédito, reteniéndolos en contra de su voluntad durante una o dos horas hasta que confirmarían los retiros de sus cuentas bancarias.

El informante aseguró que la banda era dirigida por Diego Alexander Barbosa, alias "El Gordo", y que otros integrantes eran alias "Charly", "El Duende", "El Paisa", "Coyote", "El Flaco", "Ferney", "Ratón", "Torres", "Henry" y "Guillermo", quienes se autollaman: "Los canarios".

La fuente entregó los número de cinco teléfonos celulares que eran usados por la banda. La Fiscalía ordenó la interceptación telefónica de estos abonados.

El seguimiento electrónico permitió establecer no sólo la vinculación de las personas mencionadas a la organización, sino a casos de secuestro extorsivo en la modalidad de paseo millonario. Gracias a las interceptaciones a los delinquentes se les pudo vincular con varios hechos delictivos.

Caso Gran Estación:

El 15 de julio de 2012, dos personas, hombre y mujer fueron recogidas por la banda, secuestradas y asaltadas.

Caso de la DEA:

14 de agosto de 2012, fueron secuestrados un funcionario de la DEA y una mujer cuando salían del restaurante Teriyaki en la zona rosa de Bogotá.

Caso Bimbo:

Alto ejecutivo de esa empresa, quien fue recogido por un taxi en el centro comercial Atlantis.

Caso Pacific Rubiales:

14 de julio de 2012. Un empleado de la multinacional y su esposa fueron recogidos por un taxi en la calle 94 con carrera 13.

Por los resultados de las interceptaciones telefónicas, la Fiscalía solicitó órdenes de captura para los diez implicados, las cuales fueron aceptadas y expedidas por un juez de control de garantías. La Unidad Nacional contra el secuestro y la extorsión procedió de inmediato a emitir las órdenes de allanamiento con fines de registro en procura de incautación de elementos probatorios y con fines de detención. Estas diligencias se llevaron a cabo el 8 de octubre de 2012, fueron capturados siete de los diez sospechosos.

Las víctimas se ratificaron en sus denuncia, realizaron reconocimientos fotográficos de sus secuestradores en la modalidad de paseo millonario.

La Fiscalía solicitó, en tres oportunidades, un juez de control de garantías para realizar la audiencia después de las interceptaciones, búsqueda selectiva en base de datos tanto de tarjetas debito y crédito encontradas a los capturados y pertenecientes a posibles víctimas. Así como a

cupos numéricos obtenidos en las intercepciones.

El 8 de febrero de 2013, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación ante los señores jueces especializados de Bogotá, por los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo con secuestro extorsivo agravado y en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir con fines de secuestro extorsivo agravado contra dos jefes de la banda: Diego Barbosa, Wilson Alexander Buitrago Avila y Jhon Alexander Torres Linares, a quien adicionalmente se le imputó el delito de secuestro simple en concurso heterogéneo.

También se le imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo con secuestro extorsivo agravado y en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir con fines de secuestro extorsivo contra Rafael Alvarado, Omar Oswaldo Ríos, Carlos Eduardo Castro Mora y Oscar Javier Silva Rubiano, este último se le adicionó el cargo de secuestro simple.

Se presentó acusación contra Edison Ferney López Figueredo, por los delitos de concierto para delinquir con fines de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.

Ante los jueces penales del circuito especializados, se presentó acta de preacuerdo el 6 de febrero de 2013, para Tatiana Patricia Martínez Rincón por el delito de concierto para delinquir con fines de secuestro extorsivo en su calidad de cómplice.

El 30 de abril de 2013, se presentó acta de preacuerdo ante los jueces especializados suscrito por la Fiscalía y el procesado Edison Ferney López Figueredo. Aceptó los

cargos de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro extorsivo en concurso heterogéneo con el delito de fabricación y porte de armas, el cual fue improbadado el 24 de mayo, por el juzgado 1º Penal del circuito especializado.

Durante esta investigación se presentó otro hecho grave. El 10 de junio de 2014, no fue posible realizar la audiencia porque no fueron remitidos los procesados de la cárcel al juzgado por parte del Inpec. El juez leyó varios oficios de esta institución, según los cuales, hasta tanto no se realizara un estudio de seguridad a la organización delincuencia, no iba a realizar los traslados.

Por informaciones que maneja la guardia penitenciaria, complementadas con versiones entregadas a la Fiscalía, por dos miembros de Los Canarios, se hablaba de un plan de fuga y un posible ataque a las instalaciones de los jueces especializados, atentarian contra el señor juez, la fiscal y demás funcionarios asignados a este proceso.

Por seguridad, el juez accedió a realizar la audiencia por videoconferencia el 21, 22 y 24 de julio, y aseguró que proteger y garantizar la vida y seguridad de los funcionarios y asistentes a las audiencias era un deber también de los jueces.

El caso de Los Canarios tuvo una segunda fase de investigación por más secuestros y el asesinato de una de sus víctimas.

El homicidio del señor Guillermo Galvis ocurrido el 10 de marzo de 2011 durante el paseo millonario con su esposa. Por estos hechos fueron capturados Reinel Clavijo, alias Chetes, quien iba escondido en el asiento del copiloto y disparó contra Galvis. Igualmente fueron detenidos Julián Sandoval Forero, quien iba en el carro escolta, y Luz Patricia Paredes,

quien aceptó cargos y fue condenada a 32 meses de cárcel mediante preacuerdo por encubrimiento.

La Fiscalía también procesó a Diego Barbosa y John Henry Franco Duarte como coparticipes en estos mismo hechos.

Por estos casos contra la banda de Los Canarios, la Fiscalía General de la Nación logró condenas entre los 29 y 54 años de prisión contra los procesados.

Gracias a las investigaciones de la Fiscalía fue posible capturar a 33 miembros de esta temible organización delincencial y desarticular siete subgrupos creados por los jefes de la banda.

Violencia contra las mujeres

Una de las prioridades de la Fiscalía ha girado en torno a la violencia contra las mujeres. Los esfuerzos de investigación y acompañamiento a las víctimas ha sido permanente. Dentro del esquema de modernización y lucha contra la impunidad se impulsaron procesos y estrategias de todo tipo para garantizar justicia.

En cumplimiento de la Ley 1719 de 2014 se destacaron 35 fiscales para impulsar los casos de violencia sexual, se crearon comités técnico jurídicos en la totalidad de las seccionales y para su adecuado desarrollo se emitieron los memorandos 03, 04, 25, 26 de 2014 y se han realizado jornadas de capacitación específica.

La Fiscalía mantiene desde su creación la secretaría del Comité Técnico Interinstitucional para ampliar y cualificar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, dentro y fuera del conflicto armado.

Esta instancia, que se reúne cada mes desde febrero de 2015, ha sido creada para diseñar, impulsar y monitorear los mecanismos de acción interinstitucional, coordinar y articular estrategias de prevención, atención, protección, investigación y judicialización adecuada de la violencia sexual.

También ha liderado la elaboración del Protocolo de Investigación de la Violencia Sexual. En una primera etapa a través de la interlocución con la organización de la sociedad civil SISMA MUJER, que estuvo a cargo, con el apoyo de cooperación internacional, de la elaboración de los insumos para su construcción, los cuales fueron entregados a la Fiscalía en junio de 2015.

A mediados de junio de 2015 fue aprobado por el Comité Nacional de Priorización una propuesta para acelerar los procesos de violencia sexual en general y de violencia sexual, ocurrida en el marco del conflicto armado.

La estrategia contempla tres acciones principales, que entre otras cosas, responden a la obligación de adelantar las investigaciones en un plazo razonable y bajo el impulso de los funcionarios judiciales.

Las líneas de acción son:

Acción #1:

Judicialización de los hechos reportados en el auto oog que no cuentan con noticia criminal abierta en la Fiscalía a través de cuatro grupos de trabajo integrados por un fiscal especializado y una dupla psico-investigativa de un investigador y un psicólogo o trabajador social para adelantar los procesos de forma integral teniendo en cuenta el grupo perpetrador y las dinámicas territoriales del conflicto armado.

Acción #2:

Investigación y judicialización de los casos con noticia criminal al interior de la Fiscalía.

Acción #3:

Conformación de Subcomité de Articulación de la estrategia de priorización para la investigación y judicialización de la violencia sexual ocurrida en el marco del conflicto armado.

La Fiscalía además trabaja en la identificación, monitoreo y priorización de casos de feminicidio, y en la solicitud de órdenes de capturas y formulación de imputaciones en casos de feminicidios íntimos, sexuales y por actividad estigmatizada, casos de mujeres sobreviviente de feminicidios y casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con calificación extraordinaria de riesgo o violencia feminicida.

Acciones y estrategias desarrolladas o en ejecución actualmente:

Desde las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación se desarrollan acciones y estrategias que buscan atender e investigar adecuadamente todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual:

1.1 Modelos de atención y gestión

La Fiscalía tiene como misión fortalecer y facilitar los canales de acceso a la justicia, con especial atención de víctimas niños, niñas, adolescentes, mujeres y comunidades vulnerables. Desde la subdirección de Atención a Víctimas y Usuarios han implementado modelos de atención donde las víctimas y/o usuarios reciben orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica de forma inmediata y especializada.

Modelos de atención:

- CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CAIVAS – CAVIF. Atiende a las personas víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, y violencia intrafamiliar. Hay 31

CAIVAS y 35 CAVIF a nivel nacional.

- CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CAV: Atiende a los afectados, víctimas y testigos de los delitos sexuales, violencia intrafamiliar y homicidio. Existen CAV en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Buenaventura y Leticia.

- CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (CAPIV): Para víctimas de cualquier delito, en un marco del respeto por la dignidad humana, brindando una adecuada y oportuna atención en las áreas psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa de manera que se promueva la recuperación y se generen mecanismos de prevención del delito, respondiendo a los preceptos de enfoque diferencial, integralidad y corresponsabilidad.

- GRUPOS ÉLITES DE DELITOS ESPECIALES (GEDES): investiga aquellos casos de asalto sexual brindando una atención personalizada, inmediata y calificada a las víctimas.

Guías para la atención e investigación de los delitos con componente de violencia basada en género.

Los modelos de atención e investigación especial, con enfoque diferencial, cuentan con guías de atención de acuerdo con la labor que se desempeña en cada uno.

Guía para la atención integral en los Centros de Atención a Víctimas –CAV [FGN-50000-G-03]

Brinda directrices sobre la forma en que se debe realizar el acompañamiento y/o representación de las personas víctimas y testigos de delitos contra la familia, contra la vida, contra la libertad, integri-

dad y formación sexual, en las diligencias judiciales programadas, en especial en el incidente de reparación integral.

Guía de Atención e Investigación para el delito de Violencia Intrafamiliar [FGN-50000-G-06]

Estandariza las actividades que la Fiscalía realiza en el CAVIF o en otros despachos que conocen del delito de Violencia Intrafamiliar, en interacción con otras entidades del orden nacional, distrital y departamental.

En esta guía se formulan directrices para establecer los niveles de riesgo de las víctimas de violencia intrafamiliar (alto, medio o bajo). También dispone que en todos los casos en que las víctimas sean menores, los operadores deben realizar actos urgentes de investigación.

Guías para la atención integral e investigación de violencia y abuso sexual [FGN-50000-G-09]

Establece criterios sobre la forma en que se abordan las investigaciones de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, por fiscales y demás servidores públicos (especialmente aquellos que prestan sus servicios en el CAIVAS, unidades de fiscalía o despachos que conozcan de este tipo de delitos) y unifica las actividades que la Fiscalía General de la Nación realiza en interacción con otras entidades.

Esta guía advierte sobre la necesidad de aplicar un enfoque diferencial respecto de las mujeres integrantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y de otros grupos étnicos, así como con las víctimas menores de edad.

Precisa que los delitos sexuales constituyen urgencias médicas, por lo tanto se debe ga-

rantizar la asistencia que requiera y tramitarse la denuncia como acto urgente.

Capacitación de Funcionarios

En consideración a la necesidad de capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la entidad, como requisito para la transversalización del enfoque de género y diferencial, se han adelantando acciones pedagógicas que tienen como meta el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios en estos temas.

La Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana ha desarrollado procesos de capacitación para los servidores de la institución con la ayuda de agencias de cooperación internacional en violencia de género, perspectiva de género, justicia con enfoque diferencial y violencia sexual, en el marco del conflicto armado.

En 2014 y 2015, fueron realizados cursos y programas de capacitación especializada en justicia con enfoque diferencial en el marco del conflicto armado, atención al usuario con enfoque diferencial y justicia con enfoque diferencial.

En relación con los investigadores criminalísticos, capacitados en delitos sexuales como apoyo a los fiscales, las direcciones seccionales de Vaupés, Meta, Risaralda, Sucre, Cali, Atlántico, Caquetá, Huila, Cesar y Pasto tienen servidores que han sido formados.

De igual manera, las Seccionales de Risaralda, Casanare, Bogotá, Chocó, Cali, Atlántico, Caquetá, Cesar y Medellín, tienen servidores de Policía Judicial que apoyan lo relacionado con el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. Han sido formados en materia de violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

También fue realizado el Seminario Internacional Abordaje de Violencia Sexual en

el marco del conflicto armado apoyado por la Embajada de EE.UU.

Una de las acciones en las que participa la Fiscalía es la Estrategia Interinstitucional de lucha contra la impunidad. Se adelanta en conjunto con el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Se desarrollan visitas a terreno, en donde se identifican los nudos de acceso a la justicia para las mujeres y se implementan acciones intersectoriales para atender integralmente a víctimas de violencia basada en género, se fortalece la capacidad institucional de las autoridades locales en prevención, y se da una respuesta efectiva a las víctimas en la judicialización de sus casos.

En el 2013 y 2014 fueron realizadas jornadas de trabajo en Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Choco), Chaparral (Tolima), Puerto Inírida (Guainía) y Barrancabermeja (Santander).

Por otra parte, se está brindando asistencia técnica a la Dirección de Fiscalías Nacionales contra el Terrorismo en casos de violencia basada en género, donde existen otros delitos como tortura y violencia sexual.

1. Acciones encaminadas a la adecuada investigación de la violencia sexual

Priorización de casos de violencia sexual

La política de priorización ha sido aplicada en materia de violencia sexual. Han sido priorizadas, entre otras, las siguientes situaciones y casos relacionados con la violencia basada en género:

- En el Acta 001 de 2012, el Comité de Priorización decidió que en la Unidad Nacional de Análisis y Contextos - UNAC hoy DINAC- se priorizara la temática de violencia sexual en el marco del conflicto armado para lo cual se conformó un grupo encargado de delimitar situaciones y asociar casos que respondieran a dicha problemática.

- En este grupo de trabajo se priorizaron las siguientes líneas de investigación: (i) victimización a mujeres combatientes y (ii) victimización de menores relacionados con reclutamiento forzado.

- Por solicitud de la organización Iniciativa Mujeres por la Paz – IMP, el Comité de Priorización decidió sugerir al Fiscal General la reasignación de las investigaciones relacionadas con actos de violencia sexual presuntamente atribuidos a Marcos Tulio Guzmán, alias “El Oso”, ex comandante paramilitar de los Montes de María. Fruto de esta reasignación, la DINAC conformó un grupo de fiscales, analistas e investigadores que adelantó las indagaciones. La Fiscalía logró la exclusión de este ex paramilitar de justicia y paz.

- Fueron priorizados los casos contenidos en el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. Para tal efecto se ordenó la conformación de un grupo de trabajo al interior de la DINAC que ubicara los expedientes relacionados, los revisara detalladamente e hiciera un diagnóstico de cómo se ha adelantado su investigación. Todo esto con el objeto de proponer estrategias de priorización concretas para el avance de las investigaciones.

- Una vez reanudadas las sesiones del Comité Nacional de Priorización de

Situaciones y Casos, la primera solicitud que se evaluó fue la de priorizar los casos contenidos en el Auto 098 de 2013. El Comité conformó un grupo de análisis al interior de las Direcciones Seccionales para (i) identificar cuáles hechos de los relatados en el Auto se encuentran investigados por la Fiscalía; (ii) asociar los hechos con contextos similares; (iii) hacer un diagnóstico de las deficiencias en la investigación; (iv) elaborar un informe sobre las medidas de priorización más efectivas para adelantar las investigaciones.

- En sesión del 16 de septiembre de 2014, fue analizada la situación de los feminicidios en Buenaventura frente a lo cual el Comité Nacional decidió conformar un grupo de tareas especiales entre los fiscales e investigadores que adelantan procesos sobre la criminalidad en esa zona. Teniendo en cuenta que la violencia ejercida contra las mujeres no es aislada dentro de las temáticas priorizadas, se incluyó la violencia sexual, de manera tal que los homicidios relacionados en la solicitud de priorización fueran investigados con fenómenos de criminalidad conexos.

2.2 Protocolo de investigación de violencia sexual

Para el caso específico de violencia sexual, la Ley 1448 de 2011 ordenó a la Fiscalía elaborar un documento protocolo para la investigación y judicialización de los delitos sexuales. Con el apoyo del Consejo Noruego para los Refugiados, en el 2011 y principios del 2012, esta entidad adelantó un proceso de diálogo y construcción del documento con otras instituciones del Estado, agencias de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos con experticia en la materia.

2.3 Jornadas de denuncia masiva de violencia sexual

La Fiscalía, a través de la Subdirección de Atención a Víctimas, apoya y acompaña jornadas de toma de denuncias de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, cuyo objetivo es generar condiciones y garantías para que mujeres víctimas de estos delitos puedan denunciar con seguridad, minimizando el riesgo de una segunda victimización, además de visibilizar de manera integral la presencia institucional y generar estrategias para contribuir a la materialización efectiva de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de estas sobrevivientes.

Se han realizado hasta la fecha once jornadas de toma de denuncias de mujeres de violencia sexual en el marco del conflicto armado, en Barranquilla, Quibdó, Cúcuta, Cali, Valledupar, Riohacha, Popayán, Barrancabermeja, El Peñol (Antioquia), Calima (Valle del Cauca) y Silvia (Cauca).

2.4 Acciones para la investigación y judicialización de la violencia sexual por parte de la justicia permanente

La Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana en pro de cumplir con la obligación de garantía, que se traduce en el mandato de adelantar investigaciones penales con estándar de debida diligencia en los casos de graves violaciones de derechos humanos, especialmente la violencia sexual ha implementado planes, directrices y estrategias metodológicas en procura a la eficiencia y eficacia en las investigaciones con incorporación del enfoque diferencial.

En la actualidad se procura que estas investigaciones sean adelantadas por funcionarios perfilados, sensibilizados y capa-

citados en género, con la determinación de alcanzar los fines de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

2.5 Acciones para la investigación y judicialización de la violencia sexual, dentro y fuera del marco del conflicto armado en la justicia transicional

La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, con base en la Constitución, la Jurisprudencia, normas concordantes y en desarrollo de Ley 975 de 2005 modificada por Ley 1592 de 2012 Artículo 5A, ha venido aplicando lineamientos y estrategias a todas las investigaciones con enfoque diferencial, con el fin de garantizarles a las víctimas de violencia basada en género, sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Igualmente, dicha dirección ha diseñado e implementando una serie de directrices y estrategias que permiten a los funcionarios, abordar a las víctimas y, proveerles una atención integral en el marco del Proceso Especial de Justicia y Paz, para que puedan brindarle a las víctimas información adecuada de los derechos que tienen dentro del proceso. Así como recibir las denuncias cuando haya lugar a ello dándole una atención preferencial, igualmente brindándole una atención primaria preferencial, por parte de la entidad, con aquellas víctimas en situación de amenaza, riesgo extremo o extraordinario.

Dentro del proceso de modernización, con Resolución No. 0-0574 del 2 de abril de 2014, el Fiscal General ordenó la organización de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional y a su vez creó entre otros grupos, el de Orientación, Registro y Asignación de Casos de Víctimas en el marco de la Justicia Transicional, que haría las veces de la subunidad

antes referida y el Grupo de Apoyo Legal que cuenta con el Sub-grupo de Enfoque Diferencial con quien podemos dar respuesta y apoyo al tema de violencia basada en género.

2.6 Ruta de Protección a las Víctimas de Violencia Sexual

Para cumplir con lo establecido en el Decreto Ley 016 de 2014 y en la Ley 1719 entre otros, la Dirección Nacional de Protección viene realizando la modificación a los formatos, protocolos, guías y rutas para la adecuada protección de las víctimas de violencia sexual.

Dentro de las estrategias, se encuentra la creación de un Manual de Aplicación de Lineamientos de Factor Diferencial y de Género cuya finalidad es garantizar la seguridad en condiciones de respeto a los Derechos Humanos, a las víctimas y testigos pertenecientes a poblaciones especiales en el proceso de acceso a la justicia. A la vez, tiene como objetivo servir como guía y consulta para trazar y orientar en los casos de Factor Diferencial y de Género.

Espacios Interinstitucionales en los que participa la Entidad

Los siguientes son algunos de los espacios interinstitucionales en los que participa la Fiscalía, a través de diferentes dependencias.

Comité Técnico Interinstitucional para ampliar y cualificar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado

La Fiscalía General de Nación, junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pue-

blo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial suscribieron el 9 de febrero de 2015 la carta de intención interinstitucional, como mecanismo para sumar voluntades y compromisos, para apoyar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado, con el propósito de cumplir la obligación de garantía que se traduce en adelantar investigaciones penales y judicializar con la debida diligencia los casos de violencia sexual, para evitar que haya impunidad.

Comités de Seguimiento de la Ley 1257 de 2008 y 1719 de 2014

Por otra parte, están los Comités de Seguimiento de la Ley 1257 de 2008 y 1719 de 2014, instancia impulsada por la Procuraduría, la Consejería para la Equidad de la Mujer y la Defensoría del Pueblo, con la participación de representantes de organizaciones de mujeres.

En el marco de este comité se solicitan informes y se hacen sesiones de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las disposiciones de dichas leyes de competencia de la FGN.

1.3 Mesa de trabajo de seguimiento Auto 092 de 2008

La Fiscalía lidera un espacio interinstitucional en el que participan la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Mesa de Seguimiento al Auto 092 constituida por organizaciones de la sociedad civil. Esta mesa de trabajo tiene tres objetivos principales: Primero, la promoción de acciones de responsabilidad y transparencia por parte de la Fiscalía. Segundo, el fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil y de espacios de interlocución y participación en los que la entidad reciba

retroalimentación por parte de las organizaciones, para que desde su experticia se construyan estrategias conjuntas que promuevan el avance de los procesos en los que las víctimas son mujeres. Y tercero, el impulso y seguimiento a los casos del Anexo reservado del auto 092 de la Corte Constitucional, entre otros.

1.4 CERREM de Mujeres del Ministerio el Interior y la Mesa para lideresas /defensoras de DDHH del Sistema Nacional de Protección

Es un grupo de trabajo interinstitucional creado específicamente para llevar a cabo la valoración integral del riesgo y hacer recomendaciones de protección para aquellas personas que se encuentran en peligro extraordinario o extremo, como consecuencia directa del ejercicio de su cargo, de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. Está compuesto de miembros permanentes y entidades invitadas. La Secretaría Técnica de este Comité se encuentra a cargo de la Unidad Nacional de Protección.

Actualmente existe un PRECERREM y un CERREM específicamente para mujeres con el propósito de incorporar la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Protección.

1.5 Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres

El propósito es aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades, a fin de lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia.

Aunque la Fiscalía, en estricto sentido, no hace parte de la mesa, si ha venido participando en este espacio desde la Subdirección de Políticas Públicas y la Subdirección

de Atención a Víctimas y Usuarios, con miras a articular con las demás entidades las acciones que vienen realizando en ejercicio de sus funciones.

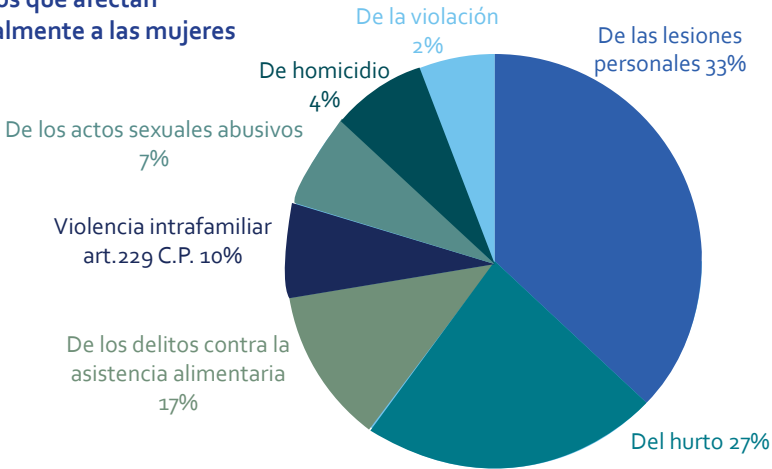
2.6 Comisión Intersectorial de la Política Pública y del plan indicativo del CONPES 161 y su Comité Técnico

A raíz de la expedición del CONPES 161 de 2013, se promulgó el Decreto 1930 de septiembre de 2013, por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea una Comisión Intersectorial para su implementación.

Dicha comisión tiene por objeto coordinar, armonizar e impulsar la ejecución del Plan Indicativo de dicho CONPES por parte de las entidades involucradas.

II. Principales fenómenos criminales que actualmente afectan a las mujeres¹

1. Delitos que afectan principalmente a las mujeres



Información de SIJUF y SPOA a 2014. Otros incluye Proxenetismo, incesto, lesiones, homicidio, acceso, actos sexuales y tortura en persona protegida, prostitución forzada o esclavitud sexual.

1. De acuerdo con la información registrada en SIJUF y SPOA proporcionada por el Observatorio de Derecho Humanos de la Subdirección de Políticas Públicas y la Dirección Nacional de Seccionales.

2. Homicidio contra mujeres

TOTAL CASOS ACTIVOS CON GENERO F DEL 01/01/2008 AL 26/05/2015	
DELITO	TOTAL CASOS
HOMICIDIO ART. 103 C.P.	11.861
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO	228
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO CON SEVICIA ART. 104 N.6 C.P.	12
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO EN SERVIDOR PUBLICO PERIODISTA ART. 104 N.10 C.P.	28
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR VICTIMA EN SITUACION DE INFERIORIDAD ART. 104 N. 7 C.P.	36
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO COMO CONSECUENCIA DE UN DELITO DE PELIGRO COMUN O CONTRA LA SALUD PUBLICA ART. 104 N.3	1
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO EN PERSONA INTERNACIONALMENTE PROTEGIDA ART. 104 N.9 C.P.	21
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO ART. 104 N. 4 C.P.	3
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR CONSANGUINIDAD ART. 104 N.1 C.P.	7
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR FACILITAR OCULTAR O CONSUMAR OTRA CONDUCTA PUNIBLE ART. 104 N.2 C.P.	4
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR FINES TERRORISTAS ART. 104 N.8 C.P.	71
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR SER CONTRA EL GRUPO FAMILIAR ART. 104 N.1 C.P. Modificado Ley 1257 de 2008	14
HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO SI SE COMETIERE CONTRA MUJER POR EL HECHO DE SER MUJER ART. 104 N.11 C.P. Adic Ley 1257 de 2008	7
TOTAL GENERAL	12.293

Información de SPOA a 27 de mayo de 2015 proporcionado por Dirección Nacional de Seccionales.

Víctimas de ataques con agentes químicos

A partir del intercambio de experiencias con víctimas y organizaciones de víctimas, la Fiscalía elaboró la "Guía para la Atención a Víctimas de Agresiones con Agentes Químicos o Sustancias Corrosivas".

La Fiscalía también hace cumplir la nueva ley llamada "Ley Natalia Ponce de León", que establece penas de prisión entre 30 y 50 años de cárcel para los que ataquen con ácido, agravación punitiva para los casos en los que las víctimas sean menores o mujeres.

Para garantizar la atención integral y el restablecimiento efectivo de los derechos de las víctimas de crímenes con ácido, sustancias que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, la Fiscalía participa en la Mesa Interinstitucional de Trabajo para la Prevención, Protección, Atención y Restablecimiento de los Derechos de las Mujeres Sobrevivientes de Agresiones con Agentes Químicos.

En este grupo hay representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría Distrital de Salud, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Gobierno, representantes de la academia como la Universidad de Los Andes y la Fundación Reconstruyendo Rostros.

En este espacio la Fiscalía participa activamente en la reflexión que se hace sobre tres de los puntos fundamentales para las víctimas: i) el acceso real y efectivo a la justicia; ii) la construcción de lineamientos para la prevención del delito con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres; y iii) el incentivo para la producción

de conocimiento sobre la situación de las sobrevivientes que aporte a la construcción de política pública.

En este marco interinstitucional, se han trabajado algunos casos puntuales con la Secretaría Distrital de la Mujer, en el acompañamiento a sobrevivientes y el seguimiento a las rutas de atención cuando se identifican dificultades o nudos en dichos procesos:

Caso de Consuelo del Socorro Córdoba Oñate

El 25 de junio de 2002 en Cartagena fue agredida por DAGOBERTO ENSUNCHO SÁNCHEZ, causándole deformidad física de carácter permanente.

Atención brindada a la víctima:

La víctima ha recibido todas las atenciones a que tiene derecho. Su situación es complicada por el estado emocional y mental, así como por sus dependencias físicas y económicas causadas, en parte, por las lesiones.

Caso de Ellen del Carmen Ramirez Laborde

En Bogotá esta mujer fue rociada con sustancia química que fue lanzada desde un vehículo particular gris, en la localidad de Teusaquillo.

Atención brindada a la víctima:

La víctima denunció los hechos en la Estación de Policía de Teusaquillo, fue atendida de urgencia en la Clínica Fundadores y fue valorada por Medicina Legal.

Caso de Viviana Barco

La señora Barco, residente en Ibagué, manifestó haber sido nuevamente amenazada por su ex compañero. Esta vez, las amenazas de rociar ácido no están dirigidas solo en su contra sino que incluyen a su hijo y a su actual compañero sentimental.

Atención brindada a la víctima:

La Subdirección de Atención a Víctimas y Usuarios del Tolima citó y orientó a la ciudadana para que formulara denuncia penal por el presunto delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en contra de ALQUIMIDES DE JESÚS ARANGO.

Además se realizaron las siguientes gestiones:

-Se informó a la víctima sobre sus derechos.

-Se solicitó medida de protección por parte de la Policía.

-Se solicitó valoración médica al Instituto de Medicina Legal.

-A través de la red de mujeres REMI se iniciaron las acciones para brindarle asistencia legal y psicológica, hospedaje y alimentación a la víctima.

Caso de Esperanza Rangel

La víctima vivió con Camilo Ernesto Ariza Moreno desde el 2002 hasta el 2012. Tuvieron un hijo. Durante esta relación fue agredida física, verbal y psicológicamente por su compañero, por lo cual existen denuncias por violencia intrafamiliar desde el 2003. El 23 de diciembre de 2014, previa amenaza de su ex compañero, quien le daba plazo hasta el pasado 23 de diciembre para conversar sobre su situación o de lo contrario ella “siempre se iba a acordar de él”, la señora RANGEL, fue víctima de un ataque con agente químico que le ocasionó heridas en su rostro y cuello.

Atención brindada a la víctima:

La Fiscalía trabajó en coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer para impulsar el estudio de este caso en un comité técnico especial y así encontrar rutas alternas para lograr una protección extraordinaria.

Caso de Jenny Marsella Pardo Roa

El 2 de septiembre de 2015, a las 19:35 aproximadamente, en la calle 39 con carrera 14, vía pública, barrio Teusaquillo de Bogotá, mientras JENNY MARSELLA PARDO ROA se encontraba dialogando con un compañero, fue sorprendida por un hombre quien le arrojó ácido nítrico.

La agresión le produjo quemaduras de segundo y tercer grado en el 26% del cuerpo (cabeza, cara, cuello, espalda, extremidades superiores e inferiores).

Desarrollo de la investigación

Dentro de las labores realizadas fue posible recopilar las cámaras de seguridad del lugar donde está el desplazamiento de dos sujetos momentos antes del ilícito.

Con testigos, entrevistas, videos de cámaras de seguridad y demás actividades de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía 404 Local CAPIV, la Unidad de Investigadores destacados de SIJIN-MEBOG, fue posible identificar, individualizar y capturar el 5 de noviembre de 2015, en Villavicencio a los presuntos responsables.

Caso de Nubia Patricia Espitia

13 de febrero de 2007, la víctima recibió una llamada en la que le informaban que su mamá había sufrido un ataque y al desplazarse a la casa de su progenitora fue atacada con ácido por una mujer, en los hechos su hija también fue herida. La investigación se encuentra en indagación a cargo de la Fiscalía 170 local, en averiguación de responsables.

Servicios de atención brindados:

En el CAV de Bogotá se le ofrecieron a la víctima los servicios de asesoría jurídica para lo cual se le asignó un representante legal. A raíz de los hechos la víctima creó

su propia fundación: RECONSTRUYENDO ROSTROS ONG, la que la ha ayudado a asumir su situación con fortaleza.

Caso de Diana Milena Yate

Fue agredida el 9 de octubre de 2010 por HERIBERTO PINZÓN SÁCHEZ quien le roció una sustancia química que le afectó su rostro y parte de su cuerpo.

El caso se encuentra en etapa de juicio a cargo del juzgado 30 penal del circuito con función de conocimiento y la Fiscalía 22 Especializada de Bogotá.

Servicios de atención:

A la víctima se le brinda atención psicosocial, atención preventiva y primaria y se remite a la Fundación del Quemado en donde se le ofreció atención médico quirúrgica.

Caso de Leidy Amparo Morales Muriel

A las 8:30 de la noche del 14 de abril de 2015, la víctima se dirigía a su casa en el barrio Robledo Curazao de Medellín, luego de finalizar sus labores como vendedora de productos comestibles, un hombre, al parecer, desconocido le lanzó un líquido causándole quemaduras de segundo grado en cuello y extremidades.

Servicios de atención brindados:

Acompañamiento en urgencia y apoyo para ingreso a Hogares de Acogida, a través de la Línea 123 Mujer y representación de la víctima, dentro del caso por parte del programa de la Defensoría Pública.

Caso en Bucaramanga

Se trata de una mujer que padeció graves lesiones en su rostro, cuello y extremidades, al parecer ocasionadas por otra mujer.

Servicios de atención:

Recibió una atención integral por parte de un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales: abogados, psicólogos y trabajadores sociales, adscritos al Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía.

Se ofreció orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado, desde el momento de ocurrencia del hecho hasta la finalización del mismo.

El abogado designado para el caso, se desempeñó como representante de la víctima dentro del proceso penal, dándole a conocer sus derechos, solicitando ante el Juez de Control de Garantías la medida de protección inmediata de sus derechos, pidiendo remitir a la víctima a un sitio donde se garantizara la guarda de su vida, dignidad, e integridad junto con su familia.

Se implementaron medidas de atención para garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo el servicio de transporte de la víctima, quedando a cargo de la Entidad, la atención médica, psicológica y psiquiátrica.

Mientras se obtuvo la atención por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se dispuso de una casa de refugio donde la mujer víctima recibió el apoyo, en todas las áreas, gracias a la colaboración y trabajo articulado con el municipio de Bucaramanga, que mediante convenio con la Fiscalía dispuso de estos profesionales, así como de abogados y psicólogos que apoyaron este proceso.

Caso con víctima masculina

En Bucaramanga se conoció el caso de un hombre, su hermana formuló la correspondiente denuncia.

Servicios de atención brindados:

Se requirió a la víctima para informarle de todos sus derechos pero éste no compareció.

Caso Natalia Ponce

27 de marzo de 2014, sobre las 5:30 de la tarde fue atada con ácido la joven Natalia Ponce de León Gutiérrez de Piñeres. El químico, lanzado por Jonathan Vega Chávez, le produjo quemaduras severas en diferentes partes del cuerpo. El agresor escapó del lugar de los hechos.

Natalia Ponce fue trasladada de inmediato a la Clínica Reina Sofía. De acuerdo con la valoración efectuada por Medicina Legal, las lesiones dejaron en alto riesgo su vida, ante la inminente posibilidad de complicaciones inmediatas por las graves quemaduras, principalmente en el rostro. Ante estos hechos, la Fiscalía General de la Nación consideró que la conducta del agresor vulneró abiertamente los bienes jurídicos tutelados por el legislador, tanto de la vida como de la integridad física de Natalia Ponce de León.

El agresor Vega, para poder llevar a cabo la acción criminal, planeó paso a paso la manera cómo iba a desarrollar el ataque. Primero, adquirió meses atrás la sustancia con la cual iba a agredir a su víctima, segundo, usó una identidad diferente a la suya para engañar a Natalia.

La Fiscalía pidió medida de aseguramiento y presentó contra Jonathan Vega escrito de acusación el 4 de julio de 2014 por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Jueces de Barranquilla

La Fiscalía logró desarticular un gran entramado de corrupción del que hacían parte abogados litigantes y funcionarios judiciales en Barranquilla, jueces

y fiscales, pasando por empleados administrativos.

La red manipulaba reparto de procesos y decisiones de jueces para favorecer a peligrosos delinquentes. La investigación de la Fiscalía comenzó gracias a un anónimo.

Involucrados y delitos:

-ARMANDO CASTRO BARRAZA, Comisario de familia por el delito de Concusión.

-FRANCISCO ANTONIO SANABRIA, Inspector de Familia por el delito de Concusión.

-NERILDA CARÉ PARRA, Presidenta de la Junta de Acción comunal barrio la Paz, por el delito de Concusión, en calidad de interviniente y Falsedad en documento privado.

-GABRIEL RAMOS FONTALVO, Abogado litigante, por el delito de Prevaricato por acción agravado en calidad de interviniente y Concusión en calidad de interviniente.

-ORLANDO ANAYA DURAN; Abogado litigante, por los delitos de Falsedad ideológica en calidad de coautor, Prevaricato por acción en calidad de interviniente y Concierto para delinquir.

-JOSÉ DE JESÚS VERGARA OTERO, Juez 12 penal municipal con función de control de Garantías de Barranquilla, por los delitos de Prevaricato por acción agravada, Concusión y Concierto para delinquir.

-RAFAEL DE JESÚS URIBE, Coordinador y juez 13 penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla, por los delitos de Falsedad ideológica en documento público en

calidad de coautor y Concierto para delinquir.

-EDWIN RICARDO VOLPE, Juez 9 penal municipal con función de control de Garantías de Barranquilla por los delitos de Prevaricato por acción agravado.

-GLORIA AMPARO GIRALDO, Juez 7 del circuito de Barranquilla por los delitos de Prevaricato por acción agravado.

-OSCAR CONTRERAS AMARIS, Fiscal seccional, por los delitos Concusión, Prevaricato por acción agravado y Prevaricato por omisión.

-ENISBERTO JOSÉ MAESTRE, secretario del juzgado 13 penal municipal, por los delitos de Falsedad ideológica en documento público, Cohecho por dar u ofrecer, Concierto para delinquir, entre otros.

-LUIS CARLOS TOVAR VANEGAS, empleado centro de servicios, por los delitos de Cohecho por dar u ofrecer y Concierto para delinquir.

-CÉSAR MIGUEL VILLADIEGO HERNÁNDEZ, empleado centro de servicios por los delitos de Cohecho por dar u ofrecer, Concierto para delinquir y Falsedad ideológica en documento público.

-FRANCISCO SANABRIA, Inspector de familia, por el delito de Concusión.

Etapas procesal:

Fue realizada la legalización de capturas, allanamientos, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.

El abogado GABRIEL RAMOS FONTALVO, está colaborando con la fiscalía. Así mismo, CÉSAR MIGUEL VILLADIEGO, emplea-

do del centro de servicios, está colaborando y se acogió al principio de oportunidad.

Todos se encuentran con medida de aseguramiento en domicilio.

Hechos:

La investigación, se inició con una denuncia anónima, donde se puso en conocimiento presuntas irregularidades, por parte de funcionarios del centro de servicios de Barranquilla. Allí por ejemplo, Orlando Anaya Durán, Luis Carlos Tovar, alias Detodito, y otros, se dedicaban a la manipulación de las investigaciones, el reparto de las mismas y a decisiones judiciales a cambio de dinero.

En el desarrollo de la investigación, mediante agente encubierto, la Fiscalía logró establecer las irregularidades dentro del caso del "TURCO HILSACA".

Violando las normas sobre programación de fechas de audiencias, alteraban el orden y manipulaban el reparto de casos.

RAFAEL DE JESÚS URIBE, Coordinador y Juez 13 Penal, ingresó a la oficina de reparto y ordenó asignar la carpeta del "TURCO HILSACA" a EDWIN RICARDO VOLPE, Juez 9 Penal Municipal con función de Control de Garantías. Ese mismo día se llevó a cabo la audiencia y el Juez accedió a la solicitud de la defensa, en el sentido de revocar la medida de aseguramiento contra Alfonso Hilsaca Eljaude.

Se logró establecer mediante interceptaciones telefónicas irregularidades dentro de la investigación contra STEFFY DIAZ ATENCIA, alias "La BEBA".

En una investigación que se adelantaba contra un grupo denominado "Los químicos", fue posible evidenciar que entre

algunos de los integrantes de esa organización y miembros de la rama Judicial y la Fiscalía, estarían trabajando en conjunto con los defensores de estos, con el fin de otorgarles beneficios a cambio de dinero. Mencionando entre otros, la devolución de vehículos incautados con caletas donde se encontró cocaína y la concesión del beneficio de libertad domiciliaria, a quienes ya se encontraban con medida de aseguramiento de detención preventiva por haber sido capturados en flagrancia en posesión de sustancias estupefacientes.

El 30 de septiembre y primero de octubre de 2014, ante el Juez Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Barranquilla, se llevaron a cabo audiencias de legalización de registro, allanamiento, captura en situación de flagrancia, formulación de imputación de cargos por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes contra alias "La Beba". La mujer fue privada de la libertad en establecimiento carcelario y suspensión del poder dispositivo del vehículo de placas MHW 932 donde se había encontrado el estupefacientes.

Por las conversaciones interceptadas fue posible establecer que entre sus abogados y alias "La Beba", se hablaba que el Fiscal del caso les exigía dinero a cambio de devolver el vehículo. El 20 de octubre de 2014, en respuesta a una solicitud del abogado de Steffy Díaz y de Jairo Rada, su cónyuge, el entonces Fiscal 24 Seccional de la Unidad de Seguridad Pública, ordenó la entrega del vehículo a los procesados, automotor que tenía suspensión del poder dispositivo por haber sido legalmente incautado por transportar drogas.

En esas conversaciones interceptadas, los procesados y sus abogados también mencionan que el Juez del caso estaría pidiendo dinero a cambio de sustituir la me-

didada de aseguramiento contra la detenida. En audiencia celebrada el 13 de noviembre, el Juez 12 Penal Municipal con función de Control de Garantías, decidió sustituir la medida de aseguramiento impuesta a alias "La Beba".

Entrega de cadáveres de desaparecidos, en el marco del proceso de construcción de paz. Villavicencio, diciembre de 2015

Los procesos de construcción de paz han tenido como centro de sus preocupaciones, no sólo la forma en que la población ha visto vulnerados sus derechos y ha sufrido múltiples afectaciones, sino las estrategias por medio de las cuales el Estado y la sociedad pueden contribuir al restablecimiento de tales derechos y a la reparación integral.

El hecho victimizante de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado, además de constituirse en una vulneración de derechos fundamentales, genera una serie de afectaciones psicológicas, familiares, sociales, etc., frente a las cuales es necesario volcar todos los esfuerzos institucionales para la materialización de derechos tales como la verdad y la justicia.

La Mesa de Conversaciones de La Habana, en sus más de 3 años de puesta en marcha, no ha sido ajena a esta preocupación, tal como se expresa en el comunicado conjunto # 62, 17 de octubre de 2015, el cual contiene dos acuerdos generales, uno de ellos con referencia a las "Medidas inmediatas de construcción de confianza que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado". Como parte del mismo y de manera particular, se ha acordado "la entrega digna de restos iden-

tificados que no hayan sido aún entregados a sus familiares”.

La Fiscalía, bajo la coordinación y articulación de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas, y a partir de las importantes labores de búsqueda, ubicación e identificación realizadas por fiscales, Policía Judicial del CTI y de la DJIN; equipos forenses de su Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del CTI y del Grupo de Exhumaciones; grupos de criminalística del CTI, y del apoyo de otras instituciones del Estado, de la Cooperación Internacional y de la misma sociedad civil; ha realizado, en tan sólo dos meses después del acuerdo, la entrega de 29 cadáveres de personas inhumadas como Personas No Identificadas (PNI) en cementerios, ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado.

Las 29 personas, cuyos restos fueron entregados dignamente a sus familiares, fueron inhumadas como PNI en los cementerios de Villavicencio, Vista Hermosa, Granada y La Macarena, Meta, y en el cementerio de San José del Guaviare.

I. Instituciones presentes durante la diligencia de entrega

Instituciones participantes

- Fiscalía General de la Nación: Subdirección Nacional de Atención a Víctimas, fiscales encargados de los procesos judiciales, equipos forenses, psicólogo(a)s y Policía Judicial.
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV): psicólogo(a)s.
- Ministerio de Salud y Protección Social, y Secretaría de Salud del Meta: psicólogo(a)s
- Corporación Colectivo Sociojurídico

Orlando Fals Borda: psicólogo(a)s y equipo logístico.

- Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) – operador financiero y logístico de la diligencia: equipo de logística

- Cruz Roja: asistencia de primeros auxilios

Instituciones y personalidades invitadas

- Dr. Sergio Jaramillo: Alto Comisionado para la Paz

- Dr. Iván Cepeda: Senador de la República de Colombia

- Dr. Alirio Uribe: Senador de la República de Colombia

- Dr. José Luis Ponce Caraballo: Embajador de Cuba

- Dr. Lars Vaagen: Embajador de Noruega

- Dr. Alan Edmundo Jara: Gobernador del Departamento del Meta

- Dra. Paula Gaviria: Directora de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

- Dra. Mónica Cifuentes: Asesora del Alto Comisionado para la Paz

- Dra. Claudia Azzolini: Jefe Adjunta de la Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICIR)

- Dra. Delphine Van Solinge: Coordinadora de Protección de la Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICIR)

- Dr. Jared Kotler: Asesor de Paz y Desarrollo de las Naciones Unidas en Colombia
- Dr. Carlos Eduardo Valdés: Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

II. Actividades generales

Lunes 14 de diciembre

- Reunión interinstitucional, en la cual se conformaron 3 grupos de trabajo compuestos por fiscales, profesionales forenses, Policía Judicial y psicólogo(a)s. En esta reunión se socializaron y resolvieron inquietudes sobre cada uno de los 29 casos.
- Asignación a cada familia de un psicólogo(a), quien les acompaña y asistió durante toda la jornada garantizando así que cada familia tuviera esta prestación de manera única e individual.
- Recepción de las familias por parte de la UARIV y el FUPAD.

Martes 15 de diciembre

- Inicio de la diligencia judicial:
 - La Subdirectora Nacional de Atención a Víctimas de la FGN realiza la apertura y da la bienvenida a las familias.
 - Cada una de las familias se presenta ante de las demás familias e instituciones presentes.
 - Personal especializado reúne a niños y niñas con el fin de realizar actividades durante toda la jornada, brindándole así mayor tranquilidad a los familiares adultos.

- Realización de actividades y acompañamiento psicosocial a las familias.

- Realización de actividades y acompañamiento a niños y niñas.

- Orientación jurídica (FGN), el Fiscal del caso se reúne individualmente con cada familia para explicación jurídica y judicial del caso. Posteriormente y una vez absueltas las preguntas e interrogantes por parte de los familiares, se hace lectura y firma de documentos del proceso judicial (FGN), y asesoría en temas de reparación integral y asistencia funeraria (UARIV).

Miércoles 16 de diciembre

- Explicación forense técnico científica a cada una de las familias, por parte de fiscales y equipos forenses, en la cual se expone de manera pedagógica porqué los restos que se les van a entregar corresponden a sus familiares. (pruebas de ADN, cotejo decadal, carta dental).
- Por ser una de las diligencias de mayor impacto, el acompañamiento psicosocial es permanente.

- Exposición de los restos óseos cuando los familiares lo deseen.

- Realización de actividades y acompañamiento a niños y niñas.

Jueves 17 de diciembre

- Acto protocolario de entrega de cadáveres:

- Se da inicio a la diligencia de entrega por parte del Vicefiscal General de la Nación

- Los familiares, a quienes se les haría entrega de los restos óseos,

realizaron una expresión de memoria y dignificación a sus seres queridos. Así mismo, algunos de los familiares ofrecieron sus palabras al auditorio

- Palabras por parte del Alto Comisionado para la Paz y de las Directora de la UARIV

- Realización de acto ecuménico conjunto, en el cual participaron representantes de varias iglesias, garantizando así la libertad de cultos de todas las familias.

- Diligencia judicial de entrega de cadáveres – acto privado:

- Los medios de comunicación e instituciones diferentes a la FGN y la UARIV se retiran del lugar, por petición realizada previamente por los familiares de las víctimas

- Entrega oficial de documentación a los familiares, por parte de la FGN.

- Acompañamiento hasta el lugar de inhumación.

Atención a víctimas y usuarios

La Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios (SNAVU), creada mediante Decreto 016 del 9 de enero de 2014 y Resolución 00567 del 2 de abril de 2014, surge como respuesta a la necesidad de fortalecer el acceso a la administración de justicia, la prevención y la atención integral a la población víctima del delito.

Procesos como la generación de confianza, el reconocimiento de las necesidades y derechos de la población, el fortaleci-

miento de la orientación y recepción de la denuncia, y la prevención del delito, entre otros, constituyen la piedra angular, no sólo de la atención integral, sino del cumplimiento mismo de la misión investigativa y acusadora de la Fiscalía.

El presente informe se encuentra actualizado al mes de noviembre de 2015.

1. Creación de los centros de atención penal integral a víctimas (capiv)

1.1. ¿Qué son los CAPIV?

Son centros de victimo asistencia que ofrecen atención psicosocial y jurídica (información, orientación, recepción de denuncias, acompañamiento interdisciplinario, rutas interinstitucionales de atención e investigación) en una misma sede. El acompañamiento presencial de otras instituciones del Estado es un aspecto esencial de este nuevo modelo de atención.

1.1. ¿Cuáles son los principios del CAPIV?

- Atención a toda persona víctima del delito:

- En el CAPIV, la ciudadanía puede recibir una atención digna y oportuna frente a la ocurrencia de un delito, sin importar la tipificación del mismo ni el marco legal al que corresponda.

- Abordaje integral que:

- Tiene en cuenta las características particulares de la víctima (enfoques diferenciales).

- Transversaliza el enfoque de género.

- Parte del enfoque de acción sin daño.

- Evita la re-victimización.
- Brinda un trato digno.
- Cuenta con la presencia física de instituciones del Estado y deben proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía.
- Promueve y fortalece el diseño y la implementación de rutas interinstitucionales de atención.
- Cuenta con instalaciones físicas que promueven una atención digna y humana:
 - Espacios dignos, amplios, individuales y privados para la atención y realización de diligencias (orientación, recepción de la denuncia, atención psicosocial y prestación de servicios por parte de otras instituciones).

1.3. ¿En qué ciudades se encuentran ubicados los CAPIV?

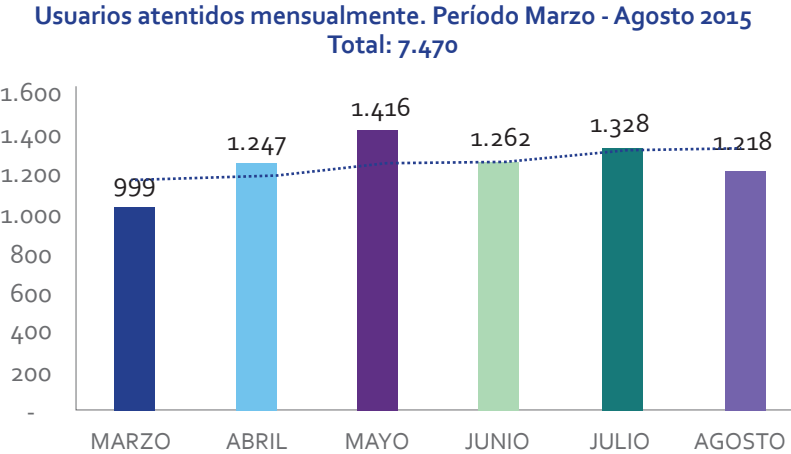
Tabla 1. CAPIV y fechas de funcionamiento

CIUDAD	FECHA INICIO DE FUNCIONAMIENTO
Bogotá, D.C	2/03/2015
Tumaco (Nariño)	10/04/2015
Buenaventura (Valle del Cauca)	1/05/2015
Barrancabermeja (Santander)	

1.4. Resultados CAPIV BOGOTÁ

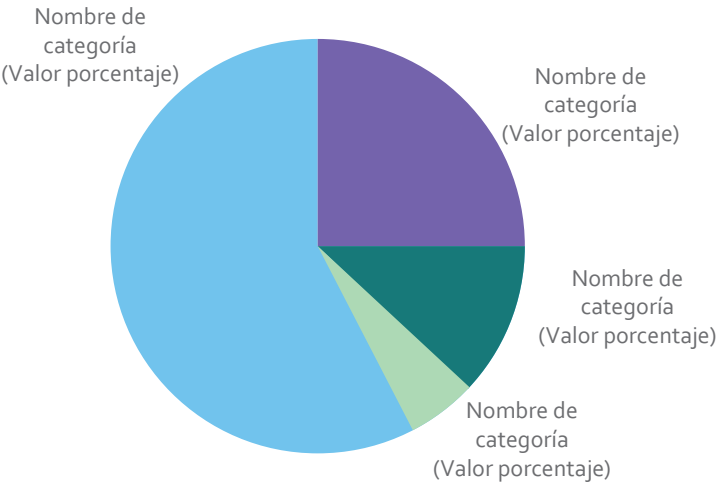
- Estadísticas generales – Marzo a agosto de 2015

Gráfica 1. Usuarios atendido CAPIV Bogotá – Marzo a Agosto de 2015



Gráfica 2. Número de denuncias por delito CAPIV Bogotá -
Marzo a Agosto de 2015

Número de denuncias por delito. Período Marzo - Agosto 2015

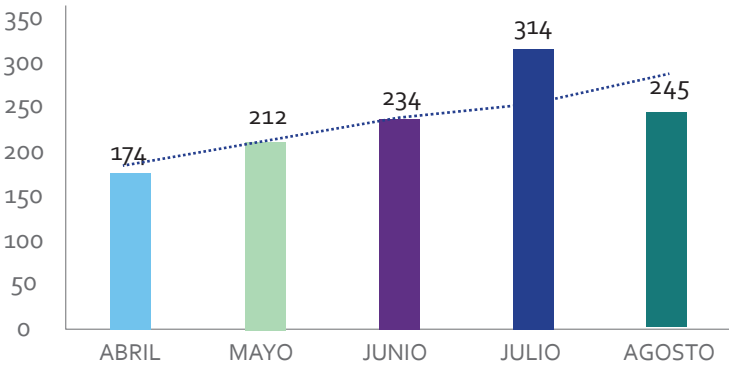


1.5. Resultados CAPIV TUMACO

- Estadísticas generales – Abril a agosto de 2015

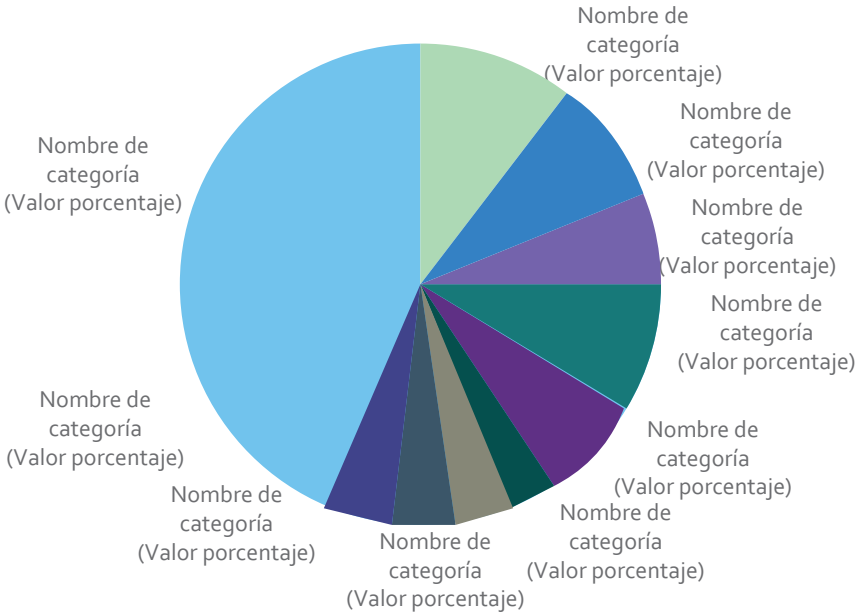
Gráfica 3. Número de denuncias por mes CAPIV Tumaco -
Abril a Agosto de 2015

Número de denuncias mensuales. Período Abril - Agosto 2015.
Total: 1.179



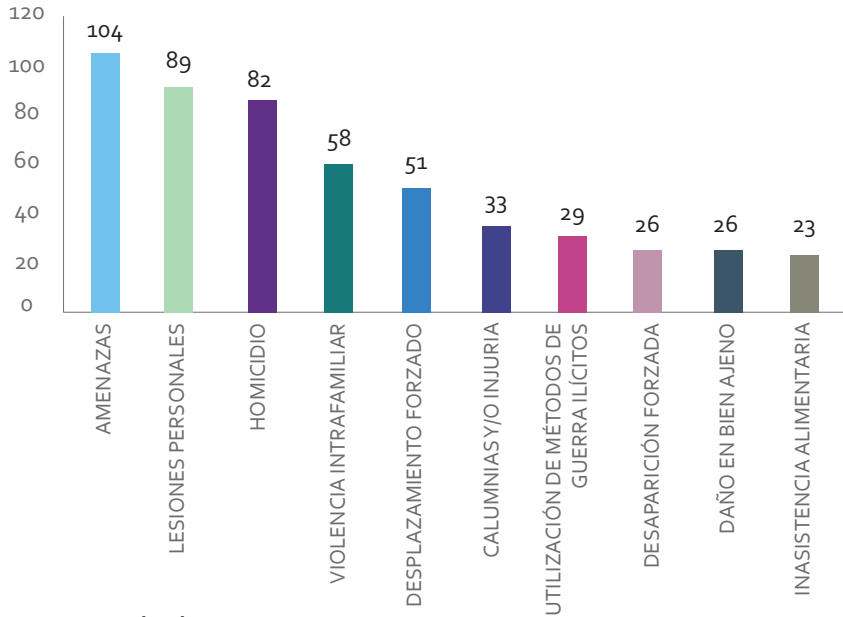
Gráfica 4. Número de denuncias por delito CAPIV Tumaco -
Abril a Agosto de 2015

Número de denuncias por delito. Período Abril - Agosto 2015.



**Gráfica 5. Delitos más denunciados CAPIV Tumaco -
Abril a Agosto de 2015**

10 delitos más denunciados. Período Abril - Agosto 2015

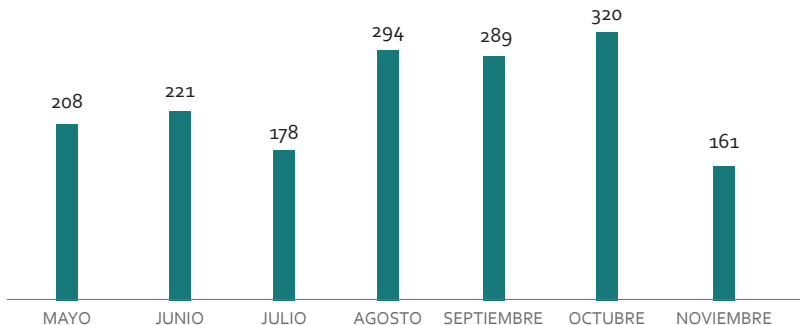


1.6. Resultados CAPIV BUENAVENTURA

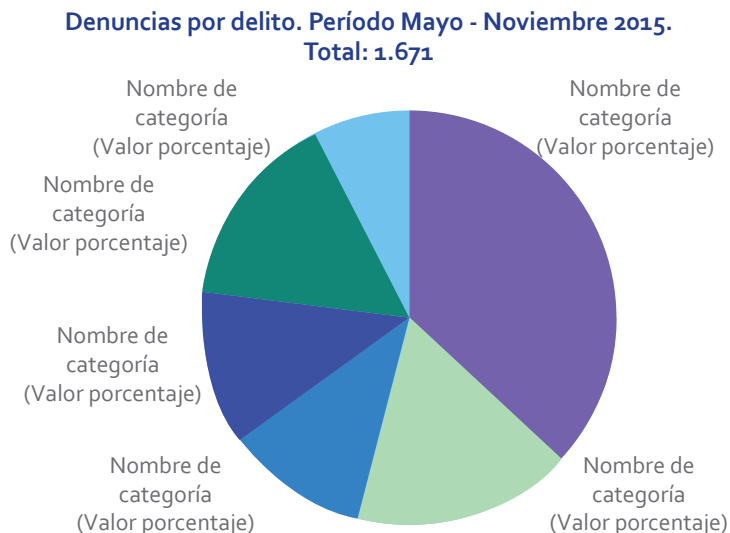
- Estadísticas generales – Mayo a noviembre de 2015

**Gráfica 6. Número de denuncias por mes CAPIV Buenaventura -
Mayo a noviembre de 2015**

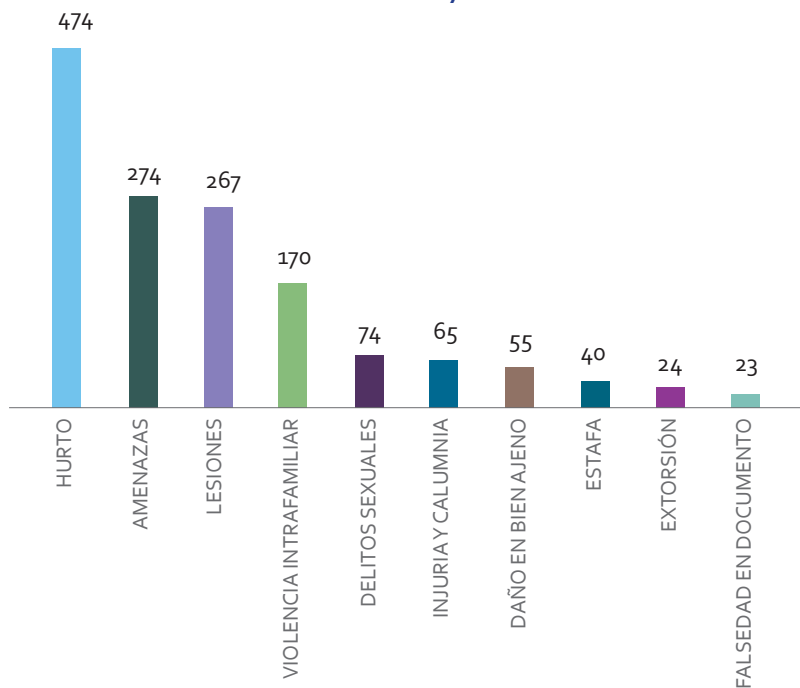
**Número de denuncias mensuales. Período Mayo - Noviembre 2015.
Total: 1.671**



Gráfica 7. Número de denuncias por delito CAPIV Buenaventura - Mayo a agosto de 2015



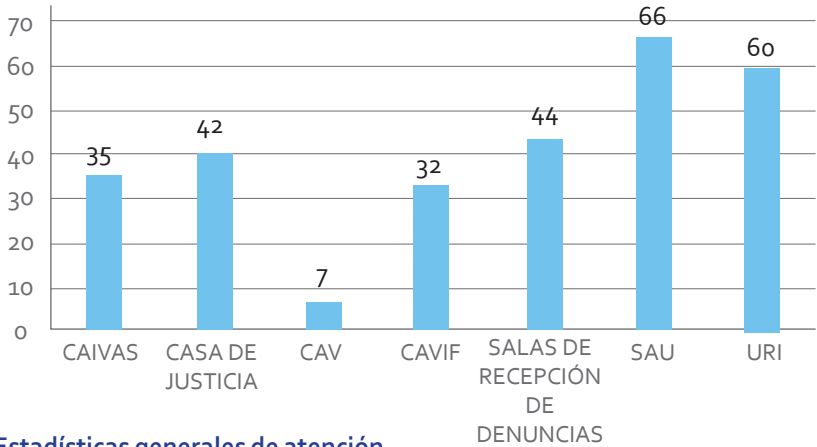
10 delitos más denunciados. Período Mayo - Noviembre 2015.
Total: 1.671



2. Otros modelos de atención

La Fiscalía cuenta con 286 modelos de atención a nivel nacional.

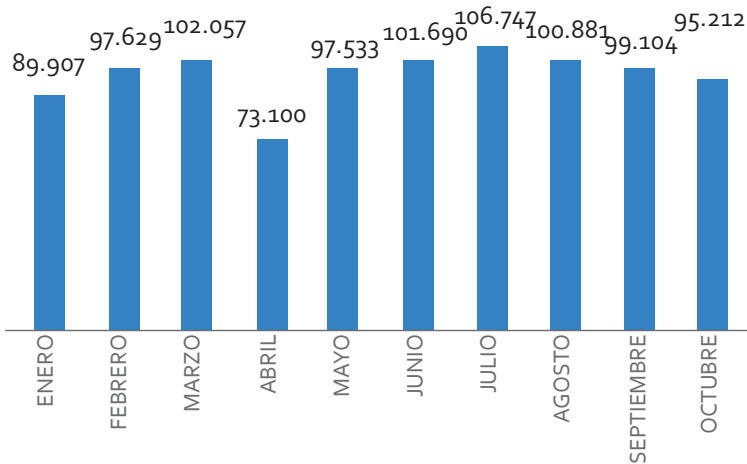
Gráfica 8. Cantidad de modelos de atención
Cantidad de modelos de atención a Nivel Nacional



3. Estadísticas generales de atención a víctimas

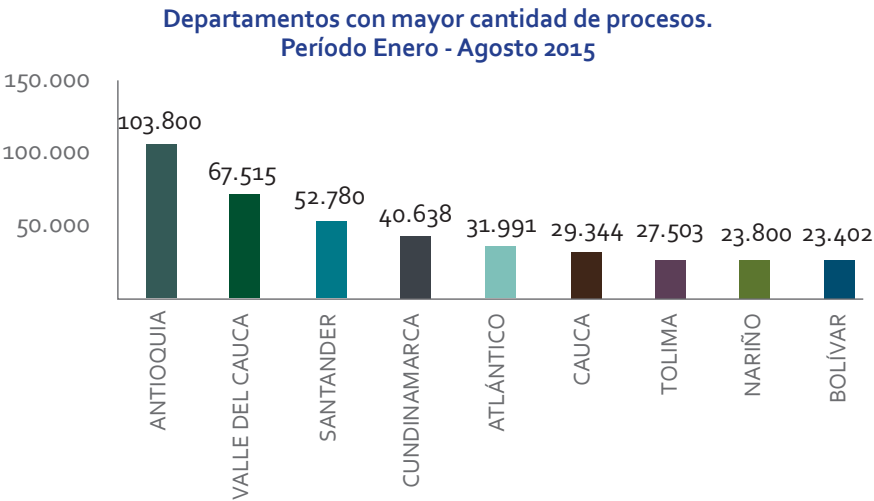
4. Gráfica 9. Cantidad de procesos, enero a agosto de 2015.
Información SPOA

Proceso por mes. Período Enero - Octubre 2015
Total: 963.860



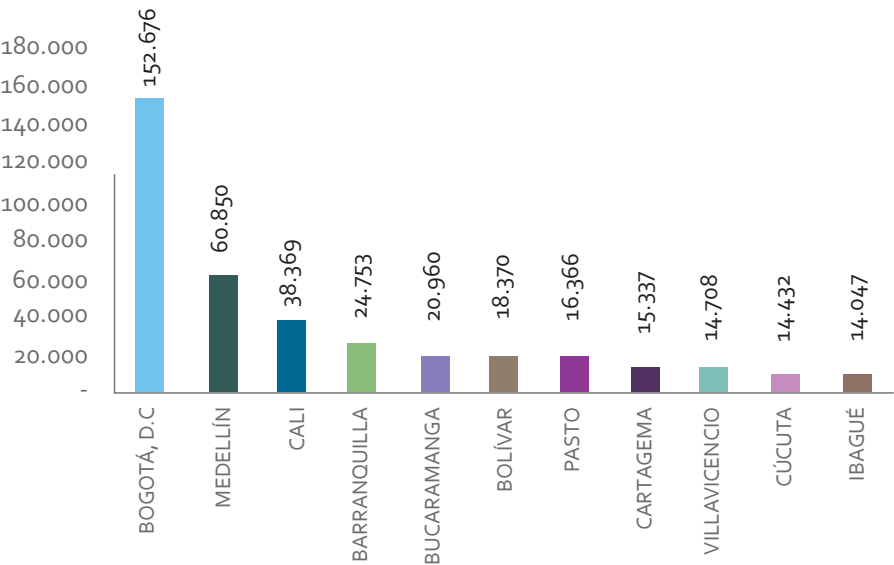
En cuanto a los departamentos y ciudades con la mayor cantidad de procesos, el sistema SPOA reporta la siguiente información:

Gráfica 10. Departamento con mayor cantidad de procesos, Enero a agosto de 2015.



Gráfica 11. Ciudades con mayor cantidad de procesos, Enero a agosto de 2015.

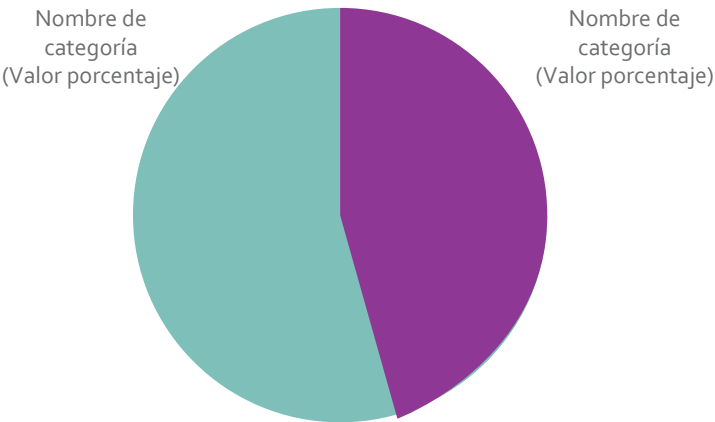
Ciudades con mayor cantidad de procesos. Período Enero - Agosto 2015



Es importante resaltar que Bogotá reporta el mayor número de casos no solo respecto a las ciudades sino a los departamentos.

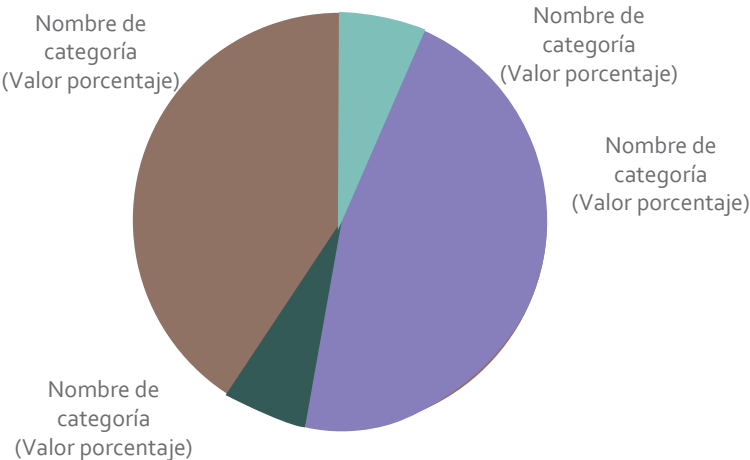
Gráfica 12. Distribución de población víctima por género, Enero a julio de 2015. Información SPOA

Víctimas por género. Período Enero - Julio 2015. Total: 456.852



Gráfica 13. Distribución de población víctimas por género y edad, Enero a Julio de 2015. Información SPOA

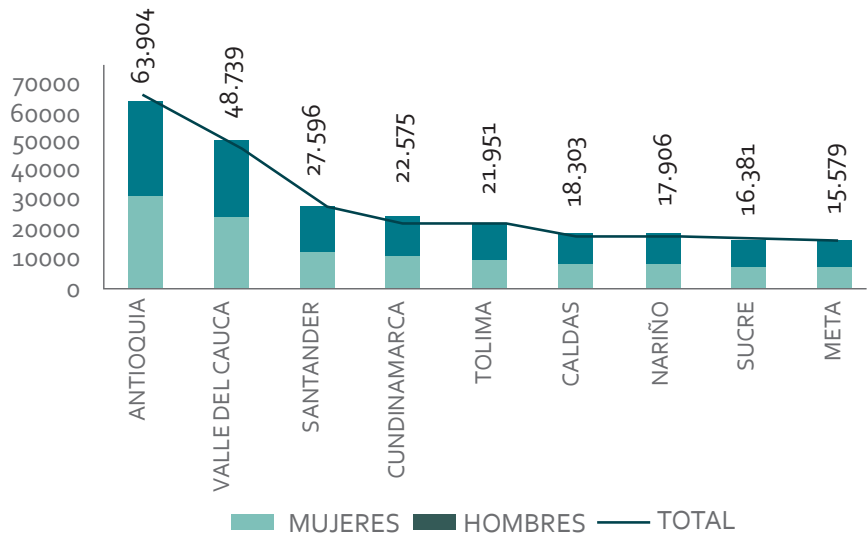
% Víctimas por género y edad. Período Enero - Julio 2015



En el caso de los departamentos y ciudades
con el mayor número de víctimas:

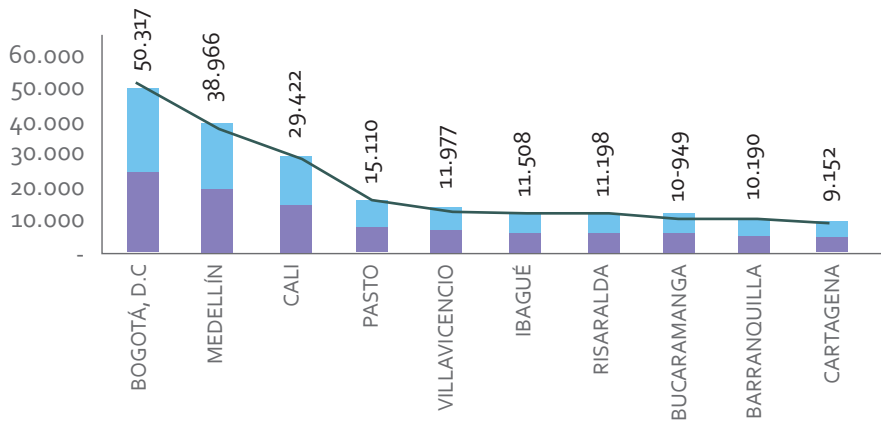
**Gráfica 14. Departamentos con mayor cantidad de víctimas,
Enero a Julio de 2015. Información SPOA**

Departamentos con mayor cantidad de víctimas. Período Enero -Julio 2015



**Gráfica 15. Ciudades con mayor cantidad de víctimas,
Enero a Julio de 2015. Información SPOA**

10 ciudades con la mayor cantidad de víctimas. Período Enero - Julio 2015



Así como en el caso de número de procesos, el número de víctimas que denunciaron en Bogotá entre enero y julio de 2015 es altamente significativo respecto a los departamentos y demás ciudades.

4.1. Víctimas fuera y dentro del conflicto armado, según los delitos de la Ley 1448 de 2011

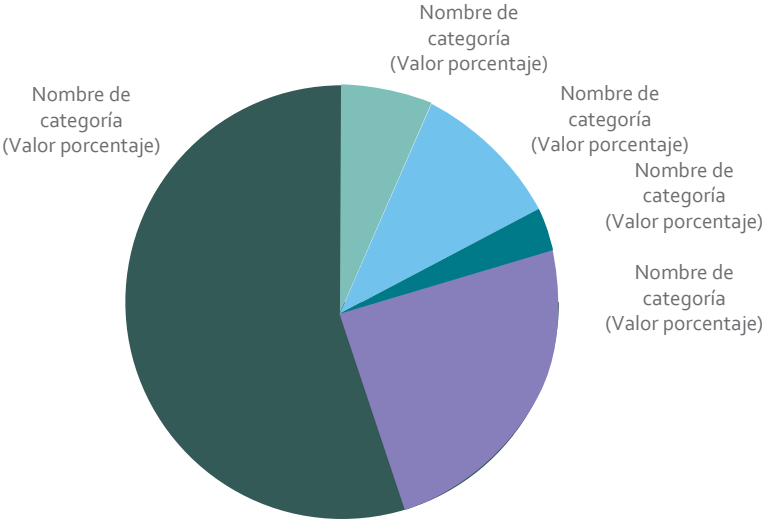
La información que se presenta se refiere a la fecha de denuncia. Es importante aclarar que el hecho que se hayan tomado como referencia delitos incluidos en la Ley 1448, no significa que las estadísticas se circunscriban al número de víctimas en el marco del conflicto. Es necesario hacer énfasis en que los delitos incluyen diferentes artículos y las respectivas circunstancias de agravación punitiva especificadas en el Título IV (delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales).

Tabla 3. Número de víctimas por delitos referidos en la Ley 1448 de 2011, Enero a Agosto de 2015. Información SPOA

Amenazas	23.036
Violencia sexual	9.996
Desplazamiento forzado	5.518
Desaparición forzada	2.858
Secuestro	1.398
Reclutamiento ilícito	312
Actos de terrorismo	149
Usurpación de tierras	130
Tortura	108
Homicidio en persona protegida	11
Lesiones en persona protegida	7

La siguiente gráfica expone los correspondientes porcentajes del número de víctimas recién presentados.

Gráfica 16. Porcentaje de víctimas por delitos referidos en la Ley 1448 de 2011, Enero a Agosto de 2015. Información SPOA
% Víctimas de referidos en la ley 1448 de 2011 - Enero - Agosto 2015



4.2. Víctimas en el marco de la Justicia Transicional

Según información suministrada por la Dirección Nacional de Justicia Transicional, entre el 2014 y parte de 2015, se han tomado 59.157 registros de hechos atribuibles a víctimas en el marco de la justicia transicional.

Tabla 4. Número de registros de hechos atribuibles, años 2014 y 2015.
Dirección Nacional de Justicia Transicional

DEPARTAMENTO	2014	2015
Amazonas	0	30
Antioquia	4519	2164
Arauca	1417	661
Atlántico	3555	3421

Bogota	4349	2768
Bolívar	790	329
Boyacá	315	121
Caldas	240	134
Caquetá	500	217
Casanare	283	634
Cauca	1967	346
Cesar	2557	2060
Chocó	128	577
Cundinamarca	189	168
Córdoba	958	2201
Guaviare	35	9
Huila	359	78
La guajira	499	282
Magdalena	3879	1839
Meta	984	523
Nariño	372	166
Norte de Santander	825	575
Putumayo	69	155
Quindío	27	46
Risaralda	164	55
Santander	2679	2694
Sucre	520	1096
Tolima	650	814
Valle del cauca	843	1294
Vaupés	18	0
Vichada	1	9
TOTAL ANUAL	33.691	25.466

4.3. Ferias de servicios

La Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios tiene entre sus funciones gestionar el fortalecimiento de canales de acceso para la denuncia. Las “Ferias de Servicios” tienen como objetivo facilitar el acceso a la justicia con calidades determinadas, de una región específica y/o de hechos victimizantes particulares. Así mismo, buscan visibilizar de manera integral la oferta institucional de la Fiscalía, como es la orientación y recepción de denuncias, e información e impulso de casos, y de las instituciones que tienen como función el restablecimiento de los derechos vulnerados, promoviendo la participación de la institucionalidad local y regional. Además de brindar una atención humanizada, las “Ferias de Servicios” generan condiciones de seguridad y confianza en la población víctima.

Tabla 5. Ferias de servicios

Fecha	Ciudad	Departamento	No. personas atendidas por la FGN	No. de registros hechos atribuibles / denuncias recepcionadas
Agosto de 2014	San Francisco	Antioquia	996	946
Febrero de 2015	Buenaventura	Valle del Cauca	207	23
Noviembre de 2015	Urrao	Antioquia		
Total			1.203	969

San Francisco, Antioquia

Durante los 3 días de la jornada, la FGN atendió a 996 personas:

Tabla 6. Justicia Transicional – Feria de servicios San Francisco, Antioquia

JUSTICIA TRANSICIONAL	
Registros de hechos atribuibles	920
Registros de hechos atribuibles relacionados con delitos de violencia basada en género	10
Entrevistas de hechos que están siendo investigados por el Fiscal del Despacho 29 de Justicia Transicional, cuyas víctimas corresponden a familiares del postulado José Luis Mejía Ramírez, alias “Byron” o “Boina Verde”, respecto de quien se solicitó imputación de cargos	3
Asignación de citas para ser atendidos por el Call-center	50
Total	983

Tabla 7. Justicia permanente – Feria de servicios San Francisco, Antioquia

JUSTICIA PERMANENTE	
Denuncias recibidas	13

Tabla 8. Grupo eje temático desaparición y desplazamiento forzado – Feria de servicios San Francisco, Antioquia

GRUPO EJE TEMÁTICO DE DESAPARICIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO - SEDE MEDELLÍN	
Declaraciones a víctimas de desplazamiento forzado	69
Proceso impulsado en forma satisfactoria	Proceso con radicado 724725 ,Fiscalía 54 Especializada de Desaparición y Desplazamiento Forzado – Medellín. Afectados habitantes de aproximadamente 15 veredas de Aquitania, jurisdicción de de San Francisco – Antioquia, por accionar conjunto del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y el Frente 47 de las FARC contra paramilitares del Bloque Magdalena Medio. Estos hechos dieron lugar a delito de desplazamiento forzado y otros conexos como secuestro masivo, extorsiones, reclutamiento ilícito de menores, homicidios en personas protegidas y amenazas.

**Tabla 9. Grupo de identificación humana y grupo de desaparecidos –
Feria de servicios San Francisco, Antioquia**

GRUPO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA Y GRUPO DE DESAPARECIDOS ADSCRITOS A LA SECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - SUBDIRECCIÓN MEDELLÍN	
Acciones realizadas	<ul style="list-style-type: none"> • Se atendió a la población de San Francisco y sus alrededores, la cual ha sufrido el delito de la desaparición forzada. Se informó sobre las diferentes estrategias de la FGN para ubicarlos, exhumarlos (si es el caso), identificarlos y devolverlos a sus familias. • Exhibición en video de prendas y accesorios de cadáveres en restos óseos que reposan en el Laboratorio de Identificación Humana del CTI Medellín, y que aún están en condición de no identificados. • Sensibilización y sociabilización. • Exhibición de rostros de cadáveres ubicados mas no identificados (los rostros fueron previamente tratados para lograr la exhibición digna). • Exhibición de listado de cadáveres identificados y no reclamados. • Exhibición de listado de cuerpos exhumados de fosas clandestinas en zona rural de San Francisco y del cementerio. Estos cuerpos se encuentran en custodia en el laboratorio y no están identificados.
Personas atendidas para reportar desaparición	25 personas para reportar desaparición, de las cuales 22 ya había registrado la desaparición en el SIRDEC, 2 reportaron por primera vez y a una se le informó que su familiar se encontraba en el laboratorio en proceso de identificación.
Resultados de personas atendidas para reportar desaparición	<ul style="list-style-type: none"> • VINASCO VALENCIA JAIRO ENRIQUE, CC 3.553.122. Desaparecido en 1975 en San Francisco. Al realizar los cruces respectivos se encontró que fue muerto en forma violenta en Puerto López. En compañía de psicólogo se le notifica a la mamá. • LUZ DARY GIRALDO VINASCO y WILSON ARLEY GIRALDO VINASCO. Hermanos desaparecidos y de quienes el jefe paramilitar Ramón Isaza aceptó cargos por su muerte y por tirar al Río Magdalena sus cuerpos. Se encontró dictamen de identificación. • CIRO MARÍN MARTA INÉS. Exhumada por la Unidad Na-

	<p>cional de Justicia Transicional en Medellín. Sus restos reposan en el laboratorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALBERTO DE JESÚS GIRALDO MARÍN. Al parecer se encuentra inhumado en el cementerio de Rionegro, Antioquia, información que está en proceso de verificación. • ABRAHAM MARTINEZ VALENCIA. Al parecer, Ramón Isaza es el responsable de su desaparición, muerte e inhumación en la Danta, Jurisdicción de Sonsón - Antioquia. La esposa conoce del sitio. • ALBEIRO ANTONIO HENAO TORO. Reclutado a los 14 años por el ELN. La familia informa que murió en combate y que fue inhumado. La familia tiene las coordenadas. • PASCUAL DE JESÚS POSADA AGUDELO. Reclutado a los 22 años. Está inhumado como cadáver sin identificar en el cementerio de Rionegro. • WILLIAM DE JESÚS AGUDELO CIRO. Menor de 17 años, presuntamente muerto en enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. La familia hace seguimiento una vez desaparece, se entera que murió y fue recogido por un helicóptero del Ejército. Estaría en el cementerio de Rionegro.
--	--

Buenaventura, Valle del Cauca

Durante los 3 días de la jornada, la Fiscalía General de la Nación atendió a 207 personas, de la siguiente manera:

Tabla 10. Tipos de atención - Feria de servicios Buenaventura, Valle del Cauca

TIPO DE ATENCIÓN	NO. DE PERSONAS ATENDIDAS
Entrevistas por parte de Policía Judicial	63
Muestra Medicina Legal	59
Información sobre avances de casos	45
Denuncias recepcionadas	23
Oficios remitidos a otras ciudades para muestras de Medicina Legal	17
Total	207

**Tabla 11. Grupo de identificación humana y grupo de desaparecidos -
Feria de servicios Buenaventura, Valle del Cauca**

GRUPO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA Y GRUPO DE DESAPARECIDOS ADSCRITOS A LA SECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - SUBDIRECCIÓN CALI	
Acciones realizadas	<ul style="list-style-type: none"> • Se atendió población de Buenaventura que ha sufrido el delito de desaparición forzada. Se informó sobre las diferentes estrategias de la FGN para ubicarlos, exhumarlos, identificarlos y devolverlos a sus familias. Se les informó del estado de su investigación. • Sensibilización y sociabilización • Verificación de registro del desaparecido en SIRDEC y SIJUF • Socialización de la información sobre el caso (siempre de manera prudente y sin violar la reserva de la investigación). Socialización de la base de datos, y de la importancia y el derecho que tienen las víctimas de registrarse en ella. • Se verificó datos de las personas consignados en SIRDEC. • Exhibición en video de prendas y accesorios de cadáveres.

Urrao, Antioquia

4.4. Jornadas

4.4.1. Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno

La FGN apoya y participa en la realización de jornadas de toma de declaraciones y denuncias de mujeres sobrevivientes de violencia sexual dentro y fuera del conflicto, con el objetivo de facilitar canales de acceso a la justicia y generar condiciones y garantías para que las mujeres puedan denunciar con seguridad y sin riesgo de una segunda victimización.

Desde la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios se ha coordinado y acompañado a la Dirección Nacional de Justicia Transicional en las siguientes jornadas de atención:

Tabla 12. Jornadas de violencia sexual en el marco del conflicto armado - 2014

AÑO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. DE VÍCTIMAS ATENDIDAS
2014	Barrancabermeja	Santander	60
	Barranquilla	Atlántico	64
	Cali	Valle del Cauca	56
	Calima El Darién	Valle del Cauca	57
	Cúcuta	Norte de Santander	76
	Charalá	Santander	15
	Palmira	Valle del Cauca	59
	Popayán	Cauca	60
	Quibdó	Chocó	73
	Riohacha	La Guajira	84
	Santa Marta	Magdalena	74
	Silvia	Cauca	36
	Taminago	Nariño	34
	Tolemaida	Tolima	50
	Valledupar	Cesar	63
	TOTAL		861

Tabla 13. Jornadas de violencia sexual en el marco del conflicto armado - 2015

AÑO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. DE VÍCTIMAS ATENDIDAS
2015	Barrancabermeja	Santander	48
	Bosconia/Barranquilla	Cesar/Atlántico	168
	Bucaramanga	Santander	61
	Cartagena	Bolívar	47
	El Peñol	Antioquia	67
	Pasto	Nariño	67
	Quibdó	Chocó	21
	Santa Marta	Magdalena	145
	Sincelejo	Sucre	71
	Villavicencio	Meta	70
	TOTAL		765

4.4.2. Víctimas militares en situación de discapacidad



La Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios ha acompañado, por medio de acciones de atención psicosocial, a la Dirección Nacional de Justicia Transicional en el desarrollo de 26 jornadas interinstitucionales de atención a víctimas de minas antipersona, artefactos explosivos, municiones sin explotar y armas de fuego.

Tabla 14. Jornadas de víctima militares - 2014

AÑO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. DE VÍCTIMAS ATENDIDAS
2014	Bogotá (CRM BR13)	Bogotá, D.C.	33
	Bogotá (Teatro Patria)	Bogotá, D.C.	416
	Bucaramanga	Santander	588
	Cali	Valle del Cauca	700
	Coveñas	Sucre	345
	Florencia	Caquetá	384
	Ibagué	Tolima	693
	Santa Marta	Magdalena	601
	Villavicencio	Meta	353
	Yopal	Casanare	369
	TOTAL		4482

Tabla 15. Jornadas de víctima militares - 2015

AÑO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. DE VÍCTIMAS ATENDIDAS
2015	Barranquilla/Cartagena	Atlántico/Bolívar	352
	Bogotá (Puente Aranda)	Bogotá, D.C.	547
	Bogotá (Cantón Sur)	Bogotá, D.C.	20
	Bogotá (cárcel La Picota)	Bogotá, D.C.	40
	Bogotá (cárcel La Modelo)	Bogotá, D.C.	27
	Bogotá (Metropolitana)	Bogotá, D.C.	10
	Buenaventura/Cali	Valle del Cauca	197
	Facatativá	Cundinamarca	16
	Facatativá	Cundinamarca	86
	Medellín	Antioquia	309
	Montería	Córdoba	125
	Neiva	Huila	198
	Leticia	Amazonas	30
	Pereira	Risaralda	168
	Quibdó	Chocó	16
	San Vicente del Caguán	Caquetá	32
	TOTAL		2173

4.5. Apoyo a las Direcciones Nacionales y Seccionales en la atención a la población víctima

4.5.1. Justicia Transicional

Para facilitar el acceso a la justicia a las víctimas en el marco de la justicia transicional, se han establecido lineamientos en pro de la visibilización de nuevas víctimas. Estas actividades han girado en torno a (i) la realización de jornadas de atención para la toma de registros de hechos atribuibles; (ii) brindar apoyo psicosocial en audiencias, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; (iii) la realización de jornadas

de entregas de restos óseos, apoyando al Grupo de Exhumaciones; y (iv) la actualización de la georreferenciación e inventario físico de los casos de los diferentes despachos que documentan hechos imputables a los máximos responsables. De manera particular, se han implementado una serie de mecanismos para la atención a estas víctimas, tales como:

- De forma personalizada: la víctima se acerca a los diferentes puntos de atención a víctimas con que cuenta la Dirección Nacional de Justicia Transicional a nivel nacional (Bogotá, Medellín, Montería, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla). Así mismo, todos los

Despachos Fiscales de justicia transicional atienden y orientan víctimas.

- Medios publicitarios, servicio call center y línea gratuita.
- Medio escritos (peticiones remitidas de otras instituciones).
- Jornadas de atención.

4.5.2. Sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Acompañamiento y atención psicosocial a víctimas, familiares, y representantes y líderes de víctimas, en el desarrollo de diferentes diligencias judiciales en el marco del proceso penal. De igual forma, se brindó apoyo y orientación a los fiscales frente a la atención a la población víctima.

Tabla 16. Acompañamiento a casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso	Población sujeto	Acciones desarrolladas	Documentos elaborados
Palacio de Justicia	20 víctimas (tortura, secuestro y desaparición forzada)	Atención psicosocial y jurídica Apoyo emocional Atención en crisis Entrevista psicosocial orientación y redireccionamiento a otras instituciones	Propuesta de articulación interinstitucional para la atención psicosocial a las víctimas de tortura y familiares de desaparición, de los hechos sucedidos el 7 y 8 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia
La Esperanza	20 familiares víctimas (desaparición forzada)		
La Rochela		Apoyo en las respuestas a las solicitudes de los representantes de víctimas	

4.5.3. Frontera con Venezuela

Con ocasión de los graves hechos presentados a raíz de la deportación irregular de connacionales de Venezuela a Colombia, la Subdirectora Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios fue delegada por el Fiscal General con el fin de (i) diseñar la metodología de atención en el marco de la emergencia, (ii) participar activamente, como representante de la institución, en el Puesto de Mando Unificado liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; y (iii) recibir las denuncias.

4.5.4. Caso La Escombrera – Comuna 13 de Medellín

Apoyo por parte de la Fiscalía General de la Nación en el establecimiento de un acuerdo entre la población víctima y la alcaldía de Medellín, para la atención psico-social y medica de esta población.

5. Prevencion del delito

5.1. Programa Futuro Colombia



En el primer semestre de 2015, el Programa de Prevención del Delito Futuro Colombia ajustó sus objetivos y líneas de acción para adelantar abordajes de prevención en espacios sociales, comunitarios e individuales, en aras de aportar en la resolución pacífica de conflictos y la prevención de conductas delictivas.

Tabla 17. Líneas estratégicas y resultadas principales Programa Futuro Colombia

Línea estratégica	Prevención social comunitaria	Prevención situacional	Prevención integral
Objetivo	Generar acercamiento con la comunidad, para identificar necesidades y ejecutar acciones que contribuyan a la mitigación de factores de riesgo que elevan los fenómenos delictivos	Analizar y comprender el fenómeno delictivo desde la perspectiva preventiva, y apoyar la labor misional de la FGN mediante la remisión de posibles hechos punibles a las unidades respectivas	Incentivar procesos de construcción de cultural alternativa que favorezcan el protagonismo social y el desarrollo humano, por medio de realización de talleres, conferencias, ferias de servicio, campañas, entre otros

Resultados	26 procesos de intervenciones comunitaria en 25 Seccionales	Se han remitido 141 casos a la Sección de Análisis Criminal (SAC), como fuente no formal	74.347 personas informadas en temas como Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Trata de Personas Reclutamiento forzado y violencia escolar. 237 centros educativos o espacios intervenidos
------------	---	--	---

5.2. Comité técnico interinstitucional para ampliar y cualificar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, dentro y fuera del conflicto armado

El 9 de febrero de 2015 se suscribió Carta de Intención entre la Fiscalía y otras instituciones, con la finalidad de sumar voluntades y compromisos para la prevención, atención, protección, investigación y judicialización de víctimas, incorporando de manera adecuada la perspectiva de género y el enfoque diferencia en cada uno de los procesos.

Tabla 18. Instituciones que suscribieron Carta de Intención para la conformación del Comité técnico interinstitucional

Fiscalía General de Nación
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Ministerio de Justicia y del Derecho
Defensoría del Pueblo
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial

5.3. Alfabetización judicial de grupos étnicos

Se han realizado procesos in situ de alfabetización judicial y de fortalecimiento de las relaciones y vínculos con grupos étnicos, con el fin de diseñar e implementar estrategias y acciones contextualizadas que respondan a las necesidades e intereses de la población víctima. Los grupos étnicos con los que se ha trabajado son los siguientes:

Tabla 19. Alfabetización judicial con grupos étnicas

Comunidad étnica	Nombres de resguardos/ comunidades indígenas/ consejos comunitarios	Cantidad	Depto.
INDÍGENAS	Embera Katío - Resguardo Andabu - Comunidad Playón	3	Antioquia
	Embera Katío - Resguardo Majore Ambura - Comunidad Santa María		
	Embera Katío - Comunidad Valle de Perdidas Jencameconda		
AFRO COLOMBIANOS	Comunidad Mande	2	
	Comunidad Punta de Ocaido		
	TOTAL	5	

6. Diagnósticos para el fortalecimiento del acceso a la administración de justicia y el mejoramiento de la atención integral

- Diagnósticos sobre los fenómenos criminógenos y de victimización del distrito de Buenaventura (Valle del Cauca), y de los municipios de Apartadó y Urrao (Antioquia).

- Realización de diagnósticos sobre la atención brindada en los Centros de Atención de Justicia Transicional.
- Diagnósticos de los modelos de atención a víctimas y usuarios a nivel nacional.

7. Resoluciones

- Resolución 0099 del 15 de octubre de 2014 de la FGN, “Por medio de la cual se establece la organización y funcionamiento de las Subdirecciones Seccionales de Atención y a Víctimas y Usuarios”.
- Resolución 1948 del 7 de noviembre de 2014 de la FGN, “Por medio de la cual se crea el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas – CAPIV de la Fiscalía General de la Nación, y se delega una función especial”.

8. Procedimientos y guías para la atención integral a víctimas y usuarios

- Procedimiento general para la atención y orientación a las víctimas y al ciudadano.
- Guía para la atención de agresiones con agentes químicos o sustancias corrosivas.
- Acta de derechos de las víctimas de agresiones con agentes químicos o sustancias corrosivas.
- Guía para la atención del delito de violencia intrafamiliar.
- Guía para la atención del delito de inasistencia alimentaria.
- Guía de procedimiento para los sistemas de turnos WEB o formato de control de tiempos.
- Guía para la atención jurídico – psicosocial primaria a víctimas militares en situación de discapacidad: víctimas de minas antipersona, artefactos explosivos, armas de fuego y municiones sin explotar.

9. Estrategias de atención al ciudadano(a)

Desarrollo de estrategias de servicios e información virtuales:

- Nueva estructura al link de servicio al ciudadano de la página de la Fiscalía General de la Nación <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano>.
- Correo denominado atencionalciudadano@fiscalia.gov.co, a fin de que la ciudadanía pueda interponer su queja o reclamo de manera virtual.
- Diseño y divulgación de la carta de trato digno <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno/>.
- Banner en los que se informa al ciudadano/a respecto a la atención de delitos <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/>.

Lineamientos

- Manual de Atención al Ciudadano.
- Guía de funcionamiento de las Oficinas de Servicio al Ciudadano.
- Procedimiento de quejas y reclamos.
- Guía y herramienta para la aplicación de encuestas de satisfacción.
- Memorando con lineamientos para divulgación de carta de trato digno.
- Memorando lineamientos para quejas y reclamos.

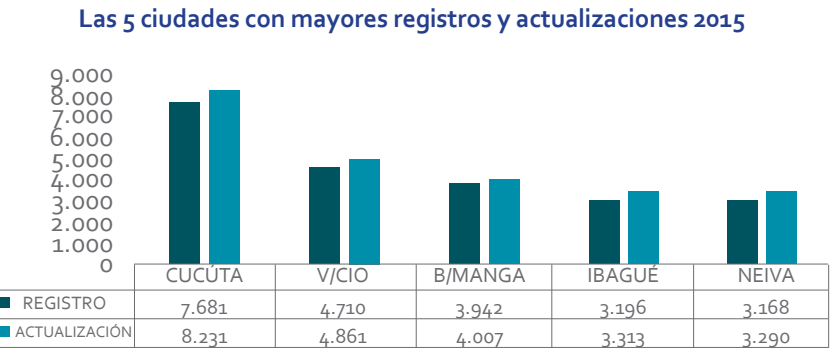
**Actualización de bases de datos
y antecedentes judiciales**

- Registro: órdenes de captura, sentencias condenatorias y medidas de aseguramiento.
- Actualización: extinción de sentencias condenatorias, cancelación o prórroga de órdenes de captura, y revocatoria o sustitución de medidas de aseguramiento.

Tabla 20. Registros y actualizaciones, enero a agosto de 2015

	REGISTROS	ACTUALIZACIONES
TOTAL PAÍS	47.484	48.368

Gráfica 17. Ciudades con la mayor cantidad de registros y actualizaciones, enero a agosto de 2015

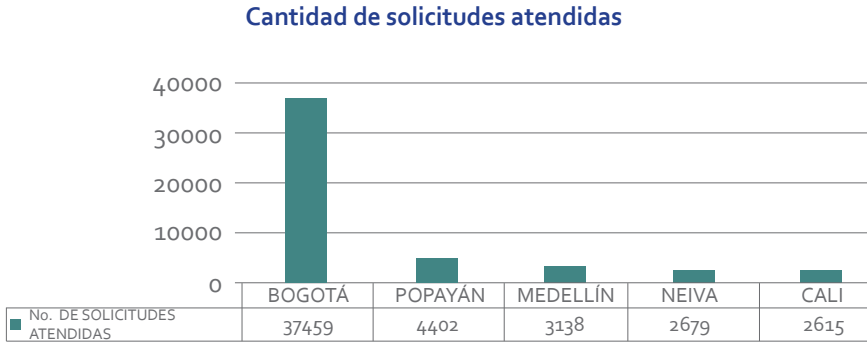


- Atención de solicitudes de información de antecedentes, por parte de diferentes autoridades a nivel nacional.

Tabla 21. Cantidad solicitudes atendidas, enero a agosto de 2015

	SOLICITUDES ATENDIDAS
TOTAL PAÍS	60.686

Gráfica 18. Ciudades con la mayor cantidad de solicitudes atendidas, Enero a Agosto de 2015



10. Tecnologías y sistemas de la información

- Coordinación en el diseño y construcción de la caracterización de los sistemas misionales de la FGN, en lo relacionado con la inclusión de variables de enfoque diferencial de todos los intervinientes en el proceso penal.
- Diseño, estructuración e implementación de un programa (prototipo software) visualizador de estadísticas de la SNAVU.
- Generación de informes estadísticos de seguimiento a los modelos de atención y dinámicas de las denuncias.
- Adquisición de herramienta KAWAK, la cual permite realizar control y seguimiento a las quejas y reclamos a nivel nacional.
- Inclusión en el módulo MAR –EWB de la opción de consulta exclusiva de antecedentes penales (sentencias condenatorias para autoridades y ciudadanía).

11. Capacitaciones y otras acciones

- Capacitación a servidores públicos de la FGN en el manejo y operación del sistema de turnos.
- Capacitación a servidores públicos de las 35 Direcciones Seccionales, en el manejo e implementación de las rutas del sistema de turnos.
- Sensibilización a servidores públicos de la FGN y de instituciones participantes, frente a los objetivos y funcionamiento del Centro.
- Visitas al CAPIV de Bogotá de organismos de la comunidad internacional, tales como la Unión Europea (UE), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); y embajadas de países como Francia, el Grupo Centroamericano (GRUCA) y el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe (GRULA).

12. Subdirecciones seccionales de atención a víctimas y usuarios



Las Subdirecciones Seccionales de Atención a Víctimas y Usuarios fueron constituidas por medio del artículo 35 del Decreto No. 016 de 09 de enero de 2014, “Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía”. Así mismo, la Resolución 00099 del 15 de octubre de 2014 establece la “(...) organización y funcionamiento de las Subdirecciones Seccionales de Atención a Víctimas y Usuarios”.

A la fecha, se cuenta con Subdirecciones Seccionales de Atención a Víctimas y Usuarios en las siguientes 12 Direcciones Seccionales.

Tabla 22. Direcciones Seccionales con Subdirecciones Seccionales de Atención a Víctimas y Usuarios

Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Chocó
Cundinamarca
Meta
Nariño
Norte de Santander
Sucre
Tolima
Valle del cauca



Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52 - 01 Bogotá
Teléfono: 57 (1) 570 2000 / www.fiscalia.gov.co
 Fiscalía General de la Nación
 @FiscaliaCol